

Informe de relatoría

XIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos

28 de agosto de 2024



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| RESUMEN EJECUTIVO | 6 |
| I. RENDICIÓN DE CUENTAS | 6 |
| 1. Defensoría del Pueblo | 7 |
| 2. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura | 8 |
| 3. Estudios | 9 |
| 4. Educación | 10 |
| 5. Descentralización | 11 |
| 6. Igualdad y No Discriminación | 11 |
| Unidad Especializada en Género | 11 |
| Unidad Población en Situación de Discapacidad | 11 |
| Unidad Migrantes | 12 |
| Unidad Personas Mayores | 12 |
| Unidad Étnico Racial | 13 |
| 7. Competencias complementarias | 13 |
| Salud Mental | 13 |
| Búsqueda de Personas Detenidas y Desaparecidas | 14 |
| Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria | 15 |
| 8. Intervenciones de los participantes | 16 |
| II. PRESENTACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO | 23 |
| 1. Grupo de trabajo sobre las Reglas de Brasilia con énfasis en discapacidad ... | 23 |
| 2. Grupo de trabajo sobre discapacidad y educación inclusiva | 24 |
| 3. Grupo de trabajo sobre los derechos de las personas mayores | 25 |
| 4. Grupo de trabajo sobre conciliación de la vida personal, laboral y familiar... | 26 |
| 5. Grupo de trabajo sobre el incumplimiento de la ley 19.122 | 27 |

| | |
|---|----|
| 6. Grupo de trabajo sobre discriminación de religiones de matriz afrodescendiente | 28 |
| 7. Grupo de trabajo sobre la revisión de la figura de inimputabilidad penal por afectación psiquiátrica y cumplimiento de medidas de seguridad curativas..... | 29 |
| 8. Grupo de trabajo sobre el derecho a la alimentación | 30 |
| 9. Intervenciones de los participantes | 31 |
| III. INSTANCIA PLENARIA | 36 |
| 1. Bloque de discusión 1 - Eje 1: Alianzas estratégicas | 37 |
| 2. Bloque de discusión 2 - Eje 3: Exigencia y monitoreo | 39 |
| 3. Bloque de discusión 3 - Eje 4: Promoción de derechos e incidencia | 45 |
| 4. Bloque de discusión 4 - Otros temas | 54 |
| IV. CAMBIO DE PRESIDENCIA Y CIERRE | 56 |
| V. ANEXO | |
| A) Lista de personas participantes de la Asamblea | |
| B) Lista de personas participantes por bloque de discusión | |
| C) Declaración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos | |
| D) Declaración de las organizaciones sociales: | |
| - Ágora. Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria | |
| - Asamblea Hue Mirí | |
| - Asociación Civil Cippus | |
| - Asociación Civil El Abrojo | |
| - Asociación Civil Grupo Solidario A Redoblar | |
| - Asociación Civil El Paso | |
| - Asociación Civil Familias Presentes | |
| - Asociación Civil OBSUR | |
| - Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU) | |
| - Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) | |
| - Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad (AMUD) | |
| - Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares Gerontológicos (AUDAAG) | |
| - Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO) | |
| - Centro de Comunicación Virginia Woolf - Cotidiano Mujer | |

- Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET)
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
- Centro de Vida Independiente Becky Sabah
- Charrúa Oipik Udimar
- Clan Gubaitase Charrúa
- Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) - Secretaría de DDHH
- Colectivo Ovejas Negras
- Comisión Memorias de la Costa
- Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad - Soriano
- Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV - Uruguay)
- Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca
- Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití
- Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA)
- CRySOL- Asociación de expresas y expresos políticos del Uruguay
- Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)
- Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)
- Fundación Centro de Educación Popular (FCEP)
- Fundación Mario Benedetti
- Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia - Bella Unión
- Gurises Unidos
- Hermandad Pro Derechos
- Instituto Investigación Acción Educativa LUNA NUEVA
- JACARANDÁ la cultura de la Memoria
- JULANA – Jugando con la naturaleza
- Memoria en Libertad
- Memorias de Malvín Norte
- Mesa permanente contra la impunidad
- Movimiento Visibles y con Derechos Uruguay
- Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS)
- Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre
- Redes Amigos de la Tierra
- Secretaría DDHH del PIT-CNT
- SERPAJ Uruguay - Servicio Paz y Justicia
- Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP)
- Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA)
- Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES)
- Vida y Educación
- Visión Nocturna
- Vivir Creando Tacua Oipik

- E) Documento de la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre
- F) Declaración de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca
- G) Documento de Memoria en Libertad
- H) Declaración de la Federación Caminantes - Familiares por Salud Mental; Grupo de la Esperanza; Organización de Usuarios y Usuarías De Salud del Oeste; Cooperativa de Vivienda HAMABI; Cooperativa Social DODICI
- I) Documento del Grupo Solidario a Redoblar
- J) Documento del Grupo Charrúa Oipik Udimar Nomade
- K) Documento de FUCVAM
- L) Documento de AMUD
- M) Documento del Movimiento de Familiares Residentes de Elepem
- N) Documento de Movimiento Visibles y Con Derechos Uruguay
- Ñ) Documento del Comité Central Israelita del Uruguay
- O) Documento titulado Trabajo Infantil en Uruguay – Asociación Civil CIPPUS
- P) Documento de la Asociación Uruguaya de Parkinson
- Q) Documento de CTU

RESUMEN EJECUTIVO

El 28 de agosto de 2024, en una instancia de jornada completa, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (en adelante INDDHH) celebró la XIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Se realizó de forma presencial en la Sala Francisco Acuña Figueroa del anexo del Palacio Legislativo y contó con la participación de 119 organizaciones sociales, académicas, organismos del Estado y organismos internacionales.

La Asamblea Nacional de Derechos Humanos es una instancia prevista en la ley 18446 para la participación plenaria, con voz y sin voto, de las organizaciones sociales, organismos gubernamentales y otras entidades objeto del contralor de la INDDHH.

La maestra de ceremonia durante la jornada fue la Lic. Cecilia Franco, funcionaria de la INDDHH.

Durante la sesión matutina, la entonces presidenta directora Jimena Fernández, presentó la rendición de cuentas del Consejo Directivo de la INDDHH. Posteriormente, se realizaron las presentaciones de los grupos de trabajo de la INDDHH previstos en la ley 18.446, a cargo de los funcionarios y funcionarias que refieren los mismos por la INDDHH.

Luego de cada una de esas instancias, se abrió un espacio al diálogo para que las organizaciones presentes pudieran realizar preguntas y observaciones.

En la tarde, tuvo lugar la instancia plenaria, que se centró en la discusión de los ejes 1 (Alianzas estratégicas), 3 (Exigibilidad y monitoreo) y 4 (Promoción de derechos e incidencias) del Plan Estratégico de la INDDHH.

Con el objetivo de prepararse para la instancia celebrada el 28 de agosto, el 11 de julio de 2024, se realizó una Pre-Asamblea en que la INDDHH se reunió con las organizaciones sociales de forma virtual para presentar su Plan Estratégico 2024-2028 y discutir la modalidad de trabajo durante la Asamblea Nacional. Como parte de la metodología, se acordó sobre la posibilidad de que las organizaciones sociales remitieran documentos complementarios a sus intervenciones, que luego serían incorporados al presente documento.

Finalmente, la Asamblea concluyó con el cambio de presidencia del Consejo Directivo, que entraría en vigor el 1 de setiembre de 2024.

I. RENDICIÓN DE CUENTAS

La bienvenida y la rendición de cuentas estuvo a cargo de la entonces presidenta del Consejo Directivo, la directora Jimena Fernández.

En primer lugar, agradeció a todas las personas presentes, y en particular a las representantes de la sociedad civil y de organismos públicos.

A modo de introducción, explicó que la XIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos está prevista en la ley 18.466 y constituye una sesión extraordinaria del Consejo Directivo.

A continuación, se refirió a cuatro líneas de trabajo que fueron transversales y marcaron este año.

La primera fue el Plan Estratégico 2024-2028, elaborado de forma participativa con todo el funcionariado, así como también con las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de contar con sus aportes sobre los posibles contenidos o líneas de acción a desarrollarse los próximos cinco años.

En segundo lugar, la creación del Área de Igualdad y No Discriminación, uno de los puntos centrales de la rendición de cuentas, debido a todas las actividades realizadas en ese marco. Esta Área está conformada por la Unidad Especializada en Género, la Unidad de Personas Mayores, la Unidad de Migrantes, la Unidad de Población en Situación de Discapacidad y la Unidad Étnico-Racial.

Una tercera línea fue el avance en términos del fortalecimiento de la identidad institucional. El actual Consejo Directivo conformó un equipo de comunicación conformado por tres personas, que han trabajado en relación al posicionamiento público de la INDDHH y la profundización de su conocimiento por parte de la población.

Finalmente, la cuarta línea de trabajo refirió a la política institucional de cooperación. El trabajo realizado se ve reflejado en lazos y alianzas con agencias de Naciones Unidas (UNICEF, OPS, OIM, ACNUR, FAO, UNFPA, PNUD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), así como también con algunas embajadas, como, por ejemplo, la Embajada Británica, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Suiza y la Embajada de Argentina.

A continuación, la directora Jimena Fernández informó de forma sintética sobre el trabajo realizado en las principales áreas que conforman la INDDHH.

1. Defensoría del Pueblo

Es el área encargada de recibir denuncias y/o consultas de personas -tanto físicas como jurídicas-, investigar presuntas vulneraciones de derechos humanos y realizar recomendaciones a los organismos involucrados en las denuncias, con el fin de mejorar la protección de los derechos humanos afectados.

En 2023 y el primer semestre de 2024, se recibieron un total de 1665 solicitudes de intervención. En relación a estas, se libraron 422 oficios y se emitieron 140 resoluciones. Respecto a las temáticas a las que se refirieron, al menos un 20 % fueron sobre igualdad y no discriminación; asuntos relacionados a las personas en situación de discapacidad; y acceso a la salud, educación, y acceso a la justicia.

Para fortalecer la Defensoría del Pueblo a través de una mayor accesibilidad y transparencia, se comenzó a trabajar junto con IMPO en un proyecto para digitalizar todas las resoluciones de la INDDHH.

Por otra parte, se incorporó un perfil de “procuraduría” que permita mejorar el seguimiento de cada uno de los casos, y se comenzó a trabajar en la descentralización.

2. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (en adelante MNP) fue creado por mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), como organismo de control y colaboración, autónomo e independiente de los poderes del Estado, a fin de prevenir prácticas de tortura u otras formas de malos tratos hacia personas privadas de libertad.

En el marco de la INDDHH, trabaja en los siguientes sistemas:

Sistema Penal Juvenil

Con el fin de atender el análisis de las condiciones de vida y trato de las personas, se creó un grupo de trabajo y se han realizado informes que buscan ver alternativas y estrategias de abordaje sobre salud mental y el proceso abreviado. Para esto, han trabajado con UNICEF en relación a la situación de los jóvenes mayores de 18 años, conforme a los cambios devenidos.

Sistema Penal Adulto y Unidades Policiales

Se subraya el trabajo realizado con el Comisionado Parlamentario Penitenciario. También se ha trabajado en la instalación de cartelería promocional de derechos humanos en todas las seccionales policiales, haciendo énfasis en el trabajo de personas privadas de libertad, especialmente mujeres con hijos a cargo.

En lo referido al Sistema Penal Adulto, las personas inimputables han sido un tema central. Se presentó un informe y se creó un grupo de trabajo sobre la revisión de la figura de la inimputabilidad penal por afectación psiquiátrica y cumplimiento de medidas de seguridad curativas, con el objetivo de estudiar alternativas. Por otro lado, se trabajó sobre la salvaguarda de los derechos humanos para personas privadas de libertad y sobre el diseño de un registro de violencia institucional, como proyecto piloto.

Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Se monitorearon 32 centros. Se realizó una “fotografía” del estado de situación actual del sistema, por regiones. Se presentó el informe correspondiente a la región este, y está pendiente presentar el informe que corresponde al litoral, de forma de completar todas las regiones.

Este sistema ha tenido varias emergentes a lo largo de este período, por ser una “puerta de entrada”. Jimena Fernández destacó los “Estándares de derechos humanos para el cuidado de la salud mental de niños, niñas y adolescentes”.

Por otro lado, se trabajó con el MSP, MIDES e INAU en el diseño de las capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos.

Se destacó la colaboración sustancial de UNICEF, tanto en este Sistema, como en el Sistema Penal Juvenil.

Sistema de Privación de Libertad por Salud Mental

En conjunto con la Unidad de Personas Mayores y el Área de Defensoría del Pueblo, se empezó a trabajar sobre las instituciones psiquiátricas y los establecimientos de larga estadía para personas mayores de edad, a efectos de definir una estrategia de abordaje.

La principal herramienta que utiliza el MNP son las visitas no anunciadas a los centros y la aplicación de una metodología específica. Tomando como referencia los años 2023 y 2024, durante un período de 12 meses, se realizaron 160 visitas a los diferentes centros; lo que representa un 25 % de aumento respecto a la cantidad de visitas realizadas en 2022. Ello permitió retomar el crecimiento que se había visto afectado a causa de la pandemia de COVID-19.

Teniendo en cuenta el mismo período, hubo un crecimiento de los oficios, en tanto se libraron 130 oficios y 19 informes temáticos sobre algún tema específico.

3. Estudios

Los técnicos de esta Área elaboran informes sobre la situación de los derechos humanos en el país. Además, elaboran el Informe Anual que se presenta ante la Asamblea General del Parlamento y todos los reportes periódicos que se tienen que presentar al Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

A raíz de la pandemia de COVID-19, hubo un atraso en la realización de los informes, por lo que se emitieron en 2024 los informes para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y el Examen Periódico Universal (EPU); así como también el propio informe de la INDDHH y dos informes temáticos, uno sobre el derecho a la alimentación y otro sobre el derecho al trabajo.

Se trabajó con ANONG y con la Unión Europea, en la realización de actividades para que las organizaciones de la sociedad civil pudieran tener un espacio de intercambio junto a representantes del Poder Ejecutivo.

Asimismo, se destacó el trabajo sistemático con el observatorio legislativo y el Mirador DESCA, herramienta útil tanto para elaborar indicadores como legislación de derechos económicos sociales, culturales y ambientales.

4. Educación

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 18.446, esta Área ha trabajado en la promoción de los derechos humanos a través de tres grandes líneas de trabajo.

La primera fue la realización de cursos abiertos, en línea y sin costo, disponibles en la página web de la INDDHH¹. En el 2024, se abrieron cuatro veces las inscripciones, con un promedio de 750 inscritos por vez.

La segunda fueron los cursos a demanda, generales sobre derechos humanos o sobre algún derecho en específico. En 2024, se realizaron cursos para la Escuela Nacional de Policía, la Facultad de Derecho de la Universidad de la Empresa (UDE), INISA, INMAYORES y la Intendencia de Colonia. También se realizaron estos cursos en liceos, como por ejemplo, el Dámaso Antonio Larrañaga, el colegio Santa Elena, el colegio y liceo Clara Jackson de Heber y The British Schools Of.

La tercera línea de trabajo contó con la cooperación de ANEP, y fue el desarrollo de diferentes materiales didácticos, dirigidos a la población infantil y adolescente. Entre ellos, se destacan

¹ Institución Nacional de Derechos Humanos, Año 2024, Formación en Derechos Humanos
[Portal Educativo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo \(inddhh.gub.uy\)](https://portal.educativo.inddhh.gub.uy/)

el juego de cartas “Rescate: los derechos humanos en juego”, el libro Facundo cuenta contigo - disponible digitalmente en la biblioteca Ceibal -, y la obra de teatro “Ha sido un sueño”.

Por otra parte, se colaboró en la organización de la Cumbre sobre Infancias y Violencias en las Américas, junto a la Embajada Británica y la organización Keeping Children Safe.

5. Descentralización

Estar presente en todo el país constituye un desafío para la INDDHH. Por ello, en 2024, se seleccionó a una persona para coordinar esta Área y se realizó el primer plan operativo anual, que se centra en tres líneas de trabajo.

En primer lugar y con el objetivo de dar a conocer a la INDDHH y aumentar eventualmente el número de denuncias, se trabajó en “La Defensoría del Pueblo va a vos”, que procura que la Defensoría del Pueblo vaya a territorio, lo que incluye también a la periferia de Montevideo. Para esto, se hizo un acuerdo con los Municipios C, D, E y F de Montevideo, y el Municipio de Ciudad del Plata en el departamento de San José.

La segunda corresponde al trabajo articulado y en coordinación con las distintas áreas. Con Educación, se presentó y distribuyó material didáctico, y se hicieron visitas en Treinta y Tres, Salto y Florida. Se prevé la presencia en los departamentos de Colonia, Maldonado y Cerro Largo, mediante acciones de la Unidad Especializada en Género o de la Unidad de Población en Situación de Discapacidad.

Por último, junto con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), se trabajó en un grupo respecto al índice de vulnerabilidad social para la gestión de riesgo en Uruguay. Se destacó la importancia de crear redes con instituciones y organizaciones locales.

6. Igualdad y no Discriminación

Esta Área está integrada por un grupo de unidades que revisten un punto en común, el modo de organización del trabajo desde la INDDHH: a partir de la conformación de una mesa o un grupo de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática, se construye la agenda de trabajo.

Unidad Especializada en Género

Fue creada en cumplimiento de la ley 19.846 sobre la igualdad y no discriminación entre varones y mujeres, y tiene por objeto transversalizar la perspectiva de género y acompañar en su proceso de implementación, en toda la INDDHH y especialmente en la Defensoría del Pueblo.

En 2024, se trabajaron tres temas. El primero fue el acceso de las mujeres a la política. En este sentido, se realizaron dos trabajos, un informe al Parlamento sobre análisis de los proyectos

que estaban sometidos a votación - tomando la INDDHH posición a favor -, y un conversatorio junto con INMujeres.

El segundo tema fue la violencia institucional basada en género, en lo que se destacó la necesidad de capacitar al funcionariado. En ese sentido, se realizó una capacitación en el marco de la participación en el Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia basada en género, y se hizo una campaña de sensibilización sobre el tema, que incluyó videos y folletos.

El tercer tema fue el sistema de cuidados y la conciliación de la vida laboral y familiar, que se trabajó en un grupo de trabajo creado de acuerdo a las potestades que la ley 18.446 le otorga a la INDDHH. Para que este sistema pueda ser efectivizado, es necesario lograr que se complementen el marco normativo y las consideraciones que devienen en la práctica: la duración de las licencias y permisos, el monto de las prestaciones, la población que abarca y la protección del empleo y la no discriminación.

Unidad Población en Situación de Discapacidad

El Consejo Directivo creó el Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la Convención Internacional sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, que fue posteriormente aprobado por la ley 20.326, el 13 de agosto del 2024.

Dentro de este Mecanismo, la INDDHH creó el Consejo Asesor Honorario, que está formado por personas y familiares de personas en situación de discapacidad. Se agradeció la colaboración de AGESIC que proporcionó su plataforma para realizar una elección transparente, que tuvo representación de todos los departamentos del país y de UNFPA, que colaboró en el relevamiento del funcionamiento del mecanismo.

El mecanismo ha demostrado su utilidad mediante el diseño de un sistema de indicadores que permite evaluar el cumplimiento o no de los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad.

Con el apoyo de MIDES, la Fundación Jazmín y UNFPA, entre otros organismos, se realizaron actividades de promoción y sensibilización. Asimismo, se hizo una jornada de cine accesible con la Embajada de Estados Unidos, y se trabajó con Netflix en las campañas “No te pueden decir no” y “Te cuento mis derechos”.

Unidad Migrantes

Funciona a través de una mesa de trabajo que se reúne cada 30 o 45 días, y en la que surgen los diferentes temas a abordar. Se destacó la colaboración y la posibilidad de incidencia de ACNUR y la OIM, donde se trabajaron temas relacionados al cambio del estatus migratorio y el pasaporte, así como también sobre ciudadanía legal y derecho a la nacionalidad.

Con la OIM, se elaboró un protocolo sobre movilidad humana y se realizaron campañas para la detección y promoción sobre casos de trata, y se elaboró un material que fue entregado a las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, junto con la Unidad Especializada en Género y MIDES, se realizaron una capacitación interna dirigida al funcionariado y otra dirigida a organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, se trabajó con ACNUR sobre el seguimiento de los compromisos de Uruguay ante el Foro Mundial sobre los Refugiados y las contribuciones al Proceso Cartagena + 40 (C+40).

Unidad Personas Mayores

Esta unidad trabajó sobre la promoción, cumplimiento y aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Se creó un grupo de trabajo y se hicieron dos conversatorios: en 2023, sobre abuso y maltrato hacia las personas mayores, y en 2024, sobre el acceso a la justicia para las personas mayores.

Asimismo, se realizó una campaña de sensibilización a través de videos bajo el lema “Las personas envejecemos, nuestros derechos no”. Fueron difundidos en redes sociales, alcanzando la difusión a nivel regional.

También se asesoró al Parlamento, lo que implicó la realización de propuestas de reformas a efectos de ser más garantistas en situaciones de internación involuntaria, ya sea por motivos de salud mental o por edad.

Unidad Étnico-Racial

El acento estuvo en los 10 años de la ley 19.122. En colaboración con AGESIC, se elaboró un informe sobre su cumplimiento, concluyéndose el no cumplimiento.

En forma paralela, se organizó un grupo de trabajo con la sociedad civil, lo que permitió analizar dónde están los desafíos -desde su perspectiva- y qué acciones se deberían tomar para que efectivamente se cumpla la ley.

También se trabajó sobre los discursos de odio. Actualmente, la INDDHH está construyendo un observatorio.

Finalmente, se colaboró con la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para la promoción y protección de derechos humanos, y se participará en la Comisión de Discriminación y Racismo del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afro descendencia, en el marco del decreto 81/019.

7. Competencias Complementarias de la INDDHH

Salud Mental

Las competencias sobre este tema se encuentran en el artículo 46 de la ley 19.529.

Uno de los puntos sobre los que se trabajó fue el vínculo y articulación con la sociedad civil. En ese sentido, en 2023 se realizaron dos actividades, un intercambio con la sociedad civil y el conversatorio “La salud mental en la voz de sus protagonistas”.

Conforme al artículo 11 de la ley 19.529, se participó junto con el MSP y MIDES en la Comisión Intersectorial de Salud Mental, realizando actividades de formación y capacitación, necesarias para el real cumplimiento de la ley 19.529, así como también de un cambio cultural.

A su vez, en coordinación y articulación con la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, se trabajó en el cumplimiento del artículo 40 de la ley 19.529 y se realizaron acciones en torno a las notificaciones sobre hospitalización con motivo de salud mental. Hay más de 45 casos registrados, y se firmó un acuerdo con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) para generar un mapeo de las notificaciones, lo que hasta ese momento no existía.

Paralelamente y desde 2020, se ha realizado en colaboración con MSP y el MIDES una campaña de opinión pública, que tuvo como eslóganes: “Más empatía por favor” y “Las personas en el centro”.

Finalmente, se empezó a trabajar con una “descentralizada italiana” a través de un convenio de cooperación interinstitucional con el Consorcio de Operativo de Salud Mental y la Conferencia Permanente para la Salud Mental en el Mundo.

Búsqueda de personas detenidas y desaparecidas

La competencia es atribuida por la ley 19.822. La actividad la desarrolla un equipo de profesionales que se organizan en dos áreas: la ubicación de los restos, llevada a cabo por los antropólogos, y la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, llevada a cabo por el grupo de investigadores.

En este período, se realizaron tres grandes hallazgos: el hallazgo del 30 de julio de 2024; el hallazgo de los restos de Amelia Sanjurjo y su efectiva identificación; y la conclusión sobre la muerte de Jorge Pedreyra Brum.

Respecto al hallazgo del 30 de julio en el batallón 14, al momento se había podido concluir que se trataba de un hombre de entre 43 y 57 años, y se estaba a la espera de los resultados de ADN que permitan identificar a la persona².

Las características de este hallazgo, fueron similares a las de Amelia Sanjurjo, una estructura formada por una losa de cemento, arena, pedregullo y cal que encapsula los restos. La diferencia en este caso es que además de los restos se encontró un textil.

En el caso de Amelia Sanjurjo, las muestras óseas que se extrajeron en el laboratorio para el análisis genético se enviaron a Córdoba, Argentina; y no arrojaron una coincidencia con la base de datos. A partir de ese momento, se comenzó la búsqueda de familiares que donaran material genético, proceso que duró aproximadamente 11 meses. Finalmente, el 28 de mayo de 2024, se informó que los restos pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal, militante comunista de 41 años, quien fue secuestrada en noviembre de 1977 en la calle, en una operación del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA).

En este caso, al igual que en el de Amelia Sanjurjo, las tareas de exhumación llevaron días y noches de trabajo sin pausa.

El tercer caso fue el de Jorge Pedreyra Brum. El equipo de investigación pudo determinar el lugar exacto en el que fue sepultado y detenido, constatándose que la víctima padeció una muerte violenta. Su cuerpo fue enterrado el 21 de julio de 1978 como “NN” en el sector tierra gratuita del Cementerio Argentino “Grand Bourg”, y hubo una actuación policial que ocultó el cadáver a la familia, proporcionando la emisión de documentación falsa para sugerir el fallecimiento en un siniestro ferroviario, lo que evidentemente no ocurrió.

Además de los hallazgos, se reportó un trabajo diario. Se trabajó en la chacra de Pando, departamento de Canelones, donde se abordó arqueológicamente el territorio sin hallazgos; y también en la represa de Rincón del Bonete, en el departamento Tacuarembó, donde se trabajó en marzo de 2023 con prospección arqueológica y remota, y donde por las condiciones del terreno no se pudo utilizar el georradar, por lo que no fue posible relevar completamente el sitio.

En el servicio material de armamento, detrás del galpón 4, el “300 Carlos”, el trabajo tuvo que ser detenido por inconvenientes con un cable de alta tensión. El 20 de julio de 2024, se firmó un convenio tripartito entre UTE, la INDDHH y el MDN, que permitirá retomar el trabajo de búsqueda en ese predio.

Se destacó la coordinación con las autoridades de Argentina, que se mantiene desde el año 2022. Se coordinaron iniciativas de búsqueda en Argentina, con el registro único de víctimas del terrorismo de Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

² El 24 de setiembre de 2024 la INDDHH comunicó en conferencia de prensa que los restos encontrados pertenecen a Luis Eduardo Arigón Castel, desaparecido en 1977.

Por otra parte, se encuentran las denuncias que ingresan a la Defensoría del Pueblo. Se ha recibido información de distinto grado de exactitud, lo que se traduce en 40 casos abiertos de investigación.

Finalmente, se destacó también la cooperación institucional, y se mencionó a la DGREC, a la Dirección de Necrópolis de la Intendencia de Montevideo, a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a la Intendencia de Canelones, y a la Iglesia Católica.

Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria

Es creada por la ley 19.641 bajo la órbita de la INDDHH. Tiene por cometidos recepcionar, instruir y resolver solicitudes de declaración y creación de sitios de memoria histórica y efectivizar su funcionamiento, entre otras.

En el año 2023, se contabilizaron 10 casos entre señalizaciones y sitios de memoria, y 8 casos en el 2024. Se subraya, la cárcel de Cabildo y las gestiones y organización de la Conmemoración del Acto del Obelisco de 1983 y de Río de Libertad.

Este año, por ser sitio de memoria y a raíz de los 50 del golpe del Estado, la INDDHH tuvo un récord de visitas en su sede: unas 250 personas que visitaron el sitio en el Día del Patrimonio y un total de 800 estudiantes concurren en el marco de las visitas guiadas. Además, se renovó la página web, con un criterio museístico y moderno, de manera de hacer visible y atractivo todo el acervo con el que cuenta la INDDHH³.

En 2023, se realizó el conversatorio “Los modelos de sociedad de Uruguay a 50 años del golpe de Estado”, donde participaron Virginia Martínez, funcionaria de la INDDHH, Gerardo Caetano, Leonardo Haberkon y Alfonso Lessa.

Finalizada su exposición, la directora Jimena Fernández agradeció a todo el funcionariado de la INDDHH por su labor y compromiso.

● Intervenciones de participantes

Posteriormente, se cedió la palabra a las personas participantes para que expresaran sus preguntas y opiniones, que fueron respondidas por la directora Jimena Fernández.

A continuación, se exponen las intervenciones y sus correspondientes respuestas.

Intervención del público: Teniendo en cuenta que la INDDHH tuvo una historia de trabajo con distintas organizaciones indígenas, pregunto por qué no hay ninguna mención al trabajo sobre pueblos originarios, ni en el Área de Igualdad y No

³ Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. *Sitio de Memoria Ex SID*. <https://sitios.inddhh.gub.uy/sitio-de-memoria/>

Discriminación, ni en la Unidad Étnico-Racial. Señalo que eso también es derechos humanos, y hay recomendaciones de Naciones Unidas sobre el tema.

La directora Jimena Fernández mencionó que la Unidad Étnico-Racial incluye también el trabajo sobre pueblos originarios. Reconoció que este año el acento estuvo en el diálogo con las organizaciones en la sociedad civil que participaron sobre los 10 años del proyecto de la ley 19.122, pero ello no quita que haya intención de trabajar.

El director Marcos Israel agregó que, con motivo de los 400 años de Villa Soriano, se ha mantenido contacto con personas de esa localidad que tienen una historia muy rica en relación a los pueblos originarios. Actualmente, se está pensando recabar historias vinculadas con esta emblemática Villa, como uno de los eventos más antiguos que se conocen desde lo que fue en aquel momento la Banda Oriental. Es una idea que está en desarrollo y será profundizada el próximo año.

Intervención del público: *Se expresa que la orientación general que ven en la INDDHH es la de ocuparse de derechos específicos vulnerados a determinadas comunidades, y que ello está muy bien, pero que hay derechos universales que afectan a toda la población del país. Uno de ellos, vulnerable y en peligro, es el derecho al agua, y hay muchísimos temas de afectación futura que están en cuestión. Les parece que debería haber una atención especial sobre la vulneración al derecho al agua, que abarca a toda la población e implica desigualdades evidentes y notorias.*

La directora Jimena Fernández reconoció que la INDDHH está en debe con la temática medio ambiental. De momento, el trabajo sobre el tema depende de las denuncias que llegan a la Defensoría del Pueblo y que, si bien no tiene las cifras, no son muchas. No obstante, señaló que tienen claro que es un asunto sobre el cual tienen que trabajar más allá de las denuncias que llegan. Tienen previsto crear una unidad o trabajar específicamente el tema en mayor profundidad e independientemente de las denuncias recibidas.

Intervención del público: *Se consulta por qué no hay una mención específica a la situación de vulneración de derechos de las infancias protegidas por el Estado. Señaló que existen casos que “no son de ahora”, como por ejemplo la situación de Rivera, que la investigaron periodísticamente desde el 2014 y es una situación permanente. Les resulta violento y una omisión significativa que la INDDHH no tenga un eje central sobre las infancias que están bajo supuesta protección del Estado uruguayo.*

La directora Jimena Fernández aclaró que lo expuesto en el marco de la rendición de cuentas fue un resumen del trabajo realizado, y existiendo otros temas que también son prioridad y se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Este tema, se trabaja desde el MNP, más específicamente desde el área de protección de centros 24 horas, además de los casos que ingresan por la Defensoría del Pueblo. Los informes están prontos, aunque aún está pendiente el referido a las situaciones de Rivera.

Intervención del público: *Se manifiesta que las palabras “trabajadores sexuales” siguen omisas en los discursos y en las acciones de protección de la INDDHH. Aclaró que no pretendía que le respondan porque no lo han hecho en todo ese tiempo, pero quería que quedara en acta.*

La directora Jimena Fernández invitó a que, durante la instancia plenaria, las organizaciones de la sociedad civil señalaran posibles líneas de acción sobre el tema para los próximos 5 años. Refirió que quizás es el momento de incluir una línea de acción en donde aparezca explícita la temática.

Intervención del público: *Se manifiesta la preocupación respecto a que en toda la rendición de cuentas se habló de hombres y mujeres. Expresó que cuando hablamos de privación de libertad, de género, de familia, y en general de estos derechos, hablamos con una mirada de derechos humanos para todas, todos y todes. Si hablamos de hombres y mujeres cis, desde el binarismo, de la concepción de familia que nos quieren imponer en este momento y en este contexto; entonces no estamos contemplando a las familias monoparentales y las diversas, ni tampoco a las disidencias cuando hablamos de género y de privación de libertad. Señaló que la INDDHH mira desagregadamente estos derechos humanos porque evidentemente, el goce de los derechos humanos se internacionaliza con la raza, el género, las disidencias, la diversidad, la clase social, las generaciones y muchas cosas más.*

Jimena Fernández se disculpó si inconscientemente dijo hombre y mujer. No es un posicionamiento de la INDDHH que ve de manera binaria, sino un error de lenguaje. Por ejemplo, en coordinación con el Comisionado Parlamentario Penitenciario están haciendo un trabajo sobre población trans en cárcel, y se está trabajando el tema mujer en cárceles desde el Área de Sistema Penal Adultos y Unidades Policiales.

Intervención del público: *Se agradece a la INDDHH por la creación de la Unidad Migrantes y el trabajo transversal que ha hecho, así como también por la empatía y la humanidad con la que han trabajado, respondiendo el teléfono a situaciones las 24 horas, tanto a víctimas de trata como a personas extranjeras privadas de libertad en Uruguay. La unidad ha facilitado el diálogo con las diferentes instituciones uruguayas, gobiernos locales y sociedad civil. Después de este inicio para visibilizar el tema de que Uruguay es un país de recepción de migrantes desde hace aproximadamente 10 años y que su matriz cambió para recibir y tener más de 90.000 personas que escogen a Uruguay como país de destino, pregunta cuáles son las próximas acciones de la Unidad Migrantes.*

La directora Jimena Fernández agradeció el comentario y manifestó que el “cómo seguir” lo definirán las organizaciones de la sociedad civil. También están atentos a los aportes de ACNUR y OIM. En el plan estratégico seguramente surjan líneas de trabajo, y las prioridades se definirán de forma conjunta en el grupo de trabajo del que participa la sociedad civil.

Actualmente se está trabajando respecto a la ciudadanía legal y el derecho a la nacionalidad, y se espera poder tener incidencia en el correr del año.

Intervención del público: Se reconoce la vastedad de temas y acciones desarrolladas por el Consejo Directivo de la INDDHH. Preguntó cómo se podría incluir en los ejes de este año, o del próximo, la profundización de acciones en algunos ejes que fueron mencionadas por la presidenta del Consejo Directivo, por ejemplo, en relación a las infancias y las adolescencias; el discurso de odio y la discriminación y las violencias en todas sus formas; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Cuestionó si la profundización de la independencia de la INDDHH respecto del sistema político y de futuros directivos, no podría contribuir a acciones aún más potentes de las que ya se están desarrollando.

También preguntó cómo potenciar la participación de la sociedad civil, profundizando el mecanismo de denuncias, para que este pueda ser utilizado en forma más plena.

Finalmente, reconoció las acciones, no solo de la presidenta de la INDDHH, sino también de los demás directores respecto a los discursos de odio; y sugirió analizar de qué manera, junto con las universidades y ANEP, se puede promover aún más el respeto a la igualdad, la prohibición de la discriminación y la reducción o terminación del odio en todas sus formas.

Jimena Fernández expresó que, en base al Plan Estratégico, las organizaciones de la sociedad civil podrán desde ya colaborar y aportar como aterrizar en acciones concretas.

Pretenden disponer del máximo espacio de trabajo junto con la sociedad civil. Se pueden sumar a los diversos grupos de trabajo de la INDDHH.

En relación a la profundización de la independencia, a lo largo de estos dos años, han dado claras indicaciones de que cada uno de los cinco directores son independientes del poder político.

Respecto a la participación de la sociedad civil, destacó que, de cara a la asamblea, se realizaron varias reuniones individuales con organizaciones que se acercaron con inquietudes al respecto. Por primera vez desde que existe la INDDHH, se realizó una pre asamblea en la que se inscribieron cerca de 60 organizaciones y se dialogó sobre la jornada, sus puntos a favor y en contra.

Finalmente, los discursos de odio son un tema que se ha priorizado y trabajado. Se continuará trabajando al respecto el año que viene, especialmente desde la Unidad Étnico-Racial, pero también en general de todo tipo de discriminación.

Intervención del público: Se expresa la preocupación por el poco personal que hay para tantas labores. Se pregunta cómo se pueden consolidar realmente todas las acciones que se están contando con la poca gente que hay.

También se refirió a la falta de trabajo con instituciones de educación pública, principalmente en ANEP y Udelar. La INDDHH mencionó talleres que han brindado en instituciones privadas, quizás estas tienen mayor flexibilidad para llamar y convocar. Sin embargo, saben sobre la rigidez que tienen las instituciones públicas, por lo que es importante que la INDDHH se acerque y profundice. Como estudiantes universitarias tienen un interés personal.

Señaló que se habla mucho de estas mesas de trabajo con la sociedad civil, y quieren saber si son siempre las mismas personas que participan. Opinó que en todos los espacios empieza a pasar que con los años hay personas que se empiezan a “atornillar” y quedan ahí. ¿Se realiza una actualización de organizaciones de la sociedad civil?

Preguntó si se va a ir más en profundidad al territorio. Recuerda hace pocos años estar en el interior del país y que la INDDHH no esté, pero que sí estén organizaciones de la sociedad civil. En el mapa que se mostró se veían muchos departamentos en los que actualmente la INDDHH no está incidiendo. ¿Cómo actualizar estas mesas y hacer accesible la información para que nuevas organizaciones se sumen a estos espacios? ¿Cómo se rejuvenece este proceso de información y de recepción para seguir construyendo?

Jimena Fernández señaló que si bien los funcionarios no son muchos en relación a las tareas a realizar, son muy buenos y comprometidos; pero que todo es mejorable.

Respecto a los otros puntos, refirió que la INDDHH se relaciona y trabaja con ANEP y Udelar. Por ejemplo, en los primeros días de setiembre, se realizaría la primera asamblea sobre discapacidad, que contaría con la participación de las niñeces del sistema de educación pública. Asimismo, existe un acuerdo de trabajo con la Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho de la Udelar. Son instituciones más rígidas, pero hay un diálogo.

Por su parte, la ida al territorio es un desafío muy importante. Es cierto que la INDDHH no está presente en todo el territorio, y la descentralización es un objetivo que tiene claramente marcado. En algún momento, durante otras administraciones de la INDDHH, se pensó en la posibilidad de tener sede en algún lugar del interior, pero ello no fue posible debido a los altos costos que supone en tema de funcionariado. Lo que se intentará concretamente el año que viene, es implementar “La Defensoría del pueblo va a vos” e ir a territorio regularmente.

En ese sentido, señaló la importancia de que se conozca la existencia de la INDDHH. Ello supone una presencia activa en territorio, decir qué hace la INDDHH, estar presentes en la mayor medida posible en las redes y darse a conocer para que las personas sepan sobre su

existencia y que es un lugar de puertas abiertas, donde pueden conocer sus derechos y se les defenderá en caso de tener una denuncia.

La directora Carmen Rodríguez acotó que hace un par de semanas, Educación y Descentralización realizaron una actividad con ANEP en Paysandú. Se llevó a cabo una obra de teatro sobre los derechos de las niñeces y la presentación del libro “Facundo cuenta contigo”. Estuvieron presentes distintas escuelas de Salto, Artigas y Paysandú. Se hizo en Salto, en forma regional, y se está planteando replicarlo en otros departamentos.

La realidad es que los tiempos institucionales también tienen sus complejidades. En la rendición de cuenta anterior, habilitaron presupuesto para comprar un vehículo más que facilite el viaje al interior, y se está intentando concretar la compra. Los tiempos y las posibilidades a veces dificultan ir al interior, principalmente al norte del país, y ese es el gran desafío para el año que viene. Hay mucha más fluidez con el sur, por tiempos de distancia.

Intervención del público: Se señala que ya se había hecho referencia a la violación continua del derecho humano al agua y a la falta de énfasis en la justicia ambiental y los derechos ambientales, lo que va a en contra de cualquier definición de DESCAs. Opinó que ello guarda relación con el territorio, con la aproximación a los distintos territorios donde se están produciendo violaciones a derechos ambientales, como consecuencia de retrocesos normativos importantes o de la violación de la Constitución. En ese sentido, preguntó qué garantías tenían de que, cuando trabajaran sobre el Plan Estratégico, luego hubiese una continuidad.

Expresó que el tema y el reclamo de la justicia ambiental y los derechos ambientales ha estado presente en las asambleas de forma continua, y la expectativa es que haya un fortalecimiento de la participación de la sociedad civil organizada en ese sentido para todas las áreas de trabajo de la INDDHH. Insistió en su pregunta sobre qué garantías tienen de que eso no se corte y no tengan que asistir a próximas asambleas a decir que no se logró abordar el tema de los derechos ambientales.

Respecto a la afirmación de que no hubo muchas denuncias, compartió su sorpresa, ya que es un tema que está continuamente presente y hay muchísimas denuncias en todo el país respecto a violaciones de derechos ambientales, que están relacionadas con todos los otros derechos. Expresó que cuando hablamos de defensa ambiental, también hablamos de derechos de la niñez, de los pueblos indígenas, de la población afrodescendiente, y demás.

Jimena Fernández mencionó que la falta de denuncias no necesariamente se debe a la falta de hechos, sino a que no llegan a la INDDHH, y que ello habla de la necesidad de fortalecer esos aspectos.

Cuando se refirió al Área Estudios, omitió mencionar que el Mirador DESCA realizará un informe específicamente sobre medio ambiente, y que están contratando una persona especializada para ello.

Señaló que, si bien no puede dar garantías, sí puede constatar su voluntad de trabajar más sistemáticamente esta temática, reconociendo que hay un deber histórico de la INDDHH en darle más formalidad e institucionalidad al abordaje de estos temas.

Marcos Israel expresó que, cuando comenzaron esta gestión, tenían en mente generar una Unidad de Medio Ambiente. Sin embargo, la restricción presupuestal obliga a elegir en qué poner el acento. Asimismo, van a haber instancias presupuestales en el futuro, particularmente el año que viene, y esperan avanzar en ese sentido, siendo uno de los puntos en su agenda.

Intervención del público: se comparte que es de ese norte al que no se llega, y que si hay algo bueno que nos dejó la pandemia, fue que podemos llegar al norte con el zoom y otros medios. Señaló que resulta indispensable que se llegue a todo el país, en virtud de los objetivos de la INDDHH, es decir, la protección, enseñanza y vigilancia de los derechos humanos. Supone que va a estar en el Plan Estratégico y cree que es una buena idea el uso de los medios que nos dejó la pandemia para llegar al interior.

Otra cosa importante a la que refirió es que, muchas veces, las asambleas se hacían en el interior, entonces la INDDHH llegaba al interior y estaban en contacto con toda la gente que andaba por ahí. Consideró absolutamente indispensable que el conocimiento de los derechos humanos y la práctica llegue al interior, tanto por la cantidad de noticias que hay del interior todos los días y porque si no, ese conocimiento no llega. La institución tiene un trabajo inmenso, y todas las personas que son de allí se anotan para ayudar en lo que sea para que lleguen los derechos humanos al norte.

Jimena Fernández mencionó que la directora Carmen Rodríguez, quien es de Rivera siempre dice lo mismo. Intentan en gran parte de los casos sumar y tener instancias o streaming. A modo de ejemplo, con la creación del Consejo Asesor Honorario para Personas con Discapacidad, se logró tener la presencia en los 19 departamentos, presencia no solo a través de zoom, sino que fueran elegidas personas que representan el territorio que están por su departamento. Agregó que las experiencias así se van a ir multiplicando desde el Área de Descentralización el año que viene.

No obstante, si bien ayuda, no es lo mismo que el cara a cara, siendo de recibo el hecho de realizar estas asambleas en el interior.

Con respecto a esto, indicó que supone un trabajo importante, dado que a veces no es fácil elegir dónde realizar la asamblea, porque hasta las carreteras en Uruguay están pensadas desde Montevideo, pero que el planteo es de recibo.

***Intervención del público:** se expresa la preocupación por varias razones, pero principalmente porque en este último tiempo desde la INDDHH no ha habido una participación y una voz referida a los problemas de salud mental. Han planteado denuncias referidas a todo lo que se vive en los hospitales, que siguen las personas hacinadas, que los mismo se está repitiendo en las instituciones privadas; que se está cumpliendo en parte la ley 19.529 y se han creado mini manicomios que no tienen inspecciones.*

Planteó también que la salud mental afecta a todos los colectivos, y cuando lo abordamos desde una perspectiva sanitaria, perdemos esa dimensión que tenemos que tener para que el problema se colectivice. Adhirió a la última intervención respecto a la necesidad de que la INDDHH esté en el interior. Recordó y valoró positivamente una actividad realizada en Paysandú.

Respecto a la intervención de la representante de la FEUU, señaló como algo positivo la cantidad de instituciones presentes, y la posibilidad de articularse. Si bien a veces lo difícil es crear esos nodos de trabajo, aseguró que de todas las personas presentes, no debía haber nadie que no haya pasado personalmente o en su familia o entorno, desde una depresión hasta una crisis psicótica, o un trastorno severo y permanente.

Opinó que por suerte parece que el tema está interesando desde el punto de vista político, pero que la sociedad civil lucha y lucha, y necesita mayores voces. Reconoció que han avanzado, pero necesitan mayor protagonismo.

La directora Jimena Fernández expresó su acuerdo en que el tema de salud mental es uno de los temas prioritarios que surgen en diversas áreas. Surge desde la niñez y adolescencia.

En la rendición de cuentas, habló sobre estándares de derechos humanos en salud mental para las niñeces y adolescencias que se vienen trabajando desde el MNP. Agregó que ello también se ve reflejado en el monitoreo de las instituciones psiquiátricas que realizan, así como el que realiza el Área de Salud Mental.

Por último, señaló que tienen claro que son asuntos sobre los cuales hay que declarar más y poner más énfasis, no tanto en términos de hacer porque tienen bastantes actividades, sino en términos de visibilidad de la temática.

II. PRESENTACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 66 literal B de la ley 18.446, el Consejo de la INDDHH ha creado grupos de trabajo, integrados por representantes de organizaciones sociales y del Estado, y presididos por miembros de la INDDHH.

Las personas representantes de la INDDHH en cada grupo expusieron acerca de los grupos de trabajo que han estado funcionando y el trabajo realizado.

1. Grupo de trabajo sobre las Reglas de Brasilia con énfasis en discapacidad

El Lic. Heber Da Cunha señaló que este grupo comenzó a trabajar en 2023. Debido a la complejidad de los temas a tratar, se autorizó que el grupo continuará trabajando durante 2024, habiendo culminado recientemente.

A partir de 2024, el grupo contó con la participación de: el Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada; la Fiscalía General de la Nación; la Suprema Corte de Justicia; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; la Dirección de Discapacidad del MIDES; el INR; el INISA; la Facultad de Derecho de la Udelar; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); la Asociación de Magistrados y Operadores de Justicia de Familia, Infancia y Adolescencia; el Colegio de Abogados del Uruguay; la Asociación de Defensores Públicos; el Centro Martínez Visca; la Asociación Down del Uruguay; el Grupo Norte Propio; la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo; la Unión Nacional de Ciegos; Movimiento Visibles y con Derechos Uruguay; Federación Caminantes; DITEC; Asociación de Sordos del Uruguay; Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad; Alianza de las Organizaciones; AFAUCO; Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo; el MNP, y Naciones Unidas como observador.

El objetivo del grupo fue acordar un protocolo guía para la actuación de las Reglas de Brasilia con énfasis en la población en situación de discapacidad. Para ello, se realizó una intersección entre ese instrumento internacional y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se trabajó especialmente en relación a los ajustes en procedimientos que resultan necesarios para garantizar el acceso a la justicia a las personas en situación de discapacidad.

En ese sentido y en base a la experiencia en otros países, se propuso crear e implementar en nuestro sistema de justicia la figura del “facilitador en comunicación”, con el objetivo de facilitar a esta población la comprensión de los procesos en que se ven involucrados.

Para ello, contaron con la presencia y colaboración de Soledad Cisternas, relatora especial de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, y Mabel Remón de

ADAJUS - Argentina, un servicio que atiende el acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad.

También realizaron un relevamiento sobre la accesibilidad universal y el acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad y elaboraron un documento. A través de varios cuestionarios recogieron, por un lado la opinión del propio sistema de justicia, y por el otro la de quienes se vinculan con este, como por ejemplo la sociedad civil, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente, entre otros.

Actualmente, la Unidad de Población en Situación de Discapacidad de la INDDHH está elaborando un protocolo guía que será compartido con el grupo de trabajo una vez finalizado y, en caso de contar con el acuerdo del grupo, será presentado.

2. Grupo de trabajo sobre discapacidad y educación inclusiva

El Lic. Heber Da Cunha también se refirió a este grupo que, tras haber culminado su trabajo en 2021, resolvió retomar su actividad.

En 2021, creó el “Protocolo guía para las situaciones de rechazo y discriminación por motivos de discapacidad en el ámbito de la educación”, y colaboró con UNESCO en la campaña “No pueden decir no”.

A partir de este año, el grupo cuenta con la participación de la Unidad de Población en Situación de Discapacidad y la Defensoría del Pueblo de la INDDHH; el Consejo Asesor de la sociedad civil Organizada; el Grupo de Trabajo Educación Inclusiva de la Sociedad Civil; la Dirección de Discapacidad del MIDES; la Dirección de Educación del MEC; la Dirección de Educación Inicial y Primaria de ANEP; la Dirección de Educación Secundaria de ANEP, la Dirección Central de Integración Educativa de ANEP; la Dirección General de Educación Técnico Profesional de ANEP; la Udelar, la Asociación de Funcionarios de UTU; el Instituto de Profesores Artigas; el Instituto Uruguayo Asociación Cristiana de Jóvenes; la Universidad Católica del Uruguay; la Universidad ORT; la Universidad de la Empresa; FLACSO Uruguay y la Universidad de Montevideo.

En esta oportunidad, los objetivos del grupo son revisar el protocolo guía, acordar un formulario único de denuncias para estas situaciones y elaborar un documento que recoja los nudos críticos y problemas que el propio sistema educativo identifica como obstáculos en la educación inclusiva y la inclusión de las personas en situación de discapacidad en el ámbito educativo.

Este año, el MEC, el MIDES y la ANEP presentaron y firmaron un protocolo para la educación inclusiva. Asimismo, existen convenciones internacionales, leyes y también denuncias realizadas ante la INDDHH. En colaboración con UNFPA, la INDDHH está realizando un estudio exploratorio sobre las denuncias por motivos de discriminación en el ámbito de la educación que han llegado a la INDDHH, la ANEP, el MEC, el MIDES y la sociedad civil.

3. Grupo de trabajo sobre los derechos de las personas mayores

La Lic. Ana Durán agradeció a sus compañeros de la INDDHH y a las personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil con quienes ha compartido instancias de trabajo.

El grupo fue creado por el Consejo Directivo de la INDDHH el 5 de diciembre de 2023, en la órbita de la Unidad de Personas Mayores. Comenzó sus actividades ese mismo mes y se reúne mensualmente. Su plazo para trabajar es hasta el 31 de diciembre de 2024.

Está integrado por: el Consejo Asesor de la Intendencia de Montevideo (CAM); el Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor (CICAM); la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU); la Red del Adulto Mayor (REDAM); la Universidad Abierta de Educación Permanente no Formal de Personas Mayores (UNI 3); la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (ADERAMA); el Movimiento Elepem; la Mesa Intersectorial de Personas Mayores de Montevideo; la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatria del Uruguay (SUGG); y la Asociación de Psicogerontología del Uruguay.

Tiene por objetivo analizar y proponer medidas para garantizar los derechos de las personas mayores, de conformidad con la legislación nacional y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores ratificada por la ley 19.430.

Resaltó la necesidad de promover la difusión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En ese sentido, el grupo seleccionó y ha trabajado en torno a tres derechos claves recogidos en esa convención: igualdad y no discriminación (artículo 5), derecho a la salud (artículo 19) y acceso a la justicia (artículo 31).

Respecto a la igualdad y no discriminación, concluyeron la pertinencia de realizar una campaña de difusión sobre la vulneración de este derecho, a través de videos cortos que refieran a situaciones cotidianas, entre otras, referidas a las temáticas de género y discapacidad vinculadas a las personas mayores.

Plantearon varios puntos sobre el derecho a la salud: la necesidad de realizar promoción de la salud mental integral con énfasis en la prevención primaria y de evitar de las demoras en la atención (con especial preocupación respecto a la asistencia domiciliaria y hospitalaria de personas mayores); la falta de personal formado en gerontología; la falta de implementación de los cuidados paliativos en algunas mutualistas; realizar una campaña de difusión sobre salud mental enfocada en la depresión y prevención de suicidios en esta etapa de la vida; y la posibilidad de considerar a los residenciales de interés nacional.

El 29 de mayo de 2024, la INDDHH realizó un Conversatorio sobre Acceso a la Justicia, donde se discutieron las dificultades que enfrentan las personas mayores y el propio sistema. En ese sentido, se propuso: realizar capacitaciones dirigidas a todo el personal de justicia; crear una

entidad específica calificada para mejorar esta situación; realizar una campaña de sensibilización, promovida por el Estado y con la participación de las organizaciones sociales.

El 9 de octubre de 2024, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, el grupo presentará un documento en la INDDHH sobre las actividades realizadas y la planificación prevista para el próximo año.

4. Grupo de trabajo sobre conciliación de la vida personal, laboral y familiar

La Dra. Rosana Medina señaló que el grupo trabajó desde setiembre de 2023 hasta abril de 2024. Estuvo integrado por el MTSS, la Oficina Nacional de Servicio Civil, el INMujeres y la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad.

Su objetivo central fue sistematizar la normativa existente en la temática e identificar nudos y líneas de recomendaciones para su abordaje. Esa normativa es uno de los componentes para pensar las políticas nacionales de cuidado, y este es un punto que está identificado en el Plan Nacional de Cuidados 2021-2025 como una necesidad de avance.

Toda regulación sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral debe estar pensada con perspectiva de diversidad y diversidad de familias.

A pesar de que Uruguay ha alcanzado el piso planteado por la OIT (sobre todo en relación a licencia de maternidad y paternidad), es necesario avanzar hacia medidas que permitan que se incorporen mejores elementos de corresponsabilidad de género en los sectores tanto públicos como privados. Asimismo, en el sector público, también se deben abordar los desafíos en torno a generar normativa que abarque a la Administración Central y no genere dudas o discusión respecto a su implementación en Entes Autónomos, Gobiernos Departamentales y otros organismos que no integran la Administración Central. Es importante considerar que las reformas o revisiones que se hagan deberán contemplar los cambios más beneficiosos, siendo de aplicación el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, la mayoría de las niñeces que nacen en Uruguay, pertenecen a hogares integrados por personas que trabajan en régimen de informalidad. Por lo tanto, la normativa debe buscar elementos para ampliar a la población contemplada y generar un régimen que abarque tanto al trabajo formal como informal.

En tanto todas las prestaciones van de la mano de los servicios que se desarrollan, sobre todo en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, se debe promover un continuo entre prestaciones y servicios que garantice que el cuidado no quede a cargo exclusivamente de las familias.

Por último, resulta fundamental adoptar medidas que permitan modificar el uso exclusivo que realizan las mujeres del subsidio de cuidado. Para ello, es pertinente la adopción de medidas que faciliten la lactancia exclusiva durante los primeros meses, pero también que se adopten medidas de cuidado luego de los 6 meses, de manera de promover este continuo entre prestaciones y servicios.

Si bien este grupo de trabajo culminó sus actividades, esta es una línea de trabajo de la INDDHH que nace a partir de denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo, y que será sostenida por la Unidad Especializada en Género, que centrará en sus próximos pasos en la difusión y en el trabajo con organizaciones sociales, principalmente sindicatos y sectores empresariales.

5. Grupo de trabajo sobre el incumplimiento de la ley 19.122

El Lic. Oscar Rorra señaló que los dos grupos que preside se basan en las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial.

En este grupo participaron: el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres; el Comité Central Israelita del Uruguay; la Facultad de Psicología de la Universidad de la República; el Instituto Afrodescendiente para el Estudio; la Investigación y el Desarrollo; y la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en Uruguay.

El grupo estuvo en actividad entre junio de 2023 y abril de 2024. Durante ese tiempo, realizaron 25 reuniones quincenales en las que planificaron, analizaron y formularon un informe que fue presentado por la INDDHH el 23 de julio de 2024 junto con el de la evaluación conjunta de la INDDHH y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El objetivo fue explorar la percepción de las personas afrodescendientes sobre la implementación de la ley 19.122 y realizar recomendaciones al Estado para asegurar su efectivo cumplimiento.

Uno de los principales hallazgos es que la baja tasa de postulación se debe a la falta de conocimiento sobre la ley. Pese a que ha transcurrido una década desde su vigencia, tanto la población afrodescendiente como la población en general, aún desconocen sus principios generales y directrices. Resulta urgente utilizar los recursos institucionales disponibles para incrementar su difusión a nivel nacional, a través de campañas de sensibilización e información continuas, dirigidas a toda la población, y especialmente a la población objetivo de la ley.

Tal como establece la norma, es necesario evaluar las posibles dificultades de las personas afrodescendientes en su autoidentificación. En particular, se deben considerar los casos en que las personas sin rasgos fenotípicos afrodescendientes se identifican como tales, lo que puede dificultar la inclusión de las personas afrodescendientes.

Aunque la ley no lo establece explícitamente, se propone realizar un análisis de los ingresos de las personas afrodescendientes admitidas a través del sistema de cuotas. Al explorar sus experiencias en la Administración Pública, se puede obtener información valiosa sobre la ley desde una perspectiva integral.

Por último, se propone modificar el artículo 4 de la ley. El porcentaje debería corresponder a la población afrodescendiente residente en cada departamento, según los datos del último censo nacional de población. Esto buscaría un impacto equitativo de la ley en los departamentos con mayor porcentaje de población afrouruguaya, como son los departamentos de Artigas, Rivera y Cerro Largo.

6. Grupo de trabajo sobre discriminación de religiones de matriz afrodescendiente

El Lic. Oscar Rorra refirió que el grupo fue creado en virtud de una solicitud de la organización social Atabaque realizada el 4 octubre de 2023.

Durante 2023, la Defensoría del Pueblo recibió varias denuncias referidas a posibles situaciones de discriminación hacia el umbanda y los cultos africanos en Uruguay.

El grupo comenzó a funcionar el 18 de marzo de 2024 y se reúne con una periodicidad de 15 días, habiéndose reunido en 7 ocasiones al momento de la asamblea.

Está integrado por organizaciones sociales afrouruguayas, diversas organizaciones en general, representantes de diversas corrientes religiosas y del ámbito educativo. La convocatoria a nuevas postulaciones continúa abierta.

Su objetivo es analizar la intolerancia y el racismo religioso, buscando abordar la discriminación que sufren estas expresiones religiosas en nuestro país.

En el mes de octubre se realizará un seminario titulado “Religiones de matriz afrodescendiente: debates actuales y legislación vigente”. El objetivo será analizar el marco legal actual y las experiencias de las organizaciones civiles en la lucha contra la discriminación religiosa. El encuentro contará con personas de gran trayectoria a nivel nacional e internacional, invitadas para el debate y análisis del tema.

Se espera que el grupo finalice su trabajo en diciembre, con la elaboración de un informe que incluya sus hallazgos y recomendaciones al Estado.

7. Grupo de trabajo sobre la figura de la inimputabilidad penal por afectación psiquiátrica y cumplimiento de medidas de seguridad curativas

La Dra. Alicia Saura indicó que este grupo comenzó a trabajar en mayo de 2024 y tiene un régimen de reuniones quincenales que van hasta diciembre de este año.

El grupo es creado en febrero de 2024, con el fin de abordar una situación evidenciada en 2023 por el MNP el informe temático “Privación de libertad, inimputabilidad por condiciones de salud mental y medidas de seguridad curativas”, en el cual se analizan la normativa específica, las condiciones de la privación de libertad y las barreras que enfrentan las personas declaradas inimputables por condiciones de salud mental para acceder a la justicia en condiciones de igualdad con respecto al resto de las demás personas.

El MNP constató que las personas declaradas inimputables no tenían suficiente información sobre el proceso judicial que enfrentaron, ni comprendieron cabalmente lo que implicaba la resolución judicial, lo que resulta en una afectación al principio de igualdad y no discriminación y al derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Por otra parte, estas personas enfrentan mayores períodos de privación de libertad que los máximos establecidos por el código penal respecto del delito cometido, lo que afecta también el principio de proporcionalidad.

Las medidas curativas se cumplen en hospitales psiquiátricos, en especial en el Hospital Vilardebó, en condiciones que en muchas ocasiones afectan la dignidad de las personas y constituyen barreras para el goce de los derechos de la salud mental, dado que resultan restrictivas, estigmatizantes y acotadas en su aporte terapéutico. Se realizan tratamientos sin consentimiento libre e informado, las personas permanecen en aislamiento -en algunas ocasiones, por largos períodos de tiempo- y se da la prolongación de la hospitalización más allá del alta médica.

En definitiva, las condiciones estructurales y la situación de especial vulnerabilidad de estas personas incrementan los riesgos de tortura u otros malos tratos. El informe concluye con una serie de recomendaciones orientadas a la revisión del modelo de inimputabilidad y la armonización con la normativa nacional respecto de la convención por los derechos de las personas con discapacidad.

Este grupo tiene por objetivo armonizar la normativa a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Convención Contra la Tortura y Otras Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Como objetivos específicos, tiene el de analizar y generar informes sobre la normativa nacional e internacional en esta materia, a la luz de las convenciones mencionadas, entre otros instrumentos de derechos humanos; proponer las modificaciones normativas necesarias a efectos de asegurar la armonización normativa; y reflexionar y proponer el debate sobre la figura de la inimputabilidad, a la luz de la evidencia nacional y la experiencia internacional, e involucrando la participación de las personas en situación de discapacidad.

Se realizará un informe de situación, revisión normativa y recomendaciones relativas a la adecuación normativa.

8. Grupo de trabajo sobre el derecho a la alimentación

El Dr. Martín Prats señaló que el grupo fue creado el 22 de mayo de 2024, ante la necesidad de trabajar en un marco normativo para garantizar el cumplimiento de este derecho, cuyas carencias fueron evidenciadas en el marco del trabajo realizado por el “Mirador DESCA”.

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante DESCA) han sido reconocidos tanto en el ámbito universal como regional de derechos humanos, lo que supone abordar los derechos humanos en el marco del compromiso con las generaciones futuras y de la protección del ambiente para garantizar su sostenibilidad.

En este sentido, la INDDHH ha desarrollado una plataforma de seguimiento de los DESCA llamado el “Mirador DESCA”, que es coordinado por el Área de Estudios. El objetivo de este mirador es presentar información permanente que refleje los compromisos asumidos por Uruguay en materia de DESCA y que permitan el seguimiento de avances y brechas respecto a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El mirador hace un seguimiento de la normativa vigente, de los compromisos normativos asumidos por el Estado uruguayo, de la legislación nacional y también de las políticas públicas impulsadas en el marco de estos derechos.

Precisamente en relación al derecho a la alimentación, se recopiló y analizó la normativa, y se advirtieron vacíos normativos y por lo tanto la necesidad de contribuir en el debate público sobre el reconocimiento de este derecho y su realización en el Uruguay.

El objetivo principal del grupo es trabajar sobre los insumos necesarios para la aprobación de un marco normativo sobre seguridad alimentaria y alimentación adecuada. En los últimos años ha habido en nuestro país iniciativas en ese sentido, pero todavía no han culminado con la aprobación de una ley.

Este grupo empezó a funcionar en junio de este año y sesiona mensualmente en forma regular. Está integrado por el Área de Estudios de la INDDHH; el MIDES; el Instituto Nacional de Alimentación; el Ministerio de Salud Pública a través de sus áreas y programas de salud y nutrición; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Congreso de Intendentes; la Universidad de la República a través de su núcleo interdisciplinario; el Observatorio del Derecho a la Alimentación; la Unidad Alimentaria Metropolitana; la Red de Organizaciones Comida Solidaria, la Red de Ollas Populares; y también se cuenta con asistencia técnica de la FAO.

Se lograron acuerdos básicos respecto a la necesidad de una ley marco de alimentación en el país y respecto a un conjunto grande de conceptos y definiciones necesarias para desarrollar esa ley.

Además, se acordó discutir para llegar a un consenso entre los integrantes respecto a varias temáticas. En primer lugar, en relación al objeto, los objetivos, los principios y las definiciones que debe contener una ley sobre derecho a la alimentación.

En segundo lugar, definir el alcance y el ámbito de aplicación; es decir, expresar claramente a quién se aplica la ley, cuál es el ámbito subjetivo y objetivo de la misma. Por ejemplo, indicar quiénes son los titulares del derecho y sus garantes, incluir la obligación de proteger y regular las actividades de terceros y establecer las responsabilidades específicas de las autoridades del Estado.

En tercer lugar, alcanzar acuerdos respecto a cuáles deben ser los ámbitos específicos de protección, la definición del derecho, las condiciones para su ejercicio y las disposiciones especiales referidas a poblaciones especialmente vulneradas. También llegar a acuerdos sobre las obligaciones del Estado y los principios que deben regir sus acciones, como por ejemplo, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, la no discriminación, entre otros.

Además, se suma el tema de la gobernanza, que refiere a la institucionalidad que tiene que existir detrás de este tema para coordinar acciones e impulsar las obligaciones estatales, y a la necesidad de establecer sistemas de evaluación y monitoreo a las políticas públicas en este sentido.

El grupo tiene fijadas reuniones mensuales hasta diciembre de 2024, pero maneja la posibilidad de continuar sus actividades el próximo año en caso de ser necesario. Como estamos en un período especial donde la legislatura va a cambiar el año que viene, el objetivo del grupo es presentar a la nueva legislatura insumos para que pueda trabajar hacia la aprobación de esta ley que deseamos.

● Intervenciones de los participantes

Una vez finalizada la exposición, se abrió un espacio para que las personas participantes compartieran sus preguntas y comentarios en relación a lo expuesto.

A continuación, se exponen las intervenciones⁴ y sus correspondientes respuestas.

Intervención del público: Se manifiesta que durante las últimas tres asambleas han solicitado la rectificación del Convenio 169 de la OIT, que abarca a las personas afrodescendientes en tanto respeta su derecho a su cultura, siendo mucho más que una cuota laboral. Este convenio es una herramienta fundamental para trabajar en relación a la cultura Charrúa. Preguntó si la INDDHH tiene pensado algo sobre el tema.

⁴ El contenido de las intervenciones se parafraseó y en algunos casos se sintetizó para una mayor comprensión. Asimismo, se omitió la referencia a su emisor, en los casos en que no se presentaron durante la intervención.

El Lic. Oscar Rorra expresó que, como fue señalado previamente por el director Marcos Israel, estamos en deuda con la temática de pueblos originarios e indígenas, y se comenzará a trabajar sobre ello. Aproximadamente a fines de 2024 o en 2025 se tendrá una respuesta más precisa sobre el tema.

Intervención del público: *Se expresa que no se está hablando de la cultura indígena como una cultura viva, y que por otro lado la experiencia les dice que dejar las respuestas para el futuro indica que no va a haber respuesta. Indicó que tenemos un 44 % de tatuaje indígena; y destacó la importancia de trabajar el tema indígena de forma independiente del tema afrodescendiente, para poder realizar un mejor contralor en relación al trabajo realizado. Por otro lado, la reivindicación del tema indígena está vinculada al derecho al agua. Observó que en 2010/2011, el entonces presidente dijo que se iban a reconocer como indígenas a quienes pudieran justificar tres generaciones anteriores de nativos, lo que calificó de “europeo”. No hay una intención real de reconocer derechos, porque ello implica reconocer su violación. ¿Va a haber una verdadera respuesta?*

El Lic. Oscar Rorra destacó la importancia de que aporten respecto al tema durante la discusión del Eje 3 sobre planificación.

Intervención del público: *Se señala que en 2023 hubo un eje étnico racial en el que se plantearon estos temas. Los grupos hacen un trabajo académico vinculado a las leyes, que interesa a las organizaciones sociales pero no les constituye como militantes cotidianos, por lo que reclamó sobre el rol que tiene la INDDHH y las organizaciones sociales dentro de esta. Exigió espacios de participación real donde se les escuche y se potencien sus acciones. Año tras año asisten a la asamblea para “hacer escuchar” su voz e inquietudes, pero pasa el tiempo y los reclamos se repiten.*

Valoró positivamente una legislación sobre el derecho a la alimentación y calificó de central el papel de la Red de Ollas Populares que asumió la tarea de garantizar alimentos a nuestra sociedad durante la crisis alimentaria. Respaldó la necesidad de tener una mirada de soberanía alimentaria, dado que el derecho a la alimentación está comprometido en términos tanto de acceso al alimento como del derecho a producir alimentos sanos. En ese sentido, refirió que en nuestro país se produce soja para alimentar cerdos en el exterior y diariamente se vulnera el derecho a producir alimentos sanos por el avance del agronegocio. Hubo un avance interesante a nivel del PARLASUR respecto a incorporar la dimensión de la soberanía alimentaria. También en la FAO, hay una organización social muy importante promoviendo este concepto pero hay una gran disputa con el MGAP. Les parece importante tomar ese marco e involucrar a quienes están defendiendo día a día el derecho a producir alimentos sanos para la población de nuestro país.

El Dr. Martín Prats destacó el valor del comentario y señaló que esos conceptos y temas ya se están discutiendo en el ámbito del grupo de trabajo. Ha sido un planteo de las organizaciones sociales, y se han tenido en cuenta los antecedentes referidos, como los documentos del PARLATINO, el proyecto de ley marco del PARLATINO, y también otros trabajos y proyectos realizados en Uruguay. Además, el grupo también tiene pensado invitar en algunas de sus sesiones a otras personas e instituciones que puedan aportar en la materia.

Están trabajando y esperan que el informe final pueda contener estas aspiraciones.

Intervención del público: El participante consulta si la INDDHH puede incidir ante la OEA para que se concrete la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de la Convención Interamericana por los Derechos Humanos. Comentó que la sociedad civil está trabajando a través de la REDAM y ha enviado cartas al MRREE y a INMayores, pero no han logrado destrabar el tema, pese a que desde hace un año debería estar en funcionamiento. Cree que podría hacerse a través de la INDDHH.

El director Bernardo Legnani explicó que es un tema estrictamente legal. La INDDHH es un órgano desconcentrado de la Asamblea General del Poder Legislativo y no posee facultades en materia de iniciativa legislativa, aunque sí puede recomendar la aprobación de proyectos de ley y remitir anteproyectos de ley para su estudio, debate y eventual aprobación por el Poder Legislativo.

El grupo de trabajo sobre el derecho de las personas mayores pretende ser un pequeño aporte al seguimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hemos instrumentado mecanismos de seguimiento que la Convención prevé que sean dispuestos por ley.

Durante la próxima legislatura, se analizará si se cuenta con una mayor contemplación para remitir al parlamento un eventual anteproyecto de ley que, nos permita instrumentar lo que ya hicimos a través de resolución del Consejo Directivo, es decir, crear este grupo de trabajo.

Intervención del público: Indica que, a 7 años de aprobada la ley de salud mental, estamos a meses de cumplir algunas disposiciones como el cierre total de los hospitales monovalentes. En ese sentido, preguntó qué se ha conversado desde la INDDHH para dar cumplimiento a la ley, ya que hay que solucionar los aproximadamente 600/700 egresos que eso implica.

El Lic. Heber Da Cunha señala que en la INDDHH hay una Área de Salud Mental relacionada a la ley. Por su parte, el Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada está integrado también por organizaciones de la sociedad civil más vinculadas a la salud mental, ya que existe una intersección entre salud mental y discapacidad mental o psicosocial.

Una de las cosas que va a vigilar y monitorear ese Consejo es el cumplimiento de las leyes, como por ejemplo se mencionó previamente lo referido a protocolos y leyes sobre educación.

Intervención del público: *Se señala que, el año pasado, la INDDHH realizó un trabajo muy interesante en relación al baremo único que contó con gran participación. Pese a ello, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley referido al tema, que dispone crear un grupo de trabajo para resolver el tema. Preguntó si el trabajo realizado por la INDDHH incidirá en la discusión en el Parlamento.*

La INDDHH participó de la construcción del baremo desarrollado por MIDES con el apoyo de UNFPA y la sociedad civil organizada. Una parte, es la herramienta, elaborada por un consultor chileno y que se basa en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad, que es lo que corresponde en tanto incorpora aspectos en los que las medidas actuales son insuficientes.

La INDDHH va a apoyar la aprobación de esa ley, y luego deberá discutirse la aplicación de ese baremo. Es una buena herramienta, pero hay que definir quién decidirá cuándo las personas están o no en situación de discapacidad, y el porcentaje requerido.

El Parlamento siempre convoca a la INDDHH, y se está promocionando que no solo se llame a la Unidad de Población en Situación de Discapacidad, sino también al Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada.

Por otro lado, en la Defensoría del Pueblo se han recibido muchas denuncias vinculadas a las pensiones por discapacidad y su denegación. En ese sentido, hay un equipo que junto con algunos directores del Consejo Directivo, trabaja el tema y realiza el seguimiento al estado de aprobación de la ley, para en base a ello definir qué acciones tomar desde la INDDHH.

Intervención del público: *Se auto identifica como migrante y oriundo de Bolivia. Preguntó por qué cuando se hacen este tipo de informes, no se presentan los objetivos o las metas trazadas en la gestión previa. Opina que ello permitiría identificar cuáles se han alcanzado y cuáles no y por qué, y evitaría el reclamo en relación a aquellos temas que no tienen avances. Sería ideal saber dónde estamos y hacia dónde vamos.*

La directora Jimena Fernández expresó que se está avanzando al respecto. Para ello, en el Plan Estratégico 2024-2028 se han incluido indicadores que permitirán comenzar a medir el cumplimiento de los objetivos y responder con mayor precisión a las inquietudes manifestadas.

Intervención del público: *Se señala que, en el pasado, la Unidad Étnico Racial tuvo un área que abordó el tema de los pueblos originarios, pero se abandonó; lo que implica un retroceso en la temática dentro de la INDDHH y ha originado un reclamo persistente durante las últimas asambleas. Refirió que la responsabilidad con la población afrodescendiente no es excusa para no abordar el tema de los pueblos originarios, e hizo énfasis en que debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, y no como una cuestión folclórica. Expresó que sufrieron un genocidio, impune, y que el Estado uruguayo no tiene intención de cambiar la situación.*

La directora Jimena Fernández señaló que el planteo es de recibo, con la aclaración de que lo que existió previamente fue un ERT, que es un grupo de voluntarios dentro de la INDDHH y que no tiene la misma formalidad que un Área o Unidad.

Para el próximo año, puede pensarse un acercamiento con sus organizaciones, pueden solicitar una reunión para comenzar a dialogar sobre la temática y definir un primer punto sobre el que comenzar a trabajar, para así incluirlos dentro de las actividades de la INDDHH.

Intervención del público: Se comparte la preocupación respecto a la posibilidad y abuso del ingreso a los ELEPEM por motivo de “confusión mental”, que muchas veces es ocasionada por una infección. Esto se efectiviza con la sola firma del director técnico y del titular del ELEPEM, no siendo necesaria la firma de su familia ni de curadores. Esta situación contraviene la Convención, los derechos humanos, la ley de Salud Mental y la ley de Protección integral de las Personas con Discapacidad. Se vulneran todos los derechos de las personas mayores. La Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental se lo planteó al MSP, sin resultados. El Movimiento Familiares y Residentes de ELEPEM se lo planteó a MIDES, INMAYORES, MSP y a la Dra. Claudia Mahler, experta independiente de la ONU, y tampoco obtuvieron un resultado. Preguntó si la INDDHH dialogó sobre el tema con legisladores y sobre los avances al respecto.

El director Bernardo Legnani relató que el tema fue objeto de varios planteos dentro del grupo de trabajo sobre los derechos de las personas mayores. En consecuencia, se elaboró un anteproyecto de ley que prevé que la persona adulta mayor de 65 años de edad que haya sido institucionalizada, tenga el derecho a oponerse al mantenimiento de su internación o institucionalización una vez recuperada, pudiendo solicitar su desinstitucionalización ante la Justicia. Para ello, se define un proceso, que no está previsto en el Código General del Proceso ni en otra ley

El anteproyecto cuenta con la aprobación de quienes integran el grupo de trabajo. Además, unos dos meses atrás, el director Bernardo Legnani y la directora Jimena Fernández comparecieron ante la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados para dialogar sobre el tema. El intercambio permitiría concluir que podría tener contemplación legislativa.

Por su parte, la Lic. Ana Durán expresó su preocupación respecto al tema, particularmente en tanto confunde la “confusión mental” con el “síndrome confusional”, que es un episodio agudo y momentáneo.

Las internaciones se realizan sin una previa valoración geriátrica integral. Se ha detectado que faltan profesionales capacitados en gerontología y geriatría que valoren a las personas mayores desde un enfoque integral que contemple su mente, su cuerpo, su entorno, su familia, sus afectos y apoyos, o falta de estos.

Además, la persona que permaneció institucionalizada y se recuperó luego de recibir los cuidados necesarios, debe tener derecho a decidir si desea volver a su hogar e independencia, y al momento no está contemplado. Por ejemplo, se da la situación de que las personas que residen en complejos habitacionales del BPS, pierden la posibilidad de volver luego de haber estado en cupo cama. Las personas quedan atrapadas por el sistema, que no les deja más alternativa que permanecer en un residencial.

III. INSTANCIA PLENARIA

La discusión del plenario se centró en los ejes 1 (Alianzas estratégicas), 3 (Exigibilidad y monitoreo) y 4 (Promoción de derechos e incidencias) del Plan Estratégico 2024-2028 de la INDDHH, que fuere previamente presentado a las organizaciones en ocasión de la Pre Asamblea realizada el 11 de julio de 2024.

Estos ejes sirvieron para organizar el plenario en bloques de discusión. A los tres ya mencionados, se agregó un bloque extra para abarcar intervenciones no relacionadas a los demás.

Respecto al eje 2 (Desarrollo organizacional) se reservó para el trabajo de funcionarios y funcionarias, por referirse a cuestiones internas de gestión de la INDDHH. No obstante, se aclaró que cualquier aporte o sugerencia será bienvenida.

Al momento de su inscripción, las personas pudieron manifestar su intención de ser oradoras y en cuál o cuáles ejes participarán. A partir de ello, se generó una lista de oradores para cada bloque.

Se cedió la palabra en el orden de inscripción, y cada participante contó con 3 minutos para exponer. Asimismo, cabe señalar que algunas personas cedieron sus 3 minutos a otras, lo que explica la extensión de algunas exposiciones en relación a otras.

La instancia fue moderada por el Dr. Nils Helander y la Lic. María Celia Robaina, quienes son parte del funcionariado de la INDDHH desde hace aproximadamente 8 años y han participado de varias asambleas.

En ese sentido, expresaron su compromiso con los objetivos y mandatos legales de la INDDHH y, en esta ocasión, su intención de generar un espacio constructivo de intercambio e integración entre la INDDHH y la sociedad civil.

A continuación, se exponen las intervenciones de las personas participantes⁵ y, en algunos casos, las respuestas por parte de miembros de la INDDHH.

⁵ El contenido de las intervenciones se parafrasea y en algunos casos se sintetiza para una mayor comprensión. Asimismo, los documentos leídos y oportunamente presentados ante la INDDHH durante y después de la asamblea, se incorporan como anexos.

Antes de iniciar los bloques de discusión, se cedió la palabra a Elena Zaffaroni, quien dio lectura a un documento presentado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Expresan que, frente a los hallazgos y el continuo trabajo realizado, dejan constancia de su apoyo, respaldo y agradecimiento a ese trabajo continuo de la INDDHH, que les devuelve reparación y confianza para mantenerlos en el camino de la verdad y justicia.

1. Bloque de discusión 1 - Eje 1, Alianzas estratégicas

Marisa Rodríguez, Colectivo Memoria en Libertad

En esta intervención, se dio lectura a la Declaración, que realizaron las organizaciones sociales, en la cual se pronunciaron colectivamente y públicamente cuestionando la metodología de trabajo de la asamblea tal como lo hicieron en 2023.

Luego de la lectura del documento, María Celia Robaina agradece que las organizaciones sociales traigan aportes, que hayan interactuado y que realicen una crítica constructiva, en tanto ayuda y nutre a la Institución, la cual se quiere potenciar.

Jorge Núñez, presidente de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana

Proveniente del interior, representa a una institución sin fines de lucro, recientemente aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura. Relató que, en el año 2022 la INDDHH le abrió las puertas para la realización del proyecto “agua potable en la zona rurales” siendo interesante poder replicarlo en otras zonas rurales. Presentaron ante el Presidente de OSE, un proyecto que permitió dar el servicio de agua potable, a más de 600 familias y a la escuela rural 205.

Asimismo, invitó a la INDDHH a pensar en una alianza estratégica con OSE y UTE, que implique mejorar los servicios básicos que necesita el interior profundo.

Selena Scotti, Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay

Una de las preguntas que les surgió como estudiantes, es por qué integran la INDDHH y qué deberían hacer para sentirse parte. Si bien expresó que no tienen respuesta, buscan que la misma no sea meramente estadística y de medición, sino coyuntural y cultural. Destacó el interés que tienen en que la INDDHH trabaje con estudiantes de todo el país.

Si bien mencionó que hay discursos y propuestas por parte de la INDDHH, destacó la falta de acción y ejecución respecto al derecho a la educación. Asimismo, reflexionó respecto a cómo ser seres sociales si no se cuenta con agua potable, con una vivienda digna, o con una alimentación cubierta.

Propusieron establecer agosto como el mes estudiantil, invitando a las organizaciones sociales a que se sumen en la reivindicación de derechos en ese mes.

Cecilia Iannino, Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre

Dio lectura a un documento, cuyo contenido versó sobre la protección y promoción de los derechos humanos.

En el año 2023, como organización, vivieron el inicio del reciclaje de la Casa, y dejaron de dictarse los talleres que se daban allí. Cuando se reabrió la Casa, no se encontraba el cartel que los identificaba. Ante la realización de los reclamos pertinentes, el MEC les respondió que se pasarían a llamar “Proyecto Urbano”. A raíz de este suceso, remarcó la respuesta recibida por la INDDHH, quien entendió que existió vulneración de derechos al no reconocerse el derecho a la memoria colectiva.

Nelly Guarneri, Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca

Se limitó a hablar de algunos derechos, remarcando que, “quien defiende un derecho, defiende todos”.

La asociación se incorporó hace más de un año al Movimiento Nacional de Discapacidad, con el fin de incidir con más fuerza en la defensa de los derechos de las personas afectadas en su salud mental.

Los mueve la preocupación de observar que la problemática de salud mental a menudo no se contempla al hablar de discapacidad. No obstante, desde que integran ese movimiento, hay una mayor y mejor comprensión de los temas.

Sofía Mendieta, Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay

Sus mayores intereses como estudiantes son los derechos a la educación, a la vivienda digna, al agua potable, y a la salud mental. Entienden necesario que la educación reciba el presupuesto que se merece, debiéndose conocer por qué se está en lucha, entender por qué se dan estas problemáticas y por qué les interpelan como estudiantes.

Por último, manifestaron su disposición y deseo para trabajar en conjunto.

2. Bloque de discusión 2 - Eje 3, Exigibilidad y monitoreo

Marisa Rodríguez, Memoria en Libertad

Presentó un documento en el que se informa sobre la cantidad de niñas y adolescentes que fueron afectados por el terrorismo de Estado, y señalan que las leyes reparatorias, salvo excepciones, no los incluyen.

Destacó la resolución n.º 751/2019 de la INDDHH, que recomienda al Estado que se los reconozca y repare como víctimas directas del terrorismo de Estado. Asimismo, solicitan a la INDDHH que se exija al Estado su cumplimiento, y que este último implemente las medidas administrativas necesarias para garantizar la prestación efectiva de la cobertura integral de salud prevista en la normativa legal vigente.

Andrés Rodríguez, Asociación Autismo en Uruguay

Leyó un documento en el que se remarca la permanente vulneración de derechos de las personas autistas, vulneración que en muchos casos se hace extensiva a la familia.

Denunció la postergación de las personas autistas y la mala elaboración de programas destinados a ayudarlas. Destaca que no son oídas, ni recibidas, y manifiesta que el autismo no interesa. Por tanto, exhortó a la INDDHH a ocuparse en profundidad del tema.

Sergio Franches, Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano

Expresó que la creación de la INDDHH ha intentado ser lo que en otros países es el Ombudsman, a través del cual la sociedad puede controlar y aconsejar a los gobiernos de turno. Sin embargo, mencionó que el sistema político tergiversó el espíritu de la ley en lo que refiere a la elección de los candidatos a integrar el Consejo Directivo.

Señaló que no se puede controlar al gobierno siendo parte de él. Como prueba de ello, mencionó el hecho de que un partido político pretendió hacer renunciar a un integrante que tuvo el voto unánime del Parlamento; hecho que rebaja la calidad democrática del país. La INDDHH, como representante de las organizaciones sociales, debería tener una posición clara y contundente sobre este tema.

Si bien ya es cosa juzgada, van a trabajar con organizaciones sociales para cambiar la decisión.

Decler García, Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano

Felicitó a las estudiantes de Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay, señalando que es necesario comprender la abarcabilidad del tema de los derechos humanos, que no solo corresponde a las personas desaparecidas, la salud o la educación, sino que hay mucho más.

Hilde Hans, Federación Caminantes - Familiares por Salud Mental, Grupo de la Esperanza, Organización de Usuarios y Usuarías De Salud del Oeste, Cooperativa de Vivienda Hamabi, Cooperativa Social Dodici

Mostraron preocupación por los hechos en torno a la situación del Área de Salud Mental, producto de una denuncia de acoso laboral de una funcionaria ante el Consejo Directivo de la INDDHH.

Presentó una declaración elaborada por varias organizaciones en la cual dan cuenta que la INDDHH debe ocupar un lugar esencial en la construcción de la política pública de salud mental, conforme a la ley 19.529. Solicitaron que sea revertida la situación, informando a las organizaciones cómo se cumplirá con los objetivos respecto a salud mental.

El Dr. Nils Helander intervino y, desde su posición como funcionario de la INDDHH, informó que es cierto lo relativo a la denuncia de acoso laboral presentada al Consejo Directivo, y que se había dispuesto la intervención y la aplicación de un protocolo interno para casos de acoso sexual y laboral. Se está realizando la investigación correspondiente y hay una Comisión que oportunamente expedirá su informe, para que finalmente el Consejo Directivo resuelva.

La directora Jimena Fernández también constató los hechos e hizo hincapié en la aplicación del protocolo y la conformación de la comisión, acotando que está integrada por cinco miembros y que actúa en el marco de la confidencialidad, a efectos de brindar garantías.

Además, señaló que las notas remitidas por las organizaciones sociales motivaron la aplicación del protocolo y forman parte del expediente correspondiente.

Selena Scotti, Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay

Problematizó la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos a través de una interrogante, ¿cómo supervisar, sin antes conocer y comprender en profundidad los derechos humanos?

Lo fundamental es poder educarse como personas de la sociedad civil. Hizo énfasis en que toda la educación terciaria sea autónoma y cogobernada, y no solo la Udelar como hasta ahora. Reiteró que, para poder educarse, se necesita agua, una vivienda digna y gozar de salud mental, con una perspectiva comunitaria y de accesibilidad, y no solo sanitaria.

Catherine Valiente, Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Enseñanza Privada

Señaló que en la rendición de cuentas se habló sobre el seguimiento que la INDDHH realizaba al INAU y las recomendaciones realizadas, sobre todo a los centros de acogida. Sin embargo, no se habló sobre el seguimiento en la relación de INAU y CAIF. Señaló que no se conoce cómo están funcionando los CAIF, ni el seguimiento que debería realizarse a todos los derechos

vulnerados que tienen las niñeces de los clubes de niños y los centros juveniles con los que trabajan.

Es de público conocimiento que los centros han estado atravesado por balaceras, así como también las inadecuadas condiciones en las que trabajan, sin recibir respuesta del INAU.

Resaltó que, para garantizar infancias sanas, y un trabajo sano y digno, es necesario un control y un monitoreo de todos, incluso de la INDDHH.

Lilian Celiberti, Cotidiano Mujer

Opinó que los derechos humanos son siempre un punto incómodo de la agenda política, de cualquier partido. Los derechos humanos en un mundo desigual, solo pueden ser un tema conflictivo y, por lo tanto, se requiere una institución fuerte que tenga como eje central la exigibilidad de los derechos.

Sin perjuicio de que entienden que no resulta lógico dar respuesta a todo, siendo una meta que no le corresponde solo a la INDDHH, sino que forma parte de la cultura del país, actualmente no identifican en esta un eje central en la exigibilidad de los derechos frente a las múltiples vulneraciones. Refirió como ejemplo a los casos de abuso sexual.

Este eje tiene que estar sujeto a reformulación. No se trata solo de indicadores, sino que además, la exigibilidad tiene que ver con cómo proteger los derechos efectivamente, siendo fundamental determinar alguna prioridades.

Entienden que las infancias protegidas por el Estado son una prioridad, y han visto mucha debilidad en la directiva actual de la INDDHH en cuanto a la exigibilidad de las acciones del Estado en relación a la protección de derechos.

Por último, expresó que la directiva de la INDDHH no puede argumentar el rechazo a la solidaridad internacional por parte de la población uruguaya, la INDDHH “no puede decir que solidararse con Palestina es una acción extra territorio, el territorio es el mundo”.

Antonio Rammauro, Comisión Memorias de la Costa

Enumeró y nombró a todas las organizaciones que forman parte del Colectivo de Organizaciones y que presentaron una declaración en la que cuestionan la metodología de trabajo de la asamblea, al igual que lo hicieron en el 2023.

La declaración da cuenta de la diversidad y representatividad de las organizaciones que se encuentran comprometidas con la INDDHH. Señaló cómo la INDDHH debe garantizar la participación, transparencia, descentralización e independencia, y expresó que buscan que la INDDHH cumpla con su tarea de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, enfrentando la violencia institucional con un efectivo control del Estado.

Cristina Prego, Asociación Civil el Paso

El monitoreo y la exigibilidad es fundamental en el trabajo en la INDDHH, así como también la difusión del resultado de esas investigaciones. Por tanto, se debe garantizar y resguardar la independencia y autonomía de la INDDHH en relación a sus acciones de monitoreo ante el cumplimiento o incumplimiento de los derechos humanos por parte de los organismos estatales.

Eso implica que la información recabada sea informada con celeridad a los organismos involucrados y, especialmente, a la ciudadanía para su consideración. Señaló la importancia de que el tiempo no se dilate, de modo de que las organizaciones de la sociedad civil puedan acompañar ese proceso de monitoreo de forma articulada, garantizando el derecho humano a la información.

Asimismo, solicitó a la INDDHH que profundice el monitorio y la sistematización de las prácticas de violencia institucional, especialmente la violencia institucional de género y generacional, tanto por omisión de respuesta como por acciones de revictimización, con especial énfasis en los organismos vinculados al acceso a la justicia y a la protección, especialmente, de niñeces. Particularmente, señaló que se deben atender situaciones tales como la separación arbitraria de niñeces de sus protectoras adultas, resaltando la palabra y necesidades planteadas por las niñeces en los procesos judiciales.

Propuso un grupo de trabajo que dé seguimiento a los casos de violencia institucional y violencia de género hacia niñeces y mujeres que viven distintas formas de violencia, especialmente el maltrato, abuso y explotación sexual.

La INDDHH debe avanzar en el monitoreo del entorno habilitante para el trabajo de la sociedad civil, no solo en el marco regulatorio y en las acciones de persecución y debilitamiento que hay en nuestro país, sino también, respecto a la injerencia de los grupos anti derechos y a las posibilidades de sostenibilidad económica.

Expresó que no hay democracia posible si no se garantiza la participación de la sociedad civil de forma efectiva y sin ningún tipo de riesgo, tanto para el bienestar personal de los defensores de los derechos humanos, como para la credibilidad y legitimidad de las organizaciones de larga data que en nuestro país monitorean y defienden los derechos humanos.

Lilian Paonlo, Asociación Civil Grupo Solidario a Redoblar

Presentó un documento en el que se presentan como una asociación que apoya las situaciones problemáticas de salud de víctimas de terrorismo de Estado, amparadas en las leyes 18.033 y 18.596, mal llamadas “leyes reparatorias”.

Como aspectos a mejorar, destacó lo relacionado al mal o nulo funcionamiento de la oficina de víctimas de terrorismo de Estado y de personas que se encuentran transitando situaciones de salud mental.

Su prioridad es que los derechos sean realmente hechos, viéndose efectivizados en la práctica. Adhirieron al planteo realizado por Memoria en Libertad en cuanto a las víctimas de terrorismo de Estado, señalando que las leyes alcanzan hasta las personas que se encuentran en la tercera generación.

Ana Aguerre, Servicio Paz y Justicia

Compartió el planteo realizado por las demás organizaciones en cuanto a la exigibilidad y monitoreo.

Intervención de persona que no se identifica: Los convenios a nivel internacional deben ser cumplidos, y resulta importante armonizar la legislación nacional con la internacional. Señaló que Uruguay ha firmado muchos convenios que no se cumplen en la práctica.

Mostró preocupación por la situación de las personas adolescentes que se encuentran privadas de libertad y por las internaciones compulsivas, ya que no se ha resuelto a dónde van a parar estas personas.

La INDDHH tiene un rol fundamental a través del MNP en exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

Megan Reyes, presidenta de la Comisión Directiva de Luna Nueva

Resaltó su preocupación por la situación de las clínicas de salud mental, la sobre medicación, y la vulneración de las familias. En los últimos tiempos, ha habido muchos homicidios y personas lesionadas por armas de fuego con niñeces involucradas. Al respecto, calificó de errónea la forma en la que se cierran los casos.

Entiende necesario fortalecer el monitoreo de los espacios de cuidado en las niñeces y el seguimiento de las recomendaciones, y reforzar los mecanismos de denuncias protegidos para las niñeces, promoviendo una mirada específica y espacios de formación en derecho.

Consultó a la INDDHH sobre cómo promueve que la voz de las niñeces sea tenida en cuenta en los grupos de trabajo, y destacó la importante que se los escuche y tenga en consideración.

Marcelo Cantón, Centro por las Infancias, Jacinta Balbela

Compartió el aporte realizado respecto a la armonización de la legislación y lo referido a hacer valer y garantizar los derechos humanos cuando son amenazados o vulnerados. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que asumir el rol que puedan, el que les otorga el derecho interno y el derecho internacional.

A nivel internacional hay mecanismos que pueden ser utilizados para garantizar los derechos humanos, por ejemplo, el habeas corpus, la acción de amparo, el derecho de petición, las denuncias, las apelaciones o las casaciones. No obstante, mencionó que primero hay que agotar los recursos internos.

Señaló las limitaciones que tiene la INDDHH respecto a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y planteó la posibilidad de mejorar la ley de la INDDHH, fortalecer las instituciones existentes o crear nuevas.

3. Bloque de discusión 3 - Eje 4, Promoción de derechos e incidencias

Águeda Restaino, secretaria de la Asociación de Animadores y Auxiliares Gerontológicos

Las personas mayores son invisibles en todo momento, su atención es un tema transversal que merece una formación desde las infancias, en especial respecto a entender cuál es el problema en afectar el envejecimiento y la vejez.

Remarcó la necesidad de defender la ley 19.430. En estos tres años, retrocedieron los derechos de las personas mayores y el Sistema Nacional Integrado de Cuidado y de Salud, y preocupan las demoras en la atención.

Las personas mayores tienen derecho al acceso a la justicia, pero sobre todo derecho a la participación como menciona el artículo 8 de la ley.

Federico Martorelli, Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT

Señaló que, si bien estas asambleas son importantes para algunas organizaciones en tanto pueden intercambiar entre ellas y expresar sus opiniones y reclamos, quienes han asistido a varias asambleas reclaman que su voz no es escuchada, y que sus saberes, experiencias y trayectorias no son contempladas.

La INDDHH es una herramienta importante en la defensa de los derechos humanos, y es parte del Estado. En ese sentido, las organizaciones quieren potenciarla, y le exigen acciones concretas y no buenas intenciones o planes para el futuro.

Si bien los abordajes normativos que realiza la INDDHH también son importantes y son insumos para las organizaciones, no son centrales. Quienes militan y trabajan en territorio asisten a la asamblea para resolver cuestiones concretas.

En la Asamblea Nacional realizada en 2023, se preguntó cuáles son los criterios para admitir o no el ingreso de las organizaciones a la INDDHH, pero no se obtuvo respuesta. La INDDHH debería dar una respuesta clara y por escrito a esa pregunta, y además debería realizar en la Asamblea Nacional una “devolución”, tanto a las organizaciones rechazadas como a las aceptadas.

Fernando Moyano, Coordinadora por el Retiro de Tropas de Haití

Expresó que la organización que representa ha participado en las asambleas de la INDDHH desde sus inicios, presentando aportes, documentos e investigaciones en relación a los temas sobre los que hablan.

La declaración realizada por las organizaciones sociales tiene una cláusula que refiere a la vulneración de derechos humanos en el exterior, tanto a través de prácticas estatales como de personas que ostentan cargos públicos.

La vulneración de los derechos de otros pueblos constituye una invasión armada sobre estos, que contraría las normas internacionales, incluyendo las de Naciones Unidas. Un ejemplo es el caso de Haití, a donde se enviaron las llamadas “misiones de paz” sin mediar guerra ni conflicto, se secuestró a su presidente y se instaló un gobierno de facto. Todo ello a sabiendas del Parlamento, lo que implica responsabilidad institucional. Naciones Unidas lo reconoce pero no lo repara.

Por otra parte, los abusos sexuales cometidos por militares y el abandono de niñeces en Haití se prolonga hasta hoy, con la complicidad y el encubrimiento tanto de los mandos militares como del MDN. Lo mismo sucede con lo acontecido en la República del Congo.

Jorge Eduardo Núñez Iribarne, Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana

Realizaron una investigación relacionada con el presupuesto nacional, y concluyeron que las autoridades están violando el presupuesto nacional, especialmente el artículo 7 que refiere a seguridad y la vida de los ciudadanos.

Investigaron, se reunieron con autoridades, realizaron pedidos de acceso a la información pública a las 19 Intendencias y Juntas Departamentales.

Particularmente en relación a los accidentes en caminería rural, en que se constatan unos 400 accidentes por año, existe un programa de caminería rural, el proyecto 999, que carece de cualquier tipo de control. Ello viola el artículo 1 del decreto 9515.

El 30 de agosto de 2024, presentarán una denuncia penal, ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas.

Señaló que es una cuestión que no tiene que ver únicamente con este gobierno, sino que ocurre desde hace años y se ha naturalizado.

Se va el tiempo y los dineros públicos, por lo que entienden necesario que la INDDHH realice un control presupuestal y que incorpore una gestión dinámica. La asociación identificó uno de los incisos, y no saben qué puede pasar con el resto, debe controlarse cada inciso.

Afirmó que la participación ciudadana no es solamente votar cada 5 años, sino que implica un control ciudadano que debe realizarse los 365 días de los 5 años.

Diego Andrés Cabrita Mora, Agenda de Derechos

Agenda de Derechos es una asociación civil nueva que trabaja con migración, refugio, asilo, diversidad, prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Explicó que Uruguay cambió su matriz y actualmente es un país de recepción de migrantes, solicitantes de refugio y refugiados. Eso implicó un cambio en la modalidad delictual de la trata de personas. En este trimestre presentaron unos 25 casos ante la Fiscalía General de la Nación.

Destacó la importancia de que se permita a la sociedad civil colaborar en la reintegración de las víctimas de trata en Uruguay, como sí se les permite algunas veces en la identificación de los casos.

Respecto al caso de las 28 personas venezolanas encontradas en Artigas en una mina de amatista, únicamente 5 permanecen en Uruguay. Al resto se le tramitó un retiro “voluntario” a Venezuela, pero la realidad es que no se les brindó la posibilidad de quedarse. Mientras se encontraban en el programa de protección encerrados en un hotel sin poder trabajar ni hacer vida normal, se les preguntó unas 20 veces si querían regresar a su país.

En la guía interinstitucional que refiere al trabajo sobre trata de personas, se menciona a la sociedad civil pero no se la tiene en cuenta para la ejecución de la política pública.

Manifestó que quieren trabajar el tema trata de personas e invitan a generar más puentes y conexiones con todas las asociaciones para visibilizar el tema en relación a personas migrantes en situación de movilidad humana.

Cyro Rodríguez, Consejo de la Nación Charrúa

Manifestó que existe una deuda histórica con los pueblos originarios del Uruguay, y en ese sentido celebra avances tales como la unidad étnico racial de la Intendencia de Montevideo, el Área indígena en la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y el Área indígena en la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT en Paysandú.

Señaló que tiempo atrás trabajaron formidablemente con la INDDHH. Sin embargo, a partir de la asunción del actual Consejo Directivo, se eliminó la temática indígena y no existe participación ni protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la INDDHH.

El año pasado presentaron una solicitud de explicaciones que no fue respondida. Asimismo, se reiteró el cuestionamiento en ocasión de la defensa del el Informe alternativo de derechos humanos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y la persona

representante de la INDDHH brindó explicaciones que resultaron insuficientes para los relatores.

Por su parte, la “Comisión” recomendó a la INDDHH cuidar su autonomía respecto de los gobiernos de turno, y desarrollar políticas institucionales, ya que la INDDHH se ha plegado ante el negacionismo de la Administración.

Indicó que, según los estudios genéticos, en Uruguay, aproximadamente el 38 % de las personas tenemos ascendencia indígena. El último censo del INE refiere un 5 % y CEPAL un 2,7 %. Los derechos de esas personas deben ser respetados.

Jorge Eduardo Díaz Coutinho, Charrúa Oipik Udimar

Remitieron a la INDDHH un documento referido al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Señaló que Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece, entre otros, el derecho a vivir en su identidad. Sobre este punto amplían en el documento, donde refieren a su cultura e identidad.

Por otro lado, expresó su desacuerdo con el concepto de “alianzas estratégicas” al que se refirió el primer bloque. En su opinión, las alianzas tienen que ser ideológicas, de fundamentos, razón, derecho y propósito.

Se generó una alianza de organizaciones sociales que reclaman un cambio profundo en las asambleas y que exigen el derecho a votar e incidir. Por otra parte, entiende necesario que se aclare que solo las organizaciones sociales pueden proponer candidatos al Consejo Directivo.

Ruben Benítez, FUCVAM

En primer lugar, adhirió al documento presentado por Elena Zaffaroni de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La organización presentó a la INDDHH una solicitud de acceso a la información pública con el objeto de conocer la actuación de la INDDHH en lo relacionado al control, seguimiento y monitoreo de todas las prácticas y medidas del relacionamiento internacional del Estado uruguayo con el Estado de Israel; y sobre si la INDDHH ha constatado o verificado, desde el inicio de su mandato legal actual, desconocimientos o violaciones por parte del Estado uruguayo a sus obligaciones internacionales enumeradas en la Opinión Consultiva del 9 de julio de 2004 y en la Opinión Consultiva del 19 de julio de 2024.

En el documento desarrollan el contenido de las referidas Opiniones Consultivas y presentan un relato de acontecimientos contra la población civil de Palestina, entre los que mencionan

asesinatos, mutilaciones, desapariciones, desnutrición y hambruna, enfermedades por falta de higiene y restricciones en el acceso al agua.

Finalmente, expresan que el pueblo uruguayo no merece ser involucrado contra su voluntad en ningún acto de odio o de complicidad en crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado de Israel contra Palestina.

Amanda Brum, Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca

Relató que este año se cumplen 50 años de los fusilamientos en Capilla de Cella, perteneciente al Municipio de Soca. El operativo comenzó en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, con el secuestro de quienes luego serían fusilados el 20 de diciembre de ese mismo año.

Centros clandestinos de reclusión en Argentina, torturas, el vuelo clandestino denominado “vuelo 0”, las torturas del centro clandestino la casona de punta gorda y finalmente los fusilamientos. También fueron secuestrados el niño Amaral García de 3 años, dado a una familia de represores y recuperada su identidad años después. Julio Abreu también apresado fue liberado y amenazado junto a su familia. 30 años después dio su testimonio y ayudó al conocimiento de los hechos.

Estos crímenes fueron cometidos en el marco del “Plan Condor” y ordenados por el Consejo de Seguridad Nacional, órgano máximo de la dictadura.

Recientemente Ricardo Arab fue procesado y se identificaron otros represores responsables del operativo, ya fallecidos. Manuel Cordero también está preso en Argentina por varios delitos de lesa humanidad.

La Comisión aportó y sigue aportando elementos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad para ayudar al más pleno conocimiento de los hechos y la justicia.

Este año están desarrollando un plan de trabajo escalonado para dimensionar el hecho, a través de fondos públicos del gobierno de Canelones que cada año se destinan a organizaciones de derechos humanos de memoria reciente.

La primera actividad fue organizada por la Comisión Pro Sitios de Memoria de la Casona de Punta Gorda y se llamó “Homenaje a las víctimas del centro clandestino de detención y tortura Casa de Punta Gorda”. Se realizó el lunes 20 de mayo frente a la Casona de Punta Gorda, y contó con oradores y un tríptico informativo.

La segunda actividad fue la presentación del preestreno del documental “La vieja canción” acerca de los fusilados de Soca. Tuvo lugar el martes 4 de junio en el teatro Politeama de la ciudad de Canelones. Autoridades del gobierno de Canelones estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra.

La tercera actividad se realizará el jueves 10 de octubre de 2024 a las 18hs y se realizará en Crysol. Consistirá en una mesa redonda en memoria de los fusilados de Soca. Estará integrada por Mariana Mota, Rogger Rodríguez, Federico López y un representante de Crysol. Al final se va a hacer un brindis por la vida.

Finalmente, la cuarta actividad se realizará el 14 de diciembre a las 11 h. Será un acto recordatorio en el Memorial ruta 70 camino de los fusilados, a 200 metros de la ruta 9. Para esta actividad, realizará un video promocional que se difundirá por televisión, radio y redes sociales.

Selena Scotti, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay

Lamentó la metodología de trabajo y lo acotado del tiempo de exposición, lo que impidió que el intercambio sea fluido y coherente.

Manifestó que desean ser un público objetivo en el marco de las capacitaciones en derechos humanos que se proponen en el Eje 4. Asimismo, en vista de que los talleres son una herramienta sobreexplotada y mal aplicada, proponen la realización de un campamento nacional de derechos humanos en el que poder trabajar intensivamente durante varios días.

Por otro lado, la capacitación debe ser de igual calidad entre quienes están privados de libertad y quienes no, entre las personas de Montevideo y las del interior del país; y no deben existir barreras de accesibilidad. Señaló que el espacio en el que se celebró la asamblea no es accesible, y que la INDDHH debería estar a la vanguardia y dar el ejemplo.

Respecto a los objetivos del Eje que se relacionan con asuntos de comunicación, en vista de la falta de recursos humanos en la INDDHH, proponen abordar la problemática del trabajo juvenil e incorporar un programa de becas y pasantías para estudiantes.

Respecto al fortalecimiento de bibliotecas y sitios, si bien están de acuerdo con la línea de acción, sugieren eliminar la referencia al “instrumento de medición”, de modo de quitar lo estadístico y rígido, e incorporar más la perspectiva colectiva y cultural.

María Julia Da Izaguirre, Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria

Se refirió a la ley 19.461 sobre sitios de memoria histórica y las competencias allí atribuidas a la INDDHH.

La ley 19.461 fue aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2018, y es el producto de años de trabajo de la sociedad civil, en acuerdo con instituciones del Estado. La ley se vincula con el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Uruguay en 2012 en Porto Alegre, a través de la suscripción a un documento sobre sitios de memoria, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur.

La ley crea una Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria que funciona en la órbita de la INDDHH y es presidida por esta. En total cuenta con 9 miembros, 5 representantes de la sociedad civil y 4 integrantes del Estado que son la ANEP, Udelar, el MEC y la INDDHH. La Comisión tiene por competencia declarar sitios de memoria y señalar espacios que son reconocidos por su relación con las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado uruguayo en el pasado reciente, y también espacios en que se realizaron actos de resistencia y defensa de las libertades públicas.

A la sociedad civil le preocupan las recientes noticias de prensa que dan cuenta de que, representantes del Consejo Directivo Central y un Consejo “Desconcentrado” -porque actualmente son unipersonales- de la ANEP desconocieron resoluciones de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria para señalar el sitio de memoria del Álvarez Cortés y el Instituto de Formación Docente de Paysandú. Posteriormente, fueron convocados a la Comisión de Educación del Senado, donde plantearon argumentos “vergonzosos” en oposición a la colocación de placas de memoria en centros educativos, por ejemplo, comparando la situación con pretender instalar un kiosco o vender golosinas.

La INDDHH debe reforzar su vínculo con las instituciones, y particularmente en este caso, con la Udelar y ANEP. Estas tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y cumplen un rol fundamental en la educación en derechos humanos.

Expresó que los sitios de memoria son prueba material para avanzar en memoria, verdad y justicia.

Adriana Paniel, Centro de Vida Independiente “Becky Sabah”

Explicó que, para las personas en situación de discapacidad, tener una vida independiente es ejercer el derecho a decidir. Ello está consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2006, particularmente en los artículos 12 sobre discapacidad jurídica y 19 sobre el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad.

La Convención fue ratificada por Uruguay a través de la ley 18.418 de 2008. Sin embargo, en Uruguay, la lucha para ejercer este derecho no inicia en 2006, sino en 1993 con la propuesta de una compañera de instalar la asistencia personal en el país y con la conformación de un grupo para estudiar el tema.

Entre otras acciones, entre los años 1997 a 2000, se desarrollaron capacitaciones para asistentes personales de personas con discapacidad muscular. También redactaron un proyecto de ley sobre asistentes personales que fue aprobado en diciembre de 1998 y constituye el texto del Capítulo cuarto de la ley 18.651 de 2010.

En la actualidad, continúan trabajando integrados a la Red Latinoamericana de Vida Independiente (RELAVIN), para garantizar la vida independiente y la asistencia personal a todas las personas que la requieran.

Proponen su participación en todas las estrategias relativas a la vida independiente y la asistencia personal que se promueven en nuestro país, e invocan a tales efectos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley que la ratifica y la Observación General 7 del Comité de Naciones Unidas referido a la participación de las personas y organizaciones.

Karina Núñez Rodríguez, Grupo Visión Nocturna

Manifestó que, desde su creación, la INDDHH no ha hecho nada por las trabajadoras sexuales, que en la actualidad son unas 15.000 registradas y 70.000 en oficio.

En algunas instancias solicitaron al MSP que garantizara el cumplimiento de la ley 17.515 en tanto establece que la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual debe laudar y velar por sus intereses.

En 2007 presentaron una denuncia contra el Estado uruguayo por la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales. Se impusieron 36 sanciones que al momento no se han cumplido.

El Estado se centra en la trata de personas y, si bien algunas compañeras son obligadas a ejercer el trabajo sexual, no es la realidad de todas. En nuestro país el trabajo sexual es algo distinto de la trata, y en virtud de esa diferencia la Constitución les otorga derechos laborales, los cuales en los hechos no son garantizados. Lo que sí se establecen son derechos de “monitorización”, para garantizar a quienes contratan los servicios, que ellas están sanas.

Por otro lado, se encuentran con obstáculos y discriminación tanto en el sistema educativo que las excluye como en el sistema de salud que las violenta. Tienen que venir a Montevideo para ser escuchadas y, aun así, no han logrado que sus aportes y reclamos sean tenidos en cuenta.

En cuanto a las capacitaciones en derechos humanos, señaló que, para empezar, en el interior del país muchas compañeras ni siquiera saben que tienen derechos humanos.

Aclaró que ellas no son regulacionistas ni abolicionistas del trabajo sexual, sino reduccionistas. Entienden que regular el trabajo sexual en Uruguay únicamente favorece a políticos y las redes de trata.

Finalmente, convocó a sumarse a las convocatorias que están realizando para la nueva relatora especial de Naciones Unidas.

Karin Nansen, REDES Amigos de la Tierra

En relación a la metodología de trabajo, manifestó que no se está construyendo desde un discurso colaborativo, sino que se está saltando de un tema a otro.

Expresaron su adhesión a la declaración presentada por las organizaciones sociales y su reconocimiento hacia las organizaciones que luchan por la memoria, verdad y justicia y hacia la deuda histórica con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Indicó que nuestro país se construyó sobre el genocidio y esclavitud y aún no hay procesos de condena, vulnerando sistemáticamente los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. También se reproduce impunemente el racismo ambiental, por lo que es fundamental trabajar sobre justicia ambiental.

La defensa del principio de internacionalismo, significa la solidaridad con Palestina y el pueblo haitiano, y en ese sentido con la situación ya descrita que es la consecuencia por haber declarado su libertad.

Volviendo al tema de la justicia ambiental, afirmó que es importante vincular la promoción de los derechos humanos y su incidencia, con su necesaria exigibilidad y monitoreo. En ese sentido, son inaceptables los retrocesos normativos y en materia de política pública sobre derechos humanos, que por ejemplo se repiten constantemente en el área de la justicia ambiental, en materia de fumigaciones con agrotóxicos y violaciones de derechos humanos.

Es fundamental el reconocimiento de derechos colectivos, ya que estamos ante un proceso de mercantilización de la naturaleza que tiene como consecuencia la sistemática negación de derechos, como es el ejemplo del agua y la crisis atravesada, en la que se evidenció la desigualdad en su acceso.

También es necesario reconocer la centralidad de las personas en comunidades afectadas por las violaciones de derechos humanos y las crisis socio ambientales causadas por terceros. Deben establecerse garantías por ejemplo mediante la inversión de la carga de la prueba y el establecimiento de medidas de reparación y remediación, y garantías de no repetición. Se ha instalado la lógica de que quien contamina y vulnera derechos, luego paga y continúa, tal como en el caso de UPM.

Considera importante retomar el tema de las empresas transnacionales como actor relevante en la violación de derechos humanos a nivel internacional, no solo desde el punto de vista ambiental sino también democrático, a través de su incidencia respecto a la autonomía de los Estados.

A 10 años de la Resolución 269 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que llama a la creación de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre empresas transnacionales respecto a los derechos humanos, resulta pertinente retomar el grupo de trabajo sobre este tema que existió en la INDDHH.

Los derechos humanos deben prevalecer frente a cualquier acuerdo de libre comercio o inversiones, sin embargo, se impone el interés de las empresas transnacionales.

Finalmente, expresó que el Acuerdo de Escazú debe implementarse y aplicarse. No se están cumpliendo los derechos de acceso a la información, de participación y a la justicia; y se está criminalizando a quienes defienden los derechos ambientales. Hay que frenar el proceso de privatización del agua que atenta contra la gestión sustentable de cuencas y la participación previstas en la Constitución a partir de la reforma constitucional de 2004.

Finalizada la lista de oradores, una de las personas participantes sugirió tener más instancias de acercamiento con la INDDHH, por ejemplo al aumentar la frecuencia de asambleas - por ejemplo, cada 6 meses - , que sean temáticas y regionales. Ello evitaría el diálogo desorganizado y descontextualizado, y tendría como objetivo dar respuesta concreta a los reclamos que se repiten año a año.

4. Bloque extra - Otros temas

Dieva Larrosa, Movimiento Visibles y con Derechos Uruguay

Son un grupo de personas en situación de discapacidad. En el caso de la oradora, con discapacidad severa y usuaria de silla de ruedas.

Destacó que las personas en situación de discapacidad sí han logrado cosas, aunque continúan siendo un colectivo históricamente invisibilizado cuyos derechos humanos son vulnerados.

Presentaron un documento y reivindicaron su derecho a la participación - consagrado en los artículos 29 y 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - , a ser y estar, y contar con accesibilidad para ello. Expresó su conformidad y agradecimiento con la accesibilidad y asistencias durante la jornada.

Si bien es lamentable que deba existir una convención que les proteja, de conformidad con el artículo 33 de la Convención creó el mecanismo de vigilancia y monitoreo, a través del cual se consolidó el Consejo Asesor Honorario sobre Discapacidad.

Señaló que ese logro no es menor, ya que las personas en situación de discapacidad no son escuchadas ni tenidas en cuenta. Por ejemplo, durante la jornada se hizo referencia a las carencias del lugar respecto a accesibilidad; sin embargo, en la diversas experiencias de la oradora y quienes la acompañan, sí es accesible. En ese sentido, solicitan que se les consulte y escuche, y que se respete su libertad, autonomía e independencia.

Mariela Soria, Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social

Afirmó que existe un vacío en las políticas públicas durante esta Administración, que vulnera varios de los derechos humanos de las personas en situación más desprotegida de la sociedad.

Se retiraron políticas sociales en territorio y eso ha recrudecido la violencia, especialmente en los barrios periféricos y más pobres del país.

También se debilitaron las acciones del Sistema de Cuidados. Prácticamente no se han realizado cursos de formación que habiliten a las mujeres a salir de su rol de cuidadora; no hay presupuesto para asistentes personales y unas 6000 personas en situación de dependencia se encuentran desde 2020 esperando la valoración.

Por otro lado, se ha sustituido las personas técnicas de los refugios por el Centro de Atención Técnica (CAT), que es una dupla técnica cuya intervención es insuficiente y se limita a realizar entrevistas a las personas usuarias, no existiendo acompañamiento y seguimiento de las situaciones.

Según el último censo realizado por MIDES en 2023, la primera fuente de alimentación de las personas en situación de calle son las vecinas, vecinos y vecines, en segundo lugar las volquetas y en tercer lugar las ollas populares. Sin embargo, el MIDES las cuestionó y les quitó el apoyo, profundizando la inseguridad alimentaria.

La falta de atención en salud mental y de acceso oportuno a las consultas médicas con psiquiatras, profundizan la exclusión. La reciente ley de internación compulsiva favorece las acciones punitivas, cuya ineficiencia ya ha sido demostrada. Se preguntan si podrán acceder las personas a la internación de forma involuntaria, cuando quienes lo solicitan voluntariamente, no.

Aclaró que no se trata del derecho a vivir en la calle, sino al hecho de que se continúan vulnerando los derechos a la vivienda, al trabajo, a la atención en salud de forma oportuna, entre otros.

Expresó su preocupación por el rol del Estado como protección social y el creciente “fastidio” hacia las personas en situación de pobreza, lo que se refleja en ideas y hechos de odio.

Gran parte de quienes trabajan en MIDES mantienen contratos tercerizados, han sufrido rebajas salariales y carecen de una estructura que permita la carrera funcional; todo lo que conlleva a la precarización del Estado. Les preocupan especialmente los contratos de trabajadoras que tienen convenio MIDES con UNFPA, ya que no son consideradas trabajadoras sino empresas y como consecuencia carecen de derechos laborales tales como la licencia de maternidad.

También se incumple la ley 19.122, y los cambios producidos en la ley de violencia de género revictimizan y vulneran aún más a las mujeres que sufren situaciones de violencia de género.

Señaló que MIDES se ha convertido en un sofocador de incendios, en lugar de un organismo que busque la transformación social. El Estado no está cumpliendo con su función de ser garante de estas personas ni de sus trabajadoras.

Franco Canti, Colectivo Nacional Jóvenes por Vos

Es un colectivo recientemente formado, y es la primera vez que participan de este tipo de instancias.

Tienen interés y planteos en relación a algunas temáticas, y una de ellas es la salud mental.

Señaló que en Uruguay, entre 7.000 y 14.000 personas intentan suicidarse o lo logran, y es un dato que debe preocupar a toda la sociedad. Es un tema que está en agenda, ha crecido y obtenido recursos, pero en el que es necesario continuar trabajando, especialmente en relación a las personas jóvenes.

Es en la juventud cuando estos problemas aparecen, y muchas veces las personas no tienen con quién hablar al respecto porque sigue siendo un tema tabú. Aproximadamente 30.000 jóvenes se acercaron al INJU a través de la campaña “Ni silencio ni tabú”.

Consideran que la INDDHH debe entender a la salud mental como un derecho humano fundamental en la defensa del pueblo, y expresan su interés en ser parte de la solución, de aportar ideas y propuestas.

En este punto interviene una persona que no se identifica y señala que la ley 18.446 que crea la INDDHH prevé la posibilidad de convocar a una Asamblea General con el 20 % de adhesiones. Por lo tanto, recae también sobre las organizaciones que la frecuencia de convocatorias de asamblea sea mayor.

IV. CAMBIO DE PRESIDENCIA Y CIERRE

A continuación, se formalizó el cambio de presidencia del Consejo Directivo entre las directoras Jimena Fernández, entonces presidenta, y la directora Carmen Rodríguez, quien asume el cargo a partir del 1 de setiembre de 2024.

La directora Carmen Rodríguez dio cierre a la jornada con unas palabras alusivas.

Señaló que la INDDHH es una institución joven que tiene apenas 12 años. Implementar mejoras en la organización requiere tiempo, tiempo del que carece una institución tan demandada por diferentes actores y temáticas, ello como consecuencia de su misión de defender, promover y proteger los derechos humanos de forma autónoma e independiente.

Durante los últimos meses, se realizó un gran esfuerzo para debatir y elaborar el Plan Estratégico 2024-2028, con gran participación de las personas funcionarias. En ese sentido, agradeció a quienes coordinaron el proceso y entregaron un producto tan bueno.

Agradeció los aportes de las organizaciones sociales durante la jornada, respecto de los cuales la INDDHH realizó una escucha activa. Estos constarán en la relatoría de la asamblea y serán tenidos en cuenta para nutrir el Plan Estratégico.

En los próximos 5 años que abarcan el Plan Estratégico, la INDDHH seguirá consolidando alianzas estratégicas en espacios interinstitucionales, intersectoriales, con las organizaciones sociales, el Estado y con organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, tal como lo establece el Eje estratégico 1.

En el Eje estratégico 4, se plantea mejorar la comunicación para potenciar la promoción de derechos e incidencia, generando productos que aporten valor a la información que la INDDHH obtiene y sistematiza. Allí también se prevé colaborar en la formación y promoción de la educación en derechos humanos.

La INDDHH fortalecerá los mecanismos de supervisión y monitoreo que se hallan bajo su órbita, y promoverá la armonización de la legislación nacional con el sistema internacional de derechos humanos tanto a nivel regional como internacional, tal como lo establece en el Eje estratégico 3.

En este Plan Estratégico la INDDHH no solo define qué va a hacer, sino también, cómo lo hará y cómo medirá su cumplimiento.

Respecto al Eje estratégico 2, no se sometió a debate durante la jornada porque se refiere al desarrollo organizacional. Ello implica analizar, revisar y actualizar los procedimientos de gestión y protocolos de actuación interna, así como también fomentar una cultura institucional de mejoras de procesos y adaptabilidad.

El Plan traza el camino a recorrer, para este Consejo Directivo, hasta 2027. Alienta a trabajar en conjunto para que la INDDHH sea reconocida como una institución de referencia por su contribución a la consolidación de una sociedad respetuosa de los derechos humanos.

V. ANEXO

A) Lista de organizaciones participantes de la Asamblea

| Organización / Organismo |
|---------------------------------|
| ACNUR |
| ADERAMA |
| ADIVA |
| Ágora |
| Amnistía Internacional |
| AMUD |

| |
|---|
| ANEP |
| ANONG |
| Área Indígena de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT |
| Armada Mundial de Paz |
| Asamblea Hue Miri Laguna Merin |
| Asociación Autismo en Uruguay |
| Asociación Civil El Paso |
| Asociación Civil Familias Presentes |
| Asociación Civil Grupo Solidario a Redoblar |
| Asociación Civil Gurises Unidos |
| Asociación Civil Hogar La Huella |
| Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo |
| Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca |
| Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos |
| Asociación de Nurses del Uruguay |
| Asociación de Psicogerontología del Uruguay |
| Asociación Internacional de Discapacitados visuales de Rivera |
| Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana |
| Asociación Raíces Fuertes |
| Asociación Uruguaya de Parkinson |
| ASSE |
| Atabaque |
| AUDAAG |
| Autismo en Uruguay |
| BPS |
| Casa de la Mujeres de Florida |
| Casabierta |
| CEDAM |
| Centro Cultural Diocesano Casa de la Juventud (Minas-Lavalleja) |
| Centro de Atención al Adulto Mayor - CAAM |
| Centro de Comunicación Virginia Woolf / Cotidiano Mujer |
| Centro de Estudiantes de Ciencias |
| Centro de Rehabilitación de Maldonado (CEREMA) |
| Centro de Vida Independiente "Becky Sabah" |
| Centro Francisco Pérez |

| |
|---|
| Centro por la Infancia Jacinta Balbela |
| Centro Regional de profesores del sur |
| Charrúa Oipik Udimar |
| CICAM |
| CIPPUS |
| Clan Choñik |
| COFE |
| Colectivo Nacional Jóvenes por Vos |
| Colectivo Ovejas Negras |
| Colectivo Trans del Uruguay |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación |
| Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad - Soriano |
| Comisión memorias de la costa |
| Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana |
| Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca |
| Comisión Sitio de Memoria Treinta y Tres |
| Comisionado Parlamentario |
| Comité Central Israelita del Uruguay |
| Comunidad Israelita del Uruguay |
| CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa |
| Consejo de Vigilancia y Monitoreo de la Convención Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad |
| Coordinadora de Ollas Populares |
| Coordinadora por el retiro de tropas de Haití |
| CRySOL |
| Cubanos libres en Uruguay |
| Dar Uruguay |
| Defensoría de vecinas y vecinos de Montevideo |
| El Abrojo |
| EMUR Esclerosis Múltiple Uruguay |
| Espacio Cultural El Nido |
| FEUU |
| Fotógrafo de Carmen Rodríguez |
| FUCVAM |
| Fundación Mario Benedetti |
| Fundación Zelmar Michelini |
| Grupo de la Esperanza - Colectivo por Salud Mental Integral |

| |
|---|
| GRUPO SOLIDARIO A REDOBLAR |
| Grupo Visión Nocturna |
| Hermanadad Pro Derechos |
| Historias desobedientes |
| IDM |
| INDDHH |
| INISA |
| Instituto Afrodescendiente para el Estudio la Investigación y el Desarrollo |
| Instituto de Investigación y Acción Educativa Luna Nueva |
| Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay - IPRU |
| Intendencia de Canelones |
| Intendencia de Florida |
| Intendencia de Maldonado |
| Jacaranda la cultura de la memoria |
| La Agenda de Derechos |
| La Tablada |
| Memoria en Libertad |
| Memorias de Malvín Norte / Sitio de Memoria Ex Álvarez Cortés |
| Mesa Permanente Contra la Impunidad |
| MIDES |
| Movimiento de familiares y residentes de Elepem |
| Movimiento Visible y con Derechos |
| MSP |
| Mundo Afro |
| Municipio CH |
| Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Migrantes |
| ONAJPU |
| Organización Civil / Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para Personas con Discapacidad |
| Organización Social Salvador |
| OSC Renacer |
| Plataforma infancias y adolescencias |
| Poder Judicial |
| Poder Legislativo |
| Pulseras Azules |
| Red de amigos de Luis Pérez Aguirre |

| |
|--|
| Red Internacional de Economía Humana - Uruguay |
| Red Pro Cuidados |
| Red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual |
| Red uruguaya de personas VIH/RedLAC |
| RedContactoSur |
| REDES Amigos de la Tierra |
| Religiosas Oblatas, Casabierta |
| Rieh-UY |
| Secretaria de DDHH del PITCNT |
| Servicio Paz y Justicia - SERPAJ Uruguay |
| Sindicato Nacional de la Enseñanza Privada |
| SINTEP |
| Sociedad Amigos del Viento |
| UAFRA |
| UNCU |
| UNI 3 Uruguay |
| UNICEF |
| Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) |
| Universidad de la república - Prorectorado de Gestión |
| USUU |
| UTMIDES |
| UTU agraria |
| Vida y educación |

B) Lista de personas participante por bloque de discusión

Bloque de discusión 1 - Eje 1, “Alianzas estratégicas”

| Organización / Organismo | Apellido | Nombre |
|--|-------------------|------------------|
| Memoria en Libertad | Rodríguez | Marisa |
| Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana | Núñez Iribarne | Jorge Eduardo |
| Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos | Ortiz Delgado | Evana |
| FEUU | Scotti | Selena |
| Red de amigos de Luis Pérez Aguirre | Iannino | Cecilia |

| | | |
|--|----------|-------|
| Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca - Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para las personas con Discapacidad | Guarneri | Nelly |
| Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (GEUU) | Mendieta | Sofía |
| Colectivo Ovejas Negras | Ramallo | José |

Bloque de discusión 2- Eje 3, “Exigibilidad y monitoreo”

| Organización / Organismo | Apellido | Nombre |
|--|-----------------|---------------|
| Memoria en Libertad | Rodríguez | Marisa |
| Asociación Autismo en Uruguay | Navarro | Raquel |
| Asociación de madres y familiares de detenidos desaparecidos | Ortiz Delgado | Evana |
| Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad - Soriano | Frantchez | Sergio |
| Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad - Soriano | García | Decler |
| Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo | Hans | Hilde |
| FEUU | Scotti | Selena |
| SINTEP | Valiente | Katherine |
| GRUPO SOLIDARIO A REDOBLAR | Paolino | Lilyam |
| Centro de Comunicación Virginia Woolf /Cotidiano Mujer | Celiberti | Lilian |
| comisión memorias de la costa | Rammauro | Antonio |
| Asociación Civil El Paso | Prego | Cristina |
| Servicio Paz y Justicia - SERPAJ Uruguay | Aguerre | Ana M. |
| Luna Nueva | Reyes | Megan |
| Colectivo Ovejas Negras | Ramallo | José |
| Centro por la Infancia Jacinta Balbela | Cantón | Marcelo |
| Red de Organizaciones de Personas Mayores | Restaino | Águeda |

Bloque de discusión 3 - Eje 4, “Promoción de derechos e incidencias”

| Organización / Organismo | Apellido | Nombre |
|--|-----------------|------------------|
| Secretaría de DDHH del PIT-CNT | Martorelli | Federico |
| Coordinadora por el retiro de tropas de Haití | Moyano | Fernando |
| Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana | Núñez Iribarne | Jorge Eduardo |
| La Agenda de Derechos | Cabrita Mora | Diego Andrés |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa | Rodríguez | Cyro |
| Charrúa Oipik Udimar | Díaz Coitinho | Jorge Eduardo |
| FUCVAM | Benítez | Ruben |
| Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca | Bicera | Elena |
| FEUU | Scotti | Selena |
| Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana | Núñez | Jorge |
| Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca | Brum | Amanda |
| Asociación Civil Familias Presentes | Rodríguez | GABRIELA |
| Centro de Vida Independiente "Becky Sabah" | Paciel | Adriana |
| Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (GEUU) | Mendieta | Sofía |
| UTMIDES | Soria | Mariela |
| Grupo Visión Nocturna | Núñez Rodríguez | Karina |
| REDES Amigos de la Tierra | Nansen | Karin |
| Colectivo Ovejas Negras | Ramallo | José |

Bloque de discusión 4 - "Otros temas"

| Organización / Organismo | Apellido | Nombre |
|--|-----------------|---------------|
| REDES Amigos de la Tierra | Nansen | Karin |
| Colectivo Nacional Jóvenes por Vos | Canti | Franco |
| Movimiento Visibles y con Derechos Uruguay | Larrosa | Dieva |

C) Declaración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos

Montevideo, 28 de agosto de 2024

XIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos

Aprovechando esta instancia de inicio de Asamblea que nos reúne hoy, con la presencia del Consejo Directivo de la INDDHH, funcionarios y múltiples y plurales relaciones sociales, queremos expresar una vez más nuestro inmenso reconocimiento y respaldo al trabajo realizado por el Equipo de Investigación y Búsqueda de la INDDHH.

Al equipo de Investigadores, al GIAF y al director designada para esta tarea Wilder Tayler. Gracias por su trabajo.

Recordamos que es competencia de la INDDHH la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y ubicación de los restos.

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, es una violación continua y permanente a los Derechos Humanos cometidas por los Estados por acción u omisión.

Esta búsqueda no ha tenido el apoyo de información de los organismos del estado que debieran darla. Ha sido gracias a su compromiso y profesionalismo, que hoy sumamos a la difícil de Amelia, un nuevo cuerpo rescatado.

Lo resaltamos cada vez porque como hemos dicho, la búsqueda es a tientas.

Estos equipos con el inmenso respaldo de la ciudadanía, nos devuelven reparación y confianza para mantenernos en el camino de la Verdad y Justicia.

No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir una sociedad más justa y humana generando cambios duraderos.

Las garantías de no repetición, necesitan esta verdad completa, necesitan de la promoción de derechos, el escudo de voces que alertan cuando se amenazan libertades o se eligen caminos de autoritarismo.

Madres y Familiares, junto a muchas organizaciones hermanas que seguro están hoy acá, trabajamos mucho y mucho tiempo para construir este instrumento que es la INDDHH y Defensoría del Pueblo; con el sentido que las demandas de la sociedad civil en cada área, fueran escuchadas y potenciadas, para exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones de defensa y promoción de derechos individuales y colectivos.

Esperamos que la Institución actúe como caja de resonancia de todas las aspiraciones de la sociedad civil y en cuanto a lo que a nosotros concierne; se sume a nuestras exigencias de que los tres poderes del Estado ordenan la entrega de toda la información que poseen las Fuerzas Armadas y terminemos de una vez con el crimen de lesa humanidad de las desapariciones forzadas que hoy continúen realizándose

Verdad, Memoria, Nunca Mas Terrorismo de Estado

Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

D) Declaración de las organizaciones sociales en el marco de la XIII Asamblea de los Derechos Humanos - Agosto 2024

Una vez más, diversas organizaciones sociales comprometidas con la defensa de los derechos humanos nos pronunciamos colectiva y públicamente cuestionando la metodología de trabajo de la Asamblea tal como lo hiciéramos en 2023.

En línea a lo que planteáramos en aquella oportunidad solicitamos una reunión con el Consejo Directivo de la Institución previo a la convocatoria de una nueva asamblea. Fuimos escuchados y en un gesto que reconocemos, se realizó una autocrítica comunicándonos que convocarían a una Pre Asamblea para que las organizaciones sociales planteáramos propuestas de forma y contenido.

La Pre Asamblea se realizó el pasado 11 de julio. En su presentación se explicitaba que el objetivo de la instancia era “mejorar el desarrollo de la Asamblea Nacional” e “Incorporar aportes temáticos” de las organizaciones. Fue entonces que:

Solicitamos conocer con quince días de anticipación la rendición de cuentas del Consejo Directivo para preparar preguntas y comentarios. Nos remitieron al Informe Anual 2023 entendiendo que de allí se deducirá. A una semana de la Asamblea se conoce un borrador del mismo. Así se reduce significativamente la posibilidad de análisis, y al no prescindir de su lectura en esta instancia se consume tiempo que podría estar disponible para la intervención de las organizaciones.

Solicitamos que en la Asamblea se trabajará en grupos para aumentar las posibilidades de participación e intercambio. Pero la Asamblea se hará en plenario.

Solicitamos que se publicará el registro de organizaciones y se hizo, pero sin depurar. Muchas ya no existen lo que engorda el padrón dificultando así la posibilidad de que las organizaciones reúnan un porcentaje mayor al 20 por ciento para convocar a una Asamblea. El padrón no contiene los contactos ni a qué departamento pertenecen, lo que no facilita que las organizaciones se comuniquen e interactúen.

Solicitamos que se conocieran los fundamentos para la aceptación o rechazo de las organizaciones que promueven su incorporación al registro. Esto ya se había solicitado en 2023, pero las actas no están accesibles. Las organizaciones seguimos sin saberlo por lo que no podemos realizar el control del cumplimiento de la ley lo que se traduce, claramente, en una falta de transparencia.

Pero cuando llegamos con estas inquietudes y propuestas, la forma y contenido de la Asamblea ya estaba resuelta.

El Plan Estratégico 2024-2028 de la Institución propone “Robustecer el relacionamiento de la INDDHH con las organizaciones de la sociedad civil” pero la metodología propuesta va en sentido contrario.

Vale aclarar que no entendemos adecuado hablar de alianzas estratégicas de la Institución con las organizaciones sociales, puesto que las alianzas son con “los de afuera” y nosotros somos parte de la Institución. Así lo reconoce la ley, aunque en la práctica se nos asigne un mero rol de espectadores. Es inimaginable la misión de promoción, protección y defensa de los derechos humanos por parte de la Institución sin el aporte desde la experiencia y las

prácticas cotidianas de las organizaciones sociales, por más y mejores derechos para todas y todos.

Se combina forma y contenido garantizando que las organizaciones no dialoguen. Se ponen a consideración tres ejes del plan estratégico, contando con una hora de tiempo para cada uno que deberá distribuirse entre todas las organizaciones, a razón de tres minutos, máximo, por participante. La lista de oradores se conforma con la inscripción para la asamblea, en el orden que van llegando. Cada intervención tendrá lugar según ese orden y no según corresponda al desarrollo de las exposiciones que lo precedieron. Así será difícil mantener un hilo conductor empobreciendo la construcción colectiva.

Hablamos de una Asamblea en el año cuando podría haber tantas como la Institución quisiera: nacionales, regionales, departamentales, temáticas. Una sola asamblea, cumpliendo el requisito mínimo que marca la ley. El tiempo disponible para lo que debería ser un intercambio entre las organizaciones o entre las organizaciones y el Estado es mínimo, evidenciando que no es el intercambio lo que se prioriza.

Es imperativo que la Institución promueva y garantice en la práctica canales efectivos y constantes de comunicación y colaboración con todas las organizaciones que registrándose en la Institución asumieron el compromiso de ser parte. Aún sin voto nuestra voz puede marcar la diferencia si fuéramos consultadas cuando se abordan derechos en los que tenemos trayectoria de trabajo.

Es en ese sentido que nos proponemos dar seguimiento a las intervenciones que realiza la Institución, para aportar en consecuencia, pero la información no es de fácil acceso. La información puede estar publicada, pero por mucha que sea no hace a la transparencia si no se dispone de filtros de búsqueda adecuados.

Como parte de la Institución y en defensa de la misma volvemos a pronunciarnos en favor de su independencia del poder político partidario hoy nuevamente amenazada por la intervención de un legislador que reclama disciplina partidaria al director promovido desde su fuerza política, confirmando una vez más, que en ocasión de la elección de este Consejo hubo reparto político.

La institucionalidad creada por ley no ha sido suficiente para garantizar y poner en práctica los valores institucionales, ni para reasegurar el cumplimiento de su misión, ni para reconocer a las organizaciones sociales el rol activo que exigimos. Por lo mismo se hace necesario transitar el camino de su modificación.

Representamos una amplia diversidad de derechos con despliegue de acciones en todo el territorio. Desde ese lugar señalamos la urgencia de que la Institución promueva una verdadera y efectiva descentralización asumiendo su carácter de Institución nacional que alcance en su misión no solo a quienes viven en el país en cuanto a su protección, sino que el

control de vulneración de derechos por parte del Estado se extienda más allá de fronteras, como ordena la ley.

Las organizaciones firmantes estamos comprometidas con una Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que garantice la participación, transparencia, descentralización, independencia. Una Institución que cumpla con su tarea de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, enfrentando la violencia institucional con un efectivo control del Estado.

FIRMANTES (organizaciones sociales registradas en la INDDHH)

Ágora. Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria

Asamblea Hue Mirí

Asociación Civil Cippus

Asociación Civil El Abrojo

Asociación Civil Grupo Solidario A Redoblar

Asociación Civil El Paso

Asociación Civil Familias Presentes

Asociación Civil OBSUR

Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU)

Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)

Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad (AMUD)

Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares Gerontológicos (AUDAAG)

Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO)

Centro de comunicación Virginia Woolf – Cotidiano Mujer

Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET)

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

Centro de Vida Independiente Becky Sabah

Charrúa Oipik Udimar

Clan Gubaitase Charrúa

Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) - Secretaría de DDHH

Colectivo Ovejas Negras

Comisión Memorias de la Costa

Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad – Soriano

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV -Uruguay)

Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca

Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití

Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA)

CRySOL – Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay

Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay - FEUU

FUCVAM – Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

Fundación Centro de Educación Popular (FCEP)

Fundación Mario Benedetti

Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia - Bella Unión

Gurises Unidos

Hermanidad pro Derechos

Instituto Investigación Acción Educativa LUNA NUEVA

JACARANDÁ la cultura de la Memoria

JULANA – Jugando con la naturaleza

Memoria en Libertad

Memorias de Malvín Norte

Mesa permanente contra la impunidad

Movimiento Visibles y con Derechos Uruguay

Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS)

Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre

Redes Amigos de la Tierra

Secretaría DDHH del PIT CNT

SERPAJ Uruguay – Servicio Paz y Justicia Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP)

Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA)

Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES)

Vida y Educación

Visión Nocturna Vivir

Creando Tacua Oipik

ADHESIONES (organizaciones sociales no registradas en la INDDHH)

Agrupación de Cultivadores Cannábicos del Uruguay (ACCA)

Agrupación Los Tucu – San José

Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía

Asociación de Familiares Caídos en Adicciones

Celebro la Diversidad Santa Lucía

COFE (Confederación de Funcionarios del Estado)

Colectivo Diverso Las Piedras

Colectivo Espika

Colectivo Familias por Vida - Carmelo

Comité Palestina Libre

Comunidad Indígena Danan Vedetá

Espacios Libres de Apartheid – Uruguay

Fogones de la memoria

Gol a la Impunidad

Grupo de ex trabajadoras/es del INAU por la Memoria

Hinchada con Memoria

Intersocial de Paysandú

Intersocial de San José de Mayo

Memoria, Verdad y Justicia – Carmelo

Organización de usuarios y usuarias de la Salud del OESTE

OTRAS – Organización de Trabajadoras Sexuales

Radio Comunitaria Horizonte FM - Paysandú

Rebeldía Organizada

Trans Boys Uruguay- Niñez, Adolescencia y Familia

Unión Trans-Disidente Maldonado/Montevideo

Vecinas y Vecinos por la Memoria - Piriápolis

E) Documento de la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre

Presentando en la Asamblea de la INDDHH en 2024

Cronología de la situación de la Casa de los Derechos Humanos Luis Pérez Aguirre.

2010- En febrero, por iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se inauguró en Montevideo, la casa cita en Paraguay 1190 con el nombre de la casa de los Derechos Humanos Luis Pérez Aguirre.

Para la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, fue un gran reconocimiento que la entonces directora de Cultura del MEC, María Elena Martínez, nos invitara a formar parte de la población de la Casa.

Allí realizamos nuestras reuniones y organizamos diversas actividades relativas a Luis, apodado Perico. También concretamos un taller por iniciativa de una persona que asistía a la Casa y tuvo la inquietud y profundizar la información y el conocimiento sobre Pérez Aguirre, sacerdote jesuita.

La coordinación de la Casa está a cargo del Proyecto Urbano, responsabilidad que este colectivo ejerce con éxito, tanto en la organización de talleres como en la articulación con los otros actores que la utilizan.

2023- En verano de este año se inició el reciclaje de la Casa, y dejaron de funcionar los diversos talleres que se realizaban allí.

Cuando se reabre- para gran sorpresa nuestra- no estaba el cartel con el que se identificaba la Casa. Ante nuestra inquietud, nos respondieron que, luego de reparado el frente de la Casa, se volvería a poner el cartel.

Con el transcurso del tiempo, nos dijeron que se pasaría a llamar Proyecto Urbano, por decisión de la actual directora de Cultura del MEC y que no había fecha de inauguración.

Por ese motivo, el 31 de julio perdimos una entrevista con el Ministerio de Cultura.

A los dos días, al enterarnos que era inminente la reinauguración de la Casa, pedimos una entrevista con la directora de Cultura, que nos recibió el 8 de agosto. Nos comunicó que a la Casa no se le iba a poner el cartel con el nombre Casa de los Derechos Humanos Luis Pérez Aguirre.

El 11 de agosto se reinauguró la Casa.

El 15 de agosto nos presentamos en el MEC (a la oficina de archivo, y oficina del secretario del ministro, el Sr. Andrés Rodríguez) a la Torre Ejecutiva, y a la Secretaría de Derechos Humanos.

El 25 de agosto se realizó el pedido de acceso a la información pública al Archivo de la Nación.

Se nos contestó que hiciéramos el pedido de información pública al MEC.

El 5 de octubre se realizó el pedido de acceso a la información pública al MEC y nos respondieron que debíamos dirigirnos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)

El 26 de octubre se realizó el planteo a la INDDHH.

Hasta el momento no hemos tenido respuesta.

En diciembre nos comunicamos con el abogado Juan Ceretta, quien el 19 de diciembre fue entrevistado por la periodista Blanca Rodríguez.

2024- El 27 de febrero recibimos respuesta de la INDDHH.

La cual adjuntamos.

La red Amigos de Luis Pérez Aguirre, entiende que si hubo vulneración de derecho al no reconocerse el derecho a la memoria colectiva reiteradamente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como dice en la resolución dictada por la INDDHH resolución... **menester mencionar, que a nivel popular se generó identidad de la casa con la referencia al nombre de Luis Pérez Aguirre, pero pese a la búsqueda por el organismo, no se encontró ningún acto administrativo que legitimara la denominación que se reclama por la red denunciante)**

Muchas gracias por la escucha.

Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre.

F) Declaración de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca

Para la XIII Asamblea Nacional de la INDDHH -- agosto 28 de 2024

Una vez más nos presentamos en esta Asamblea para afirmar nuestros derechos, en particular el derecho a una vida digna y expresarnos en torno a la salud mental, temática que abordamos desde nuestra Asociación y que vivimos cotidianamente. Dentro de la extensión muy amplia del término salud mental, nos referimos a las situaciones severas y persistentes como la esquizofrenia.

Nuestra Asociación, aún muy joven, se incorporó hace poco más de un año al movimiento nacional de la discapacidad, a fin de incidir con más fuerza en la defensa de los derechos de las personas afectadas en su salud mental. Entre otros motivos, nos mueve la preocupación de observar que la problemática de la salud mental a menudo no se contempla al hablar de discapacidad. Con todo, es oportuno reconocer que nuestra integración a este movimiento también ha traído consigo una mayor y mejor comprensión de su entramado complejo.

Adjuntamos a este documento el que, por un error lamentable, no quedó plasmado en el informe del año pasado sobre los trabajos realizados en el período. En el momento de redactar ese documento, estábamos saliendo de una etapa de enorme preocupación e incertidumbre acerca de la continuidad del Centro de Rehabilitación Dr. Alberto Martínez Visca, donde estamos insertos.

La crisis pasó, aunque las respuestas han sido parciales. Sigue faltando una mirada en profundidad sobre el imprescindible sistema nacional de rehabilitación. La preocupación sobre el presente y el futuro nos sigue acuciando. El año pasado subrayábamos dos puntos, a saber, los aspectos económicos y la posición que ocupa el Centro Martínez Visca, de indudable importancia en el país, si bien a menudo parece invisible.

Estamos convencidos de que deben buscarse otras respuestas ante la realidad de una población con una prevalencia llamativamente alta de los problemas de salud mental. Por otro lado, fuera de los ámbitos en que se toman las grandes decisiones que afectan a toda la sociedad, en la vida cotidiana, en el encuentro personal, en los espacios de participación, cada uno debe manifestarse con firmeza y con libertad en reclamo por los derechos vulnerados y la afectación de nuestra calidad de vida.

Es preciso reclamar porque:

- Se desconocen nuestros derechos
- Recibimos una atención deficiente
- Se contravienen las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental 19.529

- Faltan psiquiatras y, cuando los hay, suelen desempeñarse aislados de otros saberes médicos o no médicos
- Las personas afectadas y los familiares no somos escuchados ni informados adecuadamente
- A menudo el trato es discriminatorio, desatendiendo a la propia problemática
- Con frecuencia falta medicación
- No se desarrolla un entramado de intervenciones
- Es poco frecuente que se dé participación a la persona afectada ni a sus familiares

A estas dificultades se suman los momentos angustiantes de las internaciones, las intervenciones policiales en crisis y las actuaciones judiciales.

¡Cómo anotar en unos pocos párrafos el sufrimiento, la angustia, la incertidumbre, la soledad... que vivimos en estas situaciones! Somos conscientes de que no hay respuestas fáciles. Sin embargo, la dificultad se va allanando cuando la situación se discute y se buscan alternativas viables y en clave de derechos.

En un período muy breve, algo más de tres años desde su fundación, nuestra Asociación ha alcanzado una serie de logros significativos:

- Ha estado permanentemente activa, con más de 50 afiliados, y congrega también a los usuarios del Centro (personas con problemas severos de salud mental). La integración de los usuarios es una opción fundamental de nuestra Asociación y un rasgo poco frecuente en organizaciones similares.
- Ha participado en muchos eventos y diversas instancias de movilización, logrando en el primer año de funcionamiento, que en la Rendición de cuenta se aumentara el monto de dinero asignado al Centro.
- Ha desarrollado eventos sociales con verdadera integración, acciones que van en crecimiento, congregando personas en situaciones diversas.
- Inicia en este momento la experiencia de turismo social integral con familiares y usuarios, y con recursos propios.
- Ha promovido encuentros con expertos en distintas materias, entre otras: acceso a la justicia, sexualidad e investigación del cerebro.
- Ha establecido una comunicación y un intercambio sostenidos con el Centro

- Como parte comprometida en la vocación de participación del Centro, se integra regularmente al Espacio Familiar Abierto y el Grupo de Pares, experiencias innovadoras llevadas adelante por el propio Centro, que deberían investigarse, profundizarse y replicarse.

De la observación de la realidad, y de la experiencia individual y colectiva, surgen las siguientes demandas:

Es imperativo que:

1. Se respeten y se apliquen efectivamente la Ley de Salud Mental y la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

2. Se implemente un modelo de atención integral que incluya:

- Programas adecuados y redes de apoyo necesarias
- Escucha de los afectados y sus familiares y su participación activa
- Implementación de cambios en la formación y el enfoque de los profesionales y los técnicos
- Fomento de la investigación interdisciplinaria en salud mental

3. Se reconozca al Centro Martínez Visca como modelo rector para todo el país, garantizando su continuidad y replicando su enfoque.

4. Se mejore la atención del sistema de salud, eliminando maltratos y garantizando información y recursos adecuados.

5. Se combata la estigmatización en todos los ámbitos, especialmente el jurídico.

6. La información y los estudios existentes reflejen fehacientemente la complejidad de esta problemática.

7. Se tenga en cuenta, como elemento crucial, el fantasma del suicidio que acompaña el recorrido vital de las personas afectadas y sus familias.

8. Se reforme la Ley No. 11.139, de 1948, que creó el Patronato del Psicópata, para responder a las necesidades actuales de atención.

Nuestra Asociación se propone persistir en sus acciones a fin de lograr pensamiento propio colectivo, que entendemos debe fortalecerse y agregar valor al conjunto de intervenciones. Así vemos la verdadera expresión de la consigna "Nada sobre nosotros, sin nosotros": no una queja, sino experiencia real, narrada y pensada en conjunto, y disponible para el intercambio.

Montevideo, agosto 2024

G) Documento de Memoria en Libertad

Presentación:

Fuimos miles los niños, niñas y adolescentes afectados por el terrorismo de Estado, durante el período 1968-1985. Las leyes de reparación en el país, no nos incluyen, salvo excepciones, previstas en la ley 18.596 art. 11, que considera las siguientes situaciones: i) Las víctimas que siendo niños o niñas hayan permanecido desaparecidas por más de treinta de días; ii) Las víctimas, que, habiendo nacido durante la privación de libertad de su madre, o que iii) siendo niños o niñas hayan permanecido detenidas con su madre o padre por un lapso mayor a 180 días (...).

Contamos con la resolución 751/2019 de la INDDHH que recomienda al Estado ser reconocidos y reparados como víctimas directas de terrorismo de Estado. Acompañan a ella, tres recomendaciones de ONU de 2022, del Comité contra la Tortura, del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas y del Comité por los Derechos Humanos. A 5 años de esta recomendación, el Estado uruguayo aún no ha dado respuesta.

Estado de situación en salud:

Las leyes que nos amparan la atención psico sanitaria (n.º 18.596, Decreto 297/010 y Ley 19.859) indican que la misma, será gratuita, vitalicia y de responsabilidad de ASSE a través de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado (OAVTE), del MSP, lo que no se cumple a cabalidad. Ello ha implicado la interrupción abrupta de tratamientos terapéuticos, en la atención a la salud mental, como en la administración farmacológica.

Con esto se genera un mecanismo de re victimización de los beneficiarios de las normas reparatorias, pero además se pone en riesgo la vida de muchos de nosotros.

Contamos con la sentencia Nro. 64/2022 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4to. Turno, quien al amparo de las leyes 18.033 y 18.596, se hizo lugar a la acción promovida y se condenó a ASSE a brindar las prestaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, oftalmológicas, odontológicas y farmacológicas”, la que tampoco se cumple.

Es por todo ello que solicitamos a la INDDHH

1. En base a lo planteado en el Eje 3 del Plan Estratégico “Exigibilidad y Monitoreo”, solicitamos a la Institución que le exija al Estado que cumpla con la recomendación de 251/2019.
2. En base a lo planteado en el Eje 3 del Plan Estratégico “Exigibilidad y Monitoreo”, que le exija al Estado que implemente las medidas administrativas necesarias para garantizar la prestación efectiva de la cobertura integral de salud prevista en la normativa legal vigente de las personas integrantes del Colectivo Memoria en Libertad y a todas las personas que siendo

niños y adolescentes fueron víctimas de terrorismo de Estado, asegurándose que las mismas reciban las prestaciones en salud correspondientes en instituciones públicas o privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud, en todo el territorio nacional.

H) Documento de la Federación Caminantes - Familiares por Salud Mental; Grupo de la Esperanza; Organización de Usuarios y Usuarias De Salud del Oeste; Cooperativa de Vivienda HAMABI; Cooperativa Social DODICI

De Montevideo, 28 de agosto de 2024

Integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH

Presente

En la construcción de la política pública de Salud Mental, la INDDHH está llamada a ocupar un lugar esencial, según señala la Ley 19529.

Luego de muchos años de trabajo y militancia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se ha logrado que la salud mental sea un tema prioritario en la agenda pública, cuestión que este gobierno ha marcado como urgente y ha destinado recursos especiales.

Desde el inicio de la gestión del Consejo Directivo de la INDDHH, en setiembre de 2022, se asumió el compromiso de fortalecer el área de Salud Mental con recursos humanos para garantizar el correcto cumplimiento de la Ley de Salud Mental.

Las organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a la Salud Mental manifestamos nuestra inquietud por los hechos en torno a la situación del área de Salud Mental de la INDDHH.

Hoy, transcurridos casi dos años, el compromiso de hacer materialmente real la prioridad de la salud mental no ha sido debidamente cumplido por falta de recursos humanos. Las OSC necesitamos un compromiso mayor de la INDDHH, respecto a su rol de defensa de derechos en la atención integral a la salud mental.

Por otro lado, hemos tomado conocimiento que la única funcionaria del área está tramitando una denuncia de acoso laboral ante este Consejo Directivo. Y ha trascendido que, ante peticiones presentadas por OSC por estas situaciones, miembros del Consejo han considerado las mismas como “injerencia” de las OSC en temas internos, o aún “una forma de acoso” hacia el Consejo Directivo.

Estas preocupantes consideraciones hacia el rol de la sociedad civil con la INDDHH dan cuenta del desconocimiento de la importancia del necesario trabajo conjunto entre la INDDHH y la sociedad civil.

Las OSC somos respetuosas de las competencias técnicas y políticas de la INDDHH, pero no por esto, ajenas o eximidas de expresar nuestra opinión, justamente por la coherencia que requiere el respaldo a una institución como la INDDHH. Como OSC vinculadas a la promoción

y protección de los derechos humanos, jamás seremos indiferentes a situaciones de hostigamiento laboral, hechos que, como forma de vulneración de derechos humanos, nunca son un tema interno.

Esperamos que la ligereza con la que ha sido tratada la situación sea revertida en forma inmediata. Y que se nos informe cómo se cumplirá con los objetivos respecto a la Salud Mental.

Firman organizaciones Federación Caminantes – Familiares por Salud Mental Grupo de La Esperanza Organización de Usuarios y Usuarias del Salud del Oeste Cooperativa de Vivienda HAMABI Cooperativa Social DODICI

J) Documento de Grupo Solidario A Redoblar

2 de setiembre de 2024

La Asociación Civil “Grupo Solidario A Redoblar”, avocada solidariamente a apoyar situaciones problemáticas de salud de víctimas de terrorismo de Estado, reconocidos como tales por las autoridades competentes y amparadas a las leyes 18033 y 18596, se dirige a la INDDHH a los efectos de plantear lo siguiente:

Las leyes 18033 y 18596, mal llamadas “leyes reparatorias”, ya que impiden a los beneficiarios de las mismas usufructuar conjuntamente de sus jubilaciones y pensiones obtenidas legalmente como fruto de sus años de trabajo en los casos en que el monto que se les reconozca como jubilación o pensión ordinaria sea mayor que el monto que se le asigna como PER (Pensión Especial Reparatoria), no obstante, lo anterior, reconocen a dichas víctimas derechos en virtud de su calidad de tales.

Así mismo, en virtud del artículo II) del decreto 297/010, las víctimas de terrorismo de Estado (leyes 18033 y 18596) “... tiene derecho, si así lo solicitaran, a recibir en forma gratuita y vitalicia las prestaciones médicas que incluyen asistencias psicológicas, psiquiátricas, odontológicas y farmacológicas que garanticen su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Integral Integrado de Salud...”

EL fundamento de dicho reconocimiento se basa en la atención a las secuelas que hasta el día de hoy pueden sufrir las víctimas de terrorismo de estado, como consecuencia del accionar ilegítimo del terrorismo de Estado (torturas, muertes, desapariciones, emigración forzada para preservar sus vidas, persecuciones indebidas, etc.) y que se extienden, según reconocimiento legal, hasta la tercera generación (también a hijos y nietos)

La Oficina de Atención a las Víctimas de terrorismo de Estado gestiona y coordina dichos servicios de salud para víctimas y sus familiares directos hasta la tercera generación.

No obstante los derechos reconocidos por las leyes mencionadas no pueden ser ejercidos realmente por sus beneficiarios debido a que la mayoría de las veces en que se pretende

solicitar su cumplimiento se informa que no hay recursos para ello y/o dichos servicios están casi desmantelados (Solo a título de ejemplos: en atención psiquiátrica y psicológica, o cuando se han solicitado medicamentos de alto costo solicitados con receta médica, o servicios odontológicos o en tratamientos médicos especializados, etc., etc.)..

Por todo lo cual solicitamos a la INDDHH que:

LA INDDHH CUMPLA CON SU ROL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE QUE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS RECONOCIDAS LEGALMENTE COMO VÍCTIMAS, DIRECTAS O INDIRECTAS, DE TERRORISMO DE ESTADO EN EL ÁMBITO DE SALUD PARA QUE LOS MISMOS PUEDAN REALMENTE SER EJERCIDOS TAL COMO LO RECONOCEN LAS LEYES Y DECRETOS PERTINENTES.

PARA ELLO SOLICITAMOS, ADEMÁS; QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INDDH TENGA SOBRE ESTE PUNTO UNA VISIÓN CON ABOSUTA INDEPENDENCIA POLÍTICA PARTIDARIA.

ASI MISMO SOLICITAMOS QUE ESTA SOLICITUD SEA INTEGRADA Y COLGADA EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA INDDHH, DE LA CUAL SOMOS PARTE COMO ORGANIZACIÓN REGISTRADA CON EL NÚMERO 373.

SALUDOS

MUCHAS GRACIAS.

GRUPO SOLIDARIO A REDOBLAR

gruposolidario.aredoblar@gmail.com

lilyam.paolino@gmail.com

ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO SOLIDARIO A REDOBLAR

K) Documento del Grupo Charrúa Oipik Udimar Nomade

Grupo Charrúa Oipik Udimar Nómade.

28 de agosto 2024

A la XIII Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En relación a nuestras tribus, en busca de integración en el entramado sociocultural y territorio actual que ocupa el estado uruguayo, respeto por los Derechos Humanos, nuestra cultura e identidad milenaria, por y para nuestras niñas, niños y adolescentes.

En pos de que el estado uruguayo de cabal cumplimiento a la Convención Internacional de Derechos de niñas niños y Adolescentes UNICEF y la ratificación del convenio 169 OIT sobre

derechos de pueblos indígenas y tribales, conjuntamente con la Coordinación de Organizaciones, Comunidades y Clanes Indígenas del Uruguay.

Como Charrúas Oipik Udimar, es nuestro fundamento tribal, el derecho de niñas y niños a su identidad originaria, a la valorización de nuestra historia profunda, nuestro Arte y Cultura, nuestra pertenencia espiritual siendo territorio en naturaleza.

El cuidado de niñas y niños de la tribu entre todos los adultos, el bregar por el disfrute de una infancia feliz, libre, plena.

Entendemos necesario que ustedes puedan comprender en primera instancia, los valores relacionales y pertenencia a un grupo indígena hoy día.

Comprender, por ejemplo, nuestra espiritualidad en simbiosis étnica con la naturaleza y el territorio como paisaje mágico Conceptual, nuestra pertenencia al grupo y el propósito tribal, nuestra forma particular de sentir y pensar que trasciende desde la milenaria cultura que somos y en especial el cuidado por niñas, niños y adolescentes.

Porque somos naturaleza en nuestra esencia y territorio, en nuestra complexión milenaria. Allí en la naturaleza niñas, niños y adolescentes, vuelan libres como los pájaros hacia un desarrollo integral, fluyen como el agua, juegan trepados al árbol del conocimiento profundo e integral.

Esta forma de relacionamiento milenario es lo que da sustento y contenido a una cultura única, que pervive en nuestra identidad como nativos, autóctonos y profundamente ligados al paisaje multiétnico.

Son nuestros paisajes, nuestros milenarios Cerritos de indios, nuestro Cerro Charrúa, nuestro Marmarajá, Sierra Carapé, Pueblo Charrúa, Zapicán, Yacaré Cururú, Arroyo de las Viudas Charrúas, Laguna Hum y Del Silencio, Salsipuedes, Cueva del tigre, nuestro Chamangá y sus pinturas rupestres, nuestro Arte único, nuestra cerámica y tallados en piedras, nuestro idioma, nuestra poesía, nuestra música, animosidad en naturaleza, porque para nosotros no son lugares arqueológicos sino sitios de nuestra trascendencia, donde somos cultura y paisaje por mencionar solo algunos.

Es donde nuestro cielo nocturno devela nuestra leyenda originaria, nuestro monte nativo donde crece la yerba mate, donde nace el conocimiento de sanar con yuyos y rituales, donde nuestras abuelas y abuelos nos dieron conocimiento, cosmovisión y propósito.

Sobre el respeto a las libertades individuales, colectivas y tribales, es el compromiso originario que nos une conceptualmente e históricamente a José Gervasio Artigas, Criollos, Negros e Indios en una gesta libertadora. Multiculturalidad, multiétnica, integración y el derecho originario se refiere, así también se refiere Artigas en sus documentos, reconociendo nuestros derechos como tribus y nuestras características particulares.

Es así que también ponemos en claro, que tanto la Convención Internacional de Derechos de niñas niños y Adolescentes UNISEF, como el Convenio 169 de la OIT también se refieren y contemplan los Derechos Humanos tanto de la población Afrodescendiente como la indígena.

Así es como también nos referimos hoy en este documento indígena, tribal que presentamos, argumento leal de nuestra experiencia como Charrúas.

Hoy existiendo, siendo territorios cosmogónicos, siendo Talajau loján, Ombú milenario de la pervivencia autóctona.

En pos de nuestra cultura nos hemos convertido en comunicadores, investigadores, guardianes del territorio ancestral, guardianes del acervo, del conocimiento, del legado histórico y artístico. Porque solo nosotros hemos sido capaces de sostener nuestra cultura Charrúa viva.

Tal es así que hoy día estamos abocados a mantener nuestra cultura e identidad, en nuestro trabajo, nuestras actividades, inmersos en el quehacer cotidiano.

Contribuyendo al desarrollo artístico, cultural, social, histórico y de recursos que sustentan nuestra coexistencia en la sociedad actual.

Así transitamos hoy en este territorio político, que nos es poco familiar y que a su vez nos ve como bichos extraños, pues hay un prejuicio en creer que fuimos exterminados, extintos, que no tenemos sensibilidad, que somos pre homínidos, pre históricos y que el pasado no construye futuro. Todos prejuicios de la sociedad actual segregacionista, que solo parece ver la infancia como una semilla para su provecho.

Aquí nos presentamos para familiarizarlos con nuestras tribus que coexisten con las que ya han asimilado como tribus urbanas o grupos socioculturales de auto referencia o identificación y hacia quienes se han otorgado espacios de integración en el derecho civil.

Aunque hoy nos encontramos en desigualdad de condiciones, proponemos este diálogo, pues han pasado muchos años que seguramente nos han permitido, tanto a ustedes como a nosotros, revalorizar nuestros roles en esta sociedad actual.

En trashumancia por nuestros territorios y el mundo actual, nos ha permitido conocer, comprender y ampliar nuestra forma de sentir y pensar la magnitud de lo que venimos planteando ante ustedes, organismos constituidos, consolidados y aceptados dentro del sistema de derechos sociales, como contraste o contra posición, de la actual circunstancia en la que tienen que vivir nuestras niñas, niños y adolescentes charrúas, Oipik.

A la luz de la innovación con la que se actualizan nuevas formas en la adopción de nuevas y más amplias áreas del Derecho, es que ponemos nuestro empeño. Acompañando lo que entendemos evolución humana, ampliando el alcance del derecho humano, las libertades,

individuales y colectivas, ser en nuestra cultura y fundamentalmente al derecho de una infancia en plenitud e identidad desde nuestras cosmovisiones.

Es nuestra forma de existencia y trabajo hoy día la reconstrucción de nuestra etnia, generando vínculos tanto en lo local como en lo internacional, este último ámbito donde somos queridos, valorados y reconocidos por nuestros indómitos valores multiétnicos por nuestra horizontalidad en la que compartimos nuestro sentipensar.

Organismos internacionales que se han manifestado en apoyo a la ratificación del Convenio 169 OIT por parte del Estado uruguayo. Lo hacen sobre la propia experiencia, los grandes logros, riqueza multiétnica, coexistencia multicultural y respeto por los Derechos Humanos de los pueblos Indígenas, es en lo que han avanzado estos nuevos Estados, que lejos de perder han ganado en conocimientos, en cultura integral, marcos de desarrollo integral y del derecho humano.

Cuando el Estado uruguayo en el año 2009 aprobó la ley 18.589, “Día de la Identidad Indígena”, uno de sus artículos compromete tanto al Poder Ejecutivo como a la Enseñanza Pública a coordinar acciones públicas para informar y sensibilizar a la población sobre el aporte indígena a la identidad nacional y los hechos sucedidos en Salsipuedes en 1831. Estas acciones han sido escasas y casi nulas hoy.

Sin embargo, fue la INDDHH y DP quienes realizaron una real tarea al declarar a Salsipuedes como sitio de memoria y nosotros que voluntariamente venimos trabajando en la difusión de nuestra cultura, nuestros conocimientos y saberes.

Ya desde antes de que se aprobara esta ley veníamos trabajando, a veces en el silencio de nuestras familias, manteniendo viva nuestra cultura, nuestros rituales, nuestros aportes en multiculturalidad multiétnica, al igual que nuestros ancestros sumados al crisol que hizo posible las provincias unidas, esbozo de una primera organización autóctona integradora.

En el silencio de nuestras familias resistimos y persistimos desde la colonia, las reducciones, la “Redota” hasta estos días, pasando períodos oscuros como lo fue la última dictadura, siempre luchando por las libertades individuales, colectivas y los Derechos Humanos conjuntamente con las organizaciones gremiales y sociales.

Nuestro aporte identitario pervivió en usos y costumbres, en el folclore, la cultura gauchesca, en épocas del matreraje, del malevaje, es parte de esa cultura cimarrona que nos caracteriza, pues las libertades y derechos humanos son anteriores a la promulgación de leyes y a su vez ellas se deberían a la salvaguardia del derecho humano intrínseco e inalienable a ser y existir en plenitud.

Estos derechos, a ser y existir en plenitud, es lo que se nos ha negado históricamente.

Pongamos como ejemplo, algunas de las negaciones que se nos impone en la sociedad actual.

Nuestras abuelas y abuelos han seguido curando con yuyos, métodos y rituales. La medicina actual y la ciencia se han apoderado de esos conocimientos, pero insólitamente siguen negando el aporte originario y de dónde surgieron esos conocimientos que son de nuestras ancestras y ancestros que milenariamente desarrollaron y guardaron estos conocimientos

Como se sigue negando el aporte indígena a las libertades de este territorio purpúreo de nuestra sangre cimarrona libertaria, popularmente conocida como la “garra charrúa”, que luchó por liberar al territorio de toda dominación y el bien vivir en naturaleza.

Ese espíritu indómito que trasciende en nuestras epopeyas históricas de resistencia al colonialismo, sensibles y solidarios ante el derecho originario del buen vivir en naturaleza.

Así venimos trabajando voluntaria y solidariamente, así somos recibidos en diferentes ámbitos de esta sociedad actual. Haciendo nuestro aporte en centros de enseñanza, Primaria, Secundaria, Terciaria, Tecnicaturas, Centros de Formación Docente y Especial, Centros MEC, desarrollos de proyectos multiétnicos y multiculturales, exponiendo nuestro arte aquí y en el exterior donde hemos recibido reconocimientos y premiaciones.

Vinculados al INJU, MIDES, ANEP, MRREE y MEC realizando proyectos, exposiciones, charlas, talleres aquí y en el exterior.

Siendo el MEC, quien nos declarara de interés cultural en reconocimiento a nuestro aporte artístico, cultural e identitario.

Vinculados a la INDDHH Y DP y las organizaciones gremiales y sociales que hoy están trabajando en su ámbito natural por el derecho.

Vinculados porque entendemos así fueron nuestros ancestros, porque coexistimos y hoy sentimos que es el momento de que se nos reconozca, en nuestras epopeyas históricas y en nuestro trabajo y contribución multiétnica multicultural e identitaria.

Por otra parte, la República Oriental del Uruguay ratificó La Convención Internacional sobre Derechos de Niñas y Niños UNICEF, el 28 de setiembre de 1990 a través de la ley 16137 que establece Derechos Humanos específicos para niñas, niños y adolescentes.

Si bien por este intermedio reivindicamos en su totalidad la Convención sobre Derechos de Niñas y Niños destacamos los Artículos 8 incisos 1 y 2, Artículos 29 y 30.

Los mismos se refieren claramente a que niñas, niños y adolescentes, crezcan en un ambiente saludable, al derecho a la identidad indígena, así como el respeto a las minorías étnicas, el respeto a las creencias religiosas, el respeto a las culturas, el estímulo a la vida plena, a la solidaridad y al amor.

Que los Estados deben adoptar medidas sobre la salvaguardia de estos Derechos.

Como es sabido, muchos de nosotros somos bisnietos o tataranietos de niñas o niños charrúas de reparto.

Los mismos que trabajaron en el campo en el desarrollo de la ganadería o como domésticos en Montevideo, condición que hoy heredamos casi en las mismas condiciones y términos sociales.

Pues sigue habiendo niñas y niños, gurises de pelo chuzos, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café y patitas en el suelo, en condiciones de pobreza, su identidad originaria negada, sus derechos vulnerados, los postergados de siempre, porque así fue nuestra infancia.

Basta con dar una recorrida por ese triste paisaje, por asentamientos y barrios marginales de la zona metropolitana o esos pueblos apartados del interior para encontrarnos con esa infancia charrúa postergada.

Es por lo expuesto que solicitamos al Estado uruguayo tomar medidas en el cumplimiento a la Convención de Derecho de Niñas y Niños y la ratificación del Convenio 169 OIT.

Ambos Convenios Internacionales vinculados por el mismo contenido legal del derecho humano a ser indígena o tribal y vivir como tal, no ser invisibilizados, segregados, marginados, negados en sus derechos e identidad originaria.

Es lo que entendemos un paso más hacia la evolución humana desde lo Conceptual en Derechos Humanos.

Es por estas múltiples razones que solicitamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo solicite al estado uruguayo a dar cumplimiento a la Convención Internacional de Derechos de niñas niños y Adolescentes UNISEF en referencia a nuestras infancias y Adolescencias, Artículos 8 incisos 1 y 2, Artículos 29 y 30., y a ratificar en convenio 169 de la OIT. Dicho convenio por el que fue consultado este consejo directivo en la Comisión Parlamentaria del Trabajo, a raíz de la Minuta de Comunicación pro ratificación del Convenio 169 de la OIT, que venimos solicitando con el conjunto de la Coordinación de Organizaciones Grupos Comunidades y Clanes Indígenas del Uruguay.

Ateitén oyendau seré udimar dik inambí.

Adhieren a la nota:

CLAN GUBAITASÉ CHARRÚA

COMUNIDAD HUE IT GUIDAÍ

VIVIR CREANDO TACUA OIPIK

L) Documento de FUCVAM

Solicitud a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua(FUCVAM) ha resuelto presentar ante esta XIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos, una solicitud formal de información a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) con el objeto de:

- Conocer los resultados y detalles de la actuación de la INDDHH, específicamente lo relacionado al control, seguimiento y monitoreo de todas las prácticas y medidas del reconocimiento internacional del Estado Uruguayo, muy especialmente con el Estado de Israel; definido este último por la ONU, como potencia ocupante legal, de los territorios del Estado de Palestina (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental) y objeto de múltiples acusaciones y condenas, por parte de diversos países, de organismos internacionales y organizaciones, por la comisión de gravísimos crímenes internacionales contra los derechos humanos de la población de Palestina.

A saber: genocidio, apartheid, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, deportaciones forzadas, limpieza étnica, desapariciones forzadas y un extenso número de prácticas horribles más, contra la población y los prisioneros palestinos.

- Asimismo, y de conformidad con las múltiples recomendaciones y órdenes emanadas de los organismos internacionales competentes la Organización de las Naciones Unidas (de la que Uruguay es Estado Parte) FUCVAM solicita ser informada sobre si la INDDHH, en el ejercicio pleno de sus facultades legales, ha constatado o verificado, desde el inicio de su mandato legal actual, desconocimiento o violaciones por parte del Estado Uruguayo, a sus obligaciones internacionales enumeradas en la Opinión Consultiva, de 9 de julio de 2004, de la Corte Internacional de Justicia y también de la más reciente Opinión Consultiva emitida el 19 de julio de 2024, por la mencionada Corte Internacional.

Lo hacemos desde el profundo convencimiento de que los informes de monitoreo solicitados, cobran importancia y relevancia extrema, a la luz de los trágicos y escalofriantes acontecimientos que se vienen sucediendo y reiterando, desde hace decena de años contra la población civil de Palestina, y que desde el pasado 7 de octubre de 2023, reviste carácter de un deliberado, planificado y atroz genocidio, perpetrando contra toda la población del Estado de Palestina.

Las cifras diarias de asesinatos y masacres contra el pueblo Palestino son espantosamente elocuentes: más de 40.000 muertos (la mayoría de ellos niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos, y ancianos) Al rededor de 100.000 personas heridas y mutiladas, muchas de ellas la componen también, niñas, niños, adolescentes, ancianos, ancianas, y mujeres de diversas condiciones.

Una cifra cercana a los 100.000 desaparecidos, presumiblemente sepultados por las toneladas de escombros y hormigón, que las explosiones de bombas israelíes, desplomaron sobre una población inerme en la llamada Franja de Gaza. A todo esto, se suma la cifra de alrededor de 50.000 personas que ya padecen desnutrición severa y riesgo agudo de fallecimiento por inanición y hambruna, ante la carencia de alimentos suficientes y los obstáculos interpuestos por Israel al ingreso de ayuda humanitaria. 1.500.000 presentan ya, inseguridad alimentaria, amén de enfermedades causadas por la falta de higiene, originada en las restricciones del acceso al agua (casualmente administrada por la empresa MEKROT, la misma que apareció vinculada al Proyecto Neptuno en nuestro país)

Hay que remitirse a pasadas catástrofes humanitarias en el marco de la primera y segunda Guerra Mundiales, para reconocer actos y prácticas, tan siniestras y premeditadas, como las que hoy suceden a diario, y muchas veces transmitidas en vivo, y en directo a través de las llamadas “selfies”, por parte de los propios soldados de Israel, en el paroxismo de la impunidad y la demencia criminal.

La Corte Internacional de Justicia, ya en su Opinión Consultiva de 9 de julio de 2004, alertaba sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio Palestino ocupado y las obligaciones para los estados: entre ellas no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro, no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento de la situación creada para la construcción y hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario que figura en Convenio de Ginebra relativo a la protección debida de personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de agosto de 1949.

El 19 de Julio del presente año 2024, en respuesta a la Resolución aprobada por la Asamblea General, el 30 de diciembre de 2022, la Corte Internacional de Justicia volvió a emitir una nueva Opinión Consultiva en la que concluye:

- La presencia continua del Estado de Israel en el territorio Palestino Ocupado es ilegal.
- El Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en el territorio Palestino Ocupado lo más rápidamente posible.
- El Estado de Israel tiene la obligación de cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a todos los colonos del territorio Palestino Ocupado.
- El Estado de Israel tiene la obligación de reparar todos los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas en el territorio Palestino Ocupado.
- Todos los Estados tienen la obligación de no conocer como legal la situación resultante de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia continua del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado (Todo esto comprende también las empresas privadas y estatales israelíes, u otras que operen en el territorio Palestino Ocupado) (El paréntesis es nuestro)

- Las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen la obligación de no conocer como legal la situación resultante de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado;
- y las Naciones Unidas, en especial la Asamblea General, que solicitó la opinión, y el Consejo de Seguridad, deberían considerar las modalidades precisas y las medidas ulteriores necesarias para poder fin lo antes posible a la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado.

Finalmente, y llegado a este punto, FUCVAM, considera por lo expuesto, suficientemente probada, la necesidad, premura y pertinencia, de su solicitud de información ante esta XIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos y alienta la certeza de que el Directorio de la INDDHH, tomará los debidos recaudos, necesarios para su consideración e implementación.

El pueblo uruguayo, cualquiera sea su condición y confesión religiosa (cristianos, judíos, musulmanes u otras) no se merece ser involucrado contra su voluntad, en ningún acto de odio o de complicidad en crímenes contra la Humanidad, cometidos por el Estado de Israel contra Palestina.

Por último, y modo de cierre, citaremos dos párrafos que revelan, en parte, el profundo y desgarrador sufrimiento de una mujer palestina, en las actuales angustiantes circunstancias:

“Lo primero que siempre salta a la vista, ya desde ese pasado remoto, es la oscuridad de las leyes promulgadas en Israel, para hacer del robo de territorio y vidas, una exclusiva figura legal. La fábrica de leyes rechaza la medida del proyecto sionista resulta en un claro delirio de superioridad ante el otro, ante el vecino anterior a 1948, con el que comparte la misma raíz semita”.

“No, no estamos de acuerdo con el hecho del 7 de octubre, para nosotros toda vida es sagrada. No estamos de acuerdo con el asesinato de ningún civil, como ningún país lo estaría. Ya es hora que la comunidad internacional reconozca que la solución al conflicto más crítico de Oriente Medio no es el final impuesto por sionismo”

Nadia Rasheed- Embajadora del Estado de Palestina en Uruguay.

DIRECCIÓN NACIONAL DE FUCVAM

Montevideo, 28 de Agosto de 2024.

M)Documento de AMUD

Presentación de AMUD ante la XIII Asamblea Nacional de Asociaciones de la INDDHH

Somos integrantes de AMUD, la Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad, creada en marzo de 2000 por Verónica Ruso y un grupo de mujeres que conocían la exclusión social, económica, educativa, e incluso familiar, expresada en diversas circunstancias cotidianas. Se organizaron y trabajaron para tratar de modificar esas realidades.

Hoy, en agosto de 2024, las mujeres y disidencias en situación de discapacidad continúan encontrando múltiples situaciones de exclusión social, debiendo afrontar además nuevas formas de violencia familiar y social.

Quienes levantan las barreras sociales, hegemónicas y patriarcales que experimentan las mujeres, incrementan sus estrategias de dominio cuando la discapacidad se evidencia, y sus decisiones inconsultas respecto al colectivo, reproducen modelos, estereotipos, conceptos, que debieran estar perimidos y que son extremadamente perjudiciales para las mujeres y disidencias.

Las niñas y mujeres con discapacidad deben soportar cotidianamente la violencia en los ambientes familiares, en el transporte, incluso en ambientes sociales como el educativo y el laboral cuando logran acceder a estos.

Las mujeres con discapacidad, mayoritariamente viven la exclusión social y la discriminación, sin recursos, sin formación, sin acceso a la información, sin acceso a la salud, etc.

En estas condiciones, la participación social es un derecho que no pueden ejercer, que les está vedado por la estructura social actual, aunque la Convención y las leyes lo reconozcan.

Ante estas situaciones de vulneración de derechos, consideramos que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo no puede permanecer indiferente. Como en otras instancias, estamos a las órdenes y deseamos que la Institución Nacional facilite instancias de diálogo e intercambio con y entre las organizaciones, para construir entre todas y todos las ineludibles estrategias que modifiquen esta cruel realidad.

M) Documento del Movimiento de Familiares Residentes de Elepem

30 de agosto de 2024 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)

De acuerdo a lo propuesto en la Asamblea realizada el pasado 28 de agosto y recordado por mail, estamos enviando el presente documento relacionado con el ingreso a los establecimientos de larga estadía y el consentimiento informado.

Hay un aspecto jurídico que preocupa mucho al Movimiento Elepem (Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores). Nuestro país ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley 19.430 del 18 de octubre de 2016, la cual en su artículo 12º, referido a los derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado

a largo plazo, hace mención a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.

A partir de la Convención se actualiza la normativa que regula el funcionamiento de los establecimientos de larga estadía en nuestro país, aprobándose el Decreto 356/2016 del 14 de noviembre de 2016. El Artículo 40º de dicho Decreto establece lo que se entiende por consentimiento informado: “Se entiende por consentimiento informado, a los efectos de la presente reglamentación, el documento por el cual se deja constancia que una persona, habiendo sido informada respecto de las condiciones y servicios brindados por el establecimiento, así como de sus derechos, deberes y obligaciones, manifiesta libremente su voluntad de ingresar al mismo en calidad de usuario”.

A su vez el mismo Decreto permite la privación de la capacidad jurídica, ya que prevé en su artículo 28º, literal i), no solicitar el consentimiento si las personas mayores “están cursando un estado de confusión mental, documentado en su historia clínica. Transcurridos seis meses sin haber podido recabar el consentimiento informado, se dará cuenta al Juzgado de Familia que por turno corresponda, a los efectos de tramitar su incapacidad”. Con relación a esta disposición, cabe hacer mención a la actuación de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental en el año 2021. Dicha Comisión hace un planteo expreso ante los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social, señalando que no corresponde la aplicación de dicha norma por haber sido derogada tácitamente por la Ley 19529 de Salud Mental del 19 de setiembre de 2017.

Hasta el momento actual no ha habido cambios y la problemática con relación al consentimiento informado persiste.

Un saludo cordial

Solange Santos

Coordinador General

N) Documento de Movimiento Visibles y Con Derechos Uruguay

XIII Asamblea de Organizaciones de la INDDHH

El Movimiento Visibles y con Derechos Uruguay es una organización de la sociedad civil, integrada por personas que abogamos por la garantía y el ejercicio de los derechos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por Uruguay en el año 2008.

En ese sentido y con la mirada estratégica del eje que nos convoca, debemos mencionar los artículos 29 y 30 de la citada Convención, dado que hacen referencia al derecho a la

participación de las personas con discapacidad en diversos ámbitos: político, cultural, actividades recreativas, de ocio y deportivas.

Encontramos la participación, en su concepción desde la perspectiva de los Derechos Humanos, fundamental para que las personas en situación de discapacidad podamos incidir en la creación de las políticas públicas que nos brindarán la oportunidad de ejercer nuestros derechos y así dignificar nuestras vidas.

Si bien para generar la participación presencial se deben garantizar antes otros derechos: asistencia personal, transporte accesible, accesibilidad física y comunicacional, etc., creemos sumamente sustancial salir de nuestras casas (en la medida que las actuales oportunidades lo permitan) para seguir “imprimiendo” conciencia de que existimos y somos sujetos de derecho. Y de la vía de la participación estaremos involucrándonos en lo que hace a poder vivir nuestras vidas de la manera más independiente o autónoma posible.

Cabe destacar la labor de la Institución Nacional de Derechos Humanos al respetar y hacer cumplir lo que versa el artículo 33 de la Convención, creando el Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la misma y de la mano de este Mecanismo la posibilidad de constituir el Consejo Asesor Honorario de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad. La elección de este Consejo fue propiciada con la asistencia de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC). A través de la plataforma ciudadana fue habilitada la posibilidad de votar desde todos los departamentos que presentaron candidatos y candidatas. El Consejo tiene un alcance nacional, contando con 18 personas en situación de discapacidad y siete familiares de dichas personas. Somos 25 concejales/as de 18 departamentos del país.

Desde nuestro Movimiento vamos a continuar la lucha colectiva para que todos nuestros derechos, sin excepción alguna, sean respetados, garantizados y podamos ejercerlos dentro de una plena diversidad y libertad.

Ñ) Documento de Comité Central Israelita del Uruguay

Señora Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos

Dra. Carmen Rodríguez y

Señores Directores:

Marcos Israel, Jimena Fernández, Wilder Tayler y Bernardo Legnani

P r e s e n t e.-

De nuestra mayor consideración:

El pasado miércoles 28 de agosto en el marco de la XIII Asamblea Nacional de la INDDHH, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) presentó una solicitud formal de información de relacionamiento de nuestro país, muy especialmente con el Estado de Israel.

Dicha solicitud adolece de carencias argumentales jurídicas sustanciales al exigir “en el ejercicio pleno de sus facultades legales” a la INDDHH que establezca “constancias o verificaciones” de “desconocimientos o violaciones por parte del Estado Uruguayo, a sus obligaciones internacionales enumeradas en la Opinión Consultiva del 9 de julio de 2024, de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y también de la más reciente Opinión Consultiva (OC) emitida el 19 de julio de 2024”.

Surge -de manera espontánea- que el Estado Uruguayo no puede estar sometido a obligación alguna por la emisión de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, cuyos alcances se encuentran debidamente establecidos en los artículos 65 a 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El carácter no vinculante de las opiniones consultivas es ampliamente aceptado por la doctrina.

A diferencia de las sentencias pronunciadas por la Corte, en el ejercicio de su competencia contenciosa, las opiniones consultivas dictadas, en ejercicio de su competencia consultiva, no son vinculantes u obligatorias para los Estados, órganos u organismos que aparezcan mencionados en el contenido de la OC.

La Corte así lo determinó “La respuesta del Tribunal es solo de carácter consultivo: como tal, no tiene fuerza vinculante” (I.C.J. Reports 1950, pág. 71).

¿Qué obligaciones puede incumplir aquel que no se encuentra obligado? ¿En qué “desconocimientos o violaciones” puede incurrir el Estado Uruguayo por el alcance de una opinión consultiva de carácter no vinculante? En tal sentido, huelga establecer que lo demandado a la INDDHH excede a sus facultades, particularmente a aquellas competencias establecidas en el art. 4 de la ley N°18.446

Pese a ello, resulta oportuno reseñar que el proceso previo a la solicitud de la opinión consultiva emitida en última instancia (2024) estuvo constituido por una serie de particularidades que bien valen reseñar.

Resultó particularmente llamativa la resolución -patrocinada por Pakistán- del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de establecer una comisión investigadora independiente cuyo apegamiento al principio de imparcialidad encontró inmediatos cuestionamientos y reparos, en particular a la posición asumida por la miembro Navanethem Pillay, quien acusó a Israel -en repetidas oportunidades- de ser un Estado de apartheid, suscribiendo incluso peticiones para que gobiernos nacionales “sancionen el apartheid de Israel”. La conformación de esa comisión, resultó determinante para que un grupo de países elevaran

el caso primero a la Cuarta Comisión de Política Especial y Descolonización de las Naciones Unidas y posteriormente a la Asamblea General.

El procedimiento consultivo estuvo sesgado desde el principio. En diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobó, por 87 votos a favor y 79 en contra, una resolución de nueve páginas que condenaba a Israel en los términos más duros, declarando que casi todas las acciones que ha llevado a cabo violan el derecho internacional y los derechos de los palestinos, y solicitando a la Corte Internacional de Justicia que emitiera un dictamen jurídico sobre las consecuencias jurídicas de dichas violaciones.

La resolución fue redactada y patrocinada por 32 Estados, de los cuales dos tercios no tienen relaciones diplomáticas con Israel y varios no reconocen a Israel como Estado. Fue la 15ª resolución de la Asamblea General que condenaba a Israel ese año, frente a las 13 resoluciones adoptadas contra todos los demás países juntos. (Flasch; Orkaby, 2024)

Cabe consignar que Uruguay -por sostener diferencias en los procedimientos desplegados- se abstuvo de votar sobre la solicitud de opinión consultiva a la CIJ tanto en el ámbito de la Cuarta Comisión como en la Asamblea General. Huelga establecer que entre los patrocinantes y promotores de esta resolución se encontraron países cuyos regímenes lejos están de poder vanagloriarse de su calidad democrática y de defensa de los DDHH, a saber: Arabia Saudita, Botsuana, Corea del Norte, Camboya, Guinea, Guinea-Bissau, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Líbano, Libia, Lesoto, Nigeria, Omán, Qatar, Siria, Somalia, Uganda, Yemen, Yibuti y Zambia.

Es importante señalar que, por sus profundas discrepancias con el procedimiento, forma y fondo de la cuestión, el gobierno del Estado de Israel declinó participar de la instancia interpretando que los más básicos derechos del proceso se encontraban viciados y sesgados: misma postura que ya había adoptado ante similar instancia en el año 2004. Y pese a que la normativa establece que el “Tribunal no puede extraer conclusiones adversas de la decisión de un Estado de no participar en un procedimiento consultivo”, basó su decisión -en gran medida- en informes y asesoramientos abiertamente parcializados.

Por ejemplo, basarse en las conclusiones de una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre cómo la legislación y las políticas israelíes han afectado a los residentes en Jerusalén Este, en lugar de basarse en la legislación y las políticas reales y determinar por sí mismo cómo éstas han afectado a los residentes, es como el Tribunal pudo concluir, en el apartado 165, que “las medidas de Israel en Jerusalén Este crean un entorno inhóspito para los palestinos”, a pesar de que varias encuestas realizadas en los últimos dos años muestran resultados totalmente diferentes. (Flasch; Orkaby, 2024)

Al respecto, y conocida la opinión consultiva emitida por la CIJ, el Estado de Israel a través del Ministerio de Relaciones Exteriores entendió oportuno establecer:

La opinión está completamente desconectada de la realidad de Medio Oriente: mientras Hamás, Irán y otros elementos terroristas están atacando a Israel desde siete frentes - incluidos Gaza y Judea y Samaria- con el objetivo de aniquilarlo, y tras la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, el dictamen ignora las atrocidades que se llevaron a cabo el 7 de octubre, así como el imperativo de seguridad de Israel de defender su territorio y a sus ciudadanos.

El dictamen contradice el principio rector que formó la base de todos los acuerdos de paz y arreglos alcanzados hasta la fecha entre Israel y sus vecinos, según el cual la resolución del conflicto solo será posible mediante negociaciones directas entre las partes. El dictamen solo aleja la posibilidad de resolver el conflicto. La Autoridad Palestina, que inició la medida, no está interesada en la paz, sino en atacar a Israel. La paz solo puede lograrse mediante negociaciones directas entre las partes, y la Autoridad Palestina no podrá eludir esta realidad recurriendo a tribunales internacionales.

Cabe destacar que el dictamen es manifiestamente unilateral. Ignora el pasado - los derechos históricos del Estado de Israel y del pueblo judío en la Tierra de Israel. Está desligado del presente - de la realidad sobre el terreno y de los acuerdos entre las partes. Y es peligroso para el futuro - aleja a las partes de la única solución posible, que son las negociaciones directas.

Además, debe aclararse que la opinión publicada hoy es una opinión consultiva y no es jurídicamente vinculante. El Estado de Israel adhiere al Estado de derecho y tiene un sistema jurídico independiente y respetado. Está comprometido con el derecho internacional y seguirá protegiendo a sus ciudadanos de conformidad con el derecho internacional.

El pueblo uruguayo, cualquiera sea su condición y confesión religiosa, no se merece ser involucrado, contra su voluntad, en ninguna denuncia mentirosa y tendenciosa como la que presentó FUCVAM.

Desde el CCIU confiamos plenamente que el honorable directorio de la INDDHH sabrá darles a los escasos recursos humanos que dispone, el destino que más y mejor le convenga al pueblo uruguayo, en lugar de discriminar al único país judío del mundo.

El Comité Central Israelita del Uruguay remite la presente a los cuatro días del mes de setiembre del año dos mil veinticuatro.

O) Documento titulado Trabajo Infantil en Uruguay – Asociación Civil CIPPUS

Trabajo Infantil en Uruguay

El Trabajo Infantil es una vulneración de los derechos de la infancia, estructurada a partir de factores económicos, culturales e institucionales. Se manifiesta cuando niños, niñas y adolescentes asumen responsabilidades y tareas no acordes con su edad o desarrollo, ya sea

reemplazando o acompañando a adultos, lo que los expone a riesgos físicos y emocionales, y les impide disfrutar de su derecho a la recreación, descanso y educación.

Este fenómeno puede implicar remuneración o no, y suele estar vinculado a estrategias de supervivencia familiar, ocurriendo tanto dentro como fuera del núcleo familiar.

El trabajo infantil en Uruguay es un fenómeno que atraviesa todo el país, manifestándose de diferentes maneras según el ámbito en el que ocurre, rural, urbano, doméstico, no doméstico. Una de las características es su invisibilidad, ya que acompaña la actividad laboral de la familia y si se desarrolla dentro del ámbito doméstico (sobre todo realizado por niñas y adolescentes) es más complejo detectarlo. Habitualmente, este tipo de trabajo se desarrolla en sectores informales de la economía, asociados a empleos precarios y múltiples factores de riesgo para los NNA involucrados.

En contextos de vulnerabilidad, el trabajo infantil es frecuentemente visto de manera positiva, bajo argumentos como:

Prevención de Conductas Delictivas: Se considera preferible que los niños trabajen a que estén "en la calle", involucrados en "drogas" o participando en actividades delictivas.

Contribución Familiar: El trabajo infantil es justificado como una forma de apoyar económicamente al hogar, especialmente en situaciones de necesidad.

Preparación para el mundo del trabajo; cuanto más temprano sea el ingreso al mercado laboral más preparados van a estar

Estas percepciones contribuyen al abandono escolar, limitando las oportunidades de desarrollo personal y perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad.

Diversos elementos contribuyen a la persistencia y complejidad del trabajo infantil en Uruguay:

Informalidad Económica: La prevalencia de trabajos informales facilita la incorporación de NNA al mercado laboral sin protección adecuada.

Crecimiento de la Pobreza y de la desigualdad: La falta de recursos impulsa a las familias a depender del ingreso generado por los NNA.

Omisión de Normativas: La falta de cumplimiento y aplicación de leyes nacionales e internacionales de protección infantil permite la continuidad de este fenómeno.

Falta de Demanda Social: La ausencia de movilización pública y ciudadana reduce la presión para implementar medidas efectivas contra el trabajo infantil.

Deterioro de Servicios Básicos: La baja calidad educativa y de salud, junto con la falta de pertinencia de estos servicios, limita las alternativas disponibles para los NNA y sus familias

Deterioro de Derechos Laborales: La falta de protección y respeto por los derechos laborales en general contribuye a la explotación de mano de obra infantil.

Demanda de Mano de Obra Infantil: Algunos sectores económicos buscan específicamente emplear niños debido a costos más bajos y mayor control sobre la fuerza laboral.

El trabajo infantil no solo perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad, sino que también puede estar vinculado con el crecimiento de la demanda del micro y gran narcotráfico de mano de obra de NNA con la consecuencia más visible que se ha dado y que mayor impacto ha generado el aumento de la violencia y la muerte de niños, niñas y adolescentes en situaciones de explotación, fenómeno que se ha dado en familias más vulnerables y que viven en barrios más pobres de nuestro país.

Exposición a Ambientes Violentos: Los NNA que trabajan en condiciones de explotación están a menudo expuestos a ambientes violentos, ya sea por la naturaleza del trabajo, la interacción con adultos que también viven en condiciones de precariedad, o por la vulnerabilidad inherente a estar fuera del sistema educativo y de protección.

Explotación y Abuso: La explotación laboral de NNA está frecuentemente acompañada de abuso físico, emocional y, en algunos casos, sexual. La falta de supervisión y protección adecuada deja a estos niños y adolescentes indefensos frente a estos riesgos. Falta de

Protección Institucional: La debilidad de los sistemas de protección infantil agrava la situación, dejando a los niños en condiciones de explotación sin las herramientas ni el apoyo necesario para escapar de estos entornos. En situaciones extremas, esto puede conducir a la muerte, ya sea por accidentes laborales, violencia directa o como resultado del deterioro de su salud física y mental.

Círculo de Violencia: La violencia vivida por estos niños y adolescentes no solo pone en riesgo su vida inmediata, sino que también contribuye a un ciclo de violencia que puede extenderse a sus futuros hogares y comunidades, perpetuando la violencia intergeneracional.

Uruguay ha firmado una serie de convenios internacionales, cuenta con amplia legislación en el tema, inclusive cuenta con una legislación específica para combatir la explotación y la trata de personas, que incluye disposiciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes del trabajo forzoso y otras formas de explotación, pero dicha ley no se menciona al momento de hablar de trabajo infantil y de muchas de las situaciones que viven una gran cantidad de NNA más vulnerables

Protección de los Derechos de los NNA:

La ley establece medidas para identificar, proteger y asistir a las víctimas de trata y explotación, incluyendo a los NNA que son forzados a trabajar en condiciones peligrosas y abusivas.

Prevención y Sanción: Se incluyen disposiciones para prevenir la trata de NNA y sancionar severamente a quienes exploten a niños y adolescentes, ya sea en el ámbito laboral, sexual o cualquier otra forma de explotación.

Reducción de la Violencia y Mortalidad: Al enfocar la ley en la prevención de la explotación, se busca reducir la violencia y mortalidad asociadas al trabajo infantil, protegiendo a los niños más vulnerables de ser víctimas de estas prácticas. Esto incluye la creación de programas de apoyo y rehabilitación para los NNA detectados en estas situaciones.

Fortalecimiento de los Sistemas de Protección: La legislación también busca reforzar los sistemas de protección infantil, asegurando que los niños no caigan nuevamente en situaciones de explotación y garantizando su acceso a educación, salud y un entorno seguro.

Las situaciones que viven muchos de nuestros NNA de violencia y la muerte, temas que resuenan fuertemente con la realidad que enfrentan muchos niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de explotación en Uruguay. Se ha ido naturalizando y justificando dicho fenómeno bajo términos como ajustes de cuentas, enfrentamientos de bandas, etc. Estos NNA se encuentran atrapados en entornos de violencia y explotación que parecen ineludibles. La cruda realidad de sus vidas es un reflejo directo de los relatos de muerte, donde la esperanza se ve coartada por la brutalidad del entorno. La violencia y la muerte pueden llegar a ser parte de la vida cotidiana de las personas, un ciclo que también se observa en la vida de estos niños, donde la explotación laboral no solo destruye su presente, sino que también amenaza con perpetuar la violencia y la pobreza en las generaciones futuras. Se plantea como un espejo de nuestra realidad social, donde la marginalidad y la explotación llevan a finales trágicos para los más vulnerables. Este vínculo subraya la necesidad urgente de abordar el problema del trabajo infantil desde múltiples frentes, incluyendo la aplicación de leyes y la construcción de sistemas de protección social más sólidos.

La fragilidad de los sistemas de protección infantil exacerba la situación, la falta de respuesta del Estado frente al crecimiento de la violencia en diferentes territorios, así como la desarticulación de las respuestas frente a la violencia social y comunitaria, apareciendo como única respuesta la represiva.

Uruguay cuenta con fuertes carencias para enfrentar el trabajo infantil, ausencia de instituciones que generen política pública en el tema. El Comité de erradicación del Trabajo Infantil es un espacio de articulación interinstitucional (Mides, MTSS, Anep, Asse, INAU, Anong, etc) que no genera políticas para la erradicación y prevención del Trabajo Infantil. Dentro de INAU existe el Área de Inspección del Trabajo Infantil, que solo se encarga de la fiscalización por lo que tampoco aporta políticas públicas con respecto al tema.

El trabajo infantil debe ser abordado tanto desde la prevención, detección, intervención, protección y restitución de derechos. Uruguay carece de instituciones que lo tengan como

prioridad en la agenda, que desarrollen líneas de acción articuladas y que protejan a nuestros NNA.

Tampoco existen recursos humanos calificados, por lo que no existe una priorización de la temática en la agenda de las instituciones involucradas en las diferentes etapas para la erradicación y prevención.

No existen protocolos de actuación ni dentro de INAU, ni en la educación ni en los agentes de salud, por lo que se complejiza mucho su detección y poder dimensionar las afectaciones que tiene en NNA tanto a nivel de salud como educativos.

Existe solo un CETI a nivel nacional, no existiendo ninguno por departamento o al menos por región que pueda contemplar las diferentes realidades de los territorios. Por lo que tampoco están involucrados los gobiernos departamentales.

Tanto a nivel social como político está muy naturalizado el trabajo infantil, sin entender las consecuencias que generan a todo nivel en el presente y futuro de esos NNA, la mayoría de los trabajadores informales fueron trabajadores infantiles. Genera también problemas que se perpetúan cuestiones de género, ya que son las niñas y las adolescentes que desarrollan las tareas domésticas y de cuidado dentro del hogar tanto de sus hermanos como de sus adultos que requieren cuidado por vejez o discapacidad.

La ausencia de datos actualizados, la última encuesta es de 2010 y hablaba de entre 65.000 y 85.000 NNA en situación de trabajo infantil. Eran 85.000 si se incluía el trabajo infantil doméstico y de cuidados.

La falta de una perspectiva de derechos y una visión tutelar de las infancias, con un crecimiento de una culpabilización de las familias más vulnerables y de una perspectiva de retroceso en los derechos. El crecimiento de la desigualdad, de la pobreza, de la informalidad, de armas ilegales cada vez más letales, del micro y gran narcotráfico, dónde Uruguay dejó de ser un país de tránsito de drogas para ser un país de distribución y logística. Si a esto le sumamos la ausencia de espacios de cuidado para nuestros NNA, el corrimiento del Estado del territorio, dejan a las familias más vulnerables más expuestas lo que dificulta la construcción de entornos protectores y seguros para los niños.

P) Documento de la Asociación Uruguaya de Parkinson

Montevideo, 3 de setiembre de 2024.

Sra. Presidenta del INDDHH

Sra. Carmen Rodríguez

De nuestra mayor consideración:

Las abajo firmantes, en su carácter de Presidenta y Secretaria de la Asociación Uruguaya de Parkinson, nos presentamos ante usted y la Dirección del Instituto, y en virtud de la realización de la XII Asamblea Nacional de Derechos Humanos, para que quede registrada nuestra solicitud ante la misma.

Nuestra solicitud, es que se reconozca y declare a la Enfermedad de Parkinson como una Enfermedad Crónica.

Este trámite lo iniciamos ante el Ministerio de Salud Pública el 16 de Julio de 2010.

En el año 2014 presentamos la misma ante el INDDHH.

Desde entonces, hemos reiterado el mismo planteo, que contó con el visto bueno de la Ministra de Salud Pública en 2014, Dra. Susana Muniz y el Ministro de Salud Pública de 2020, Dr. Daniel Salinas, pero por distintos motivos aún no hemos logrado que ese acuerdo con nuestro planteo se transforme en reconocimiento legal.

En el estudio realizado por el Banco Mundial y el M.S.P. de Uruguay el año 2023, sobre “La enfermedad crónica (EC) y la multimorbilidad en Uruguay es un análisis de la situación actual y propuesta para optimización el modelo de atención.

Proyecto Mejora de la gestión de los servicios de salud para personas con múltiples enfermedades crónicas en tres países de América Latina – Brasil, Colombia y Uruguay” se establecen las características en la atención a la Enfermedad Crónica.

El seguimiento y manejo de la EC puede implicar para el paciente y su entorno todos o algunos de la siguiente serie de eventos:

- Adherir a una rutina de citas de seguimiento con un profesional médico de cabecera.
- Asesoramiento de varias profesiones asistenciales.
- Medicamentos diarios o periódicos.
- Medicamentos en momentos de agudización de la EC según sea necesario.

- Estudios y controles periódicos de laboratorio más o menos frecuentes, tanto por la EC de base como por el uso de medicación permanente o coyuntural.
- Estudios de imágenes como radiografías, resonancias magnéticas, ecografías, etc.
- Cambios en la dieta.
- Cambios en rutinas de actividad física.
- Cambio de hábitos.
- Terapia física y ocupacional.
- Adhesión a estrategias de bienestar y/o apoyo a la salud mental.

En la página del M.S.P. encontramos:

“¿Qué enfermedades son consideradas crónicas?

Las enfermedades crónicas casi siempre se presentan en adultos mayores y a menudo se controlan, pero no se curan. Los tipos más comunes de enfermedades crónicas son el cáncer, la cardiopatía, el accidente cerebrovascular, la diabetes y la artritis.”

Posiblemente haya algunas más, pero el Parkinson no está incluida, siendo que el Parkinson es una enfermedad NEURODEGENERATIVA, PROGRESIVA Y CRÓNICA.

En la Asociación Uruguaya de Parkinson colaboramos con las personas que padecen esta enfermedad por medio del voluntariado, brindamos información, material bibliográfico y nuestra experiencia con nuestro esfuerzo honorario, y el de 13 profesionales voluntarios.

Es importante remarcar que no cobramos a las personas que atendemos, y sobrevivimos gracias a socios que aportan voluntariamente.

Varios miembros de esta organización hicieron el curso de Derechos humanos que la Institución brinda, para entender si nuestra solicitud no está dentro de su órbita, pero entendemos que sí.

Por todo esto, es que esta Asociación Uruguaya de Parkinson colabora con el Estado en llevar la rehabilitación a distintos puntos del país.

Entendemos que nadie desconoce que la Enfermedad de Parkinson está, en la realidad, dentro de las enfermedades crónicas, que requiere medicamentos, estudios, rehabilitación, discapacidad progresiva, pérdida de calidad de vida, por lo que estamos contemplados en:

“El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN: Artículo único.-Apruébese la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención de las Personas con Discapacidad, adoptado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 13 de diciembre de 2006”

La ley 18776 en los artículos 25 y 26 dice que todos los discapacitados tienen derecho a la salud y a la rehabilitación.

Pero en el caso de las personas con Enfermedad de Parkinson, no se cumple ni el Decreto ni la Ley.

Estamos convencidos que lo que estamos reclamando es un Derecho Humano fundamental, y como tal, es que solicitamos que el INDDHH que usted preside se manifieste a favor de esta solicitud y nos acompañe en los pasos necesarios a lograrlo.

Agradecidos por su atención, quedamos a las órdenes para ampliar la explicación y esperamos establecer una comunicación con el INDDHH, para saber su opinión.

Por la AUP

Alba Sica

Ana María Martínez

Presidenta Secretaria

Q) Documento de CTU

XIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos

1. ***Difusión Inadecuada sobre Salud Mental en Mesas de Trabajo***: Se observa una carencia en la difusión relacionada con la salud mental en las mesas de trabajo, lo que dificulta la participación y asistencia de interesados en la materia.

2. ***Falta de Canales Accesibles para Denuncias***: Existe una necesidad de crear canales de denuncia más accesibles y cercanos a la sociedad civil. Asimismo, se requiere una mayor presencia en las zonas fronterizas, donde los derechos humanos son frecuentemente vulnerados, especialmente en lo referente a la trata de personas. Preocupante Falta de Incidencia en el Interior. La falta de incidencia en las áreas rurales

3. ***Ley de Internación Compulsiva***: A partir del 25 de agosto de este año, entra en vigor la ley de internación compulsiva. Es fundamental definir y discutir la postura de los derechos humanos respecto a esta legislación.

4. ***Carencia de una Unidad sobre Género y Diversidad***: Se destaca la falta de una unidad o sector especializado en género y diversidad, considerando que la población trans es una de las más segregadas en este ámbito.

5. ***Creación de una Mesa de Disidencias Genéricas***: Es imperativo solicitar la creación de una mesa de disidencias genéricas dentro del organismo, con el objetivo de asegurar una verdadera interseccionalidad y paridad en su composición. Esta mesa debe facilitar la articulación con otras áreas de trabajo para consolidar nuevas prácticas y políticas que favorezcan a esta población, promoviendo así la transversalidad en las iniciativas.

Dicho espacio debería estar compuesto por organizaciones que contengan al menos un 75 % de participación en las tomas de decisiones por parte de la comunidad disidente del género como así también deberán ser representadas en dicha mesa exclusivamente por la identidad que representan (personas trans)

6. ***Perspectiva Académica y Falta de Interseccionalidad***: Se cuestiona la mirada predominantemente académica que domina el tratamiento de estos temas, la cual carece de interseccionalidad y resulta en enfoques poco empáticos. La falta de renovación y apertura dentro de las organizaciones impide el progreso y la implementación de cambios efectivos. Se insta a una renovación en estos aspectos.

7. ***Interseccionalidad en la Mesa de Discapacidad***: Existe una duda sobre si la mesa que aborda la discapacidad está debidamente interseccionalizada. No es lo mismo una persona trans en situación de discapacidad que una infancia o una persona racializada en situación de discapacidad.

8. *** Invitamos a pensar que, cada uno de los ejes temáticos, cada una de las problemáticas abordadas, deben ser tratadas con perspectiva interseccional en el más amplio sentido, entendiendo particularmente que las disidencias del género estamos transversalizadas por todas ellas**



Institución Nacional
de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Bulevar Artigas 1532, Montevideo
Tel. (+598 2) 1948
www.inddhh.gub.uy
secretaria@inddhh.gub.uy

